

40ª REUNION — 7ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA (ESPECIAL) —  
NOVIEMBRE 18 Y 19 DE 1973

Presidencia de los señores diputados Isidro J. Odena, Luis Antonio  
García y Carlos Palacio Deheza

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavia  
Prosecretarios: Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo

ACEVEDO, Carlos Luis  
ACUNA, Hipólito  
AGUIRRE, Mario D.  
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.  
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo  
AMADO SALEME, José  
AMAOLÓ, Mario O.  
AMAYA, Mario Abel  
AMERISE, José Carmelo  
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo  
ARATA, Juan Carlos  
ARIANI, Adriano  
ARIGOS, Ramón Eduardo  
ARRAYA, Jorge Francisco  
ARRÚE, Willebrordo  
ASMAE, Ramón  
AUYERO, Carlos Alberto Camilo  
AVILA, Agustín Alfredo  
BAJCZMAN, Raúl I.  
BARBARO, Julio D.  
BARRIONUEVO, Roque R.  
BARTOMIOLI, Héctor Luis  
BEHERAN, Arnoldo Mario  
BELLISIO, Victorio Alberto  
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto  
BLANCO, Manuel  
BONAS, Abraham Efraim  
BONIFATTI, Arolinda S. A.  
BORRAS, Raúl Antonio  
BRAVO, Carlos Alberto  
BRAVO, Federico S.  
BRITO LIMA, Alberto  
BUSACCA, Salvador F.  
BUSTOS, Tomás Roberto  
CABANA, Manuel I.  
CABEZAS, José Humberto  
CALABRESE, Pablo  
CAMPBELL, Oscar S.  
CAMPOS, Ernesto Manuel  
CAMUS, Jorge M.  
CAPILLO, José  
CARDENAS, Juan Carlos  
CARRAI TOLOSA, Humberto  
CARRERAS, Ruperto R.  
CASAZZA, Luis Angel  
CASTELLANO, Hugo Luis  
CATALANO, José Armando  
CITATI, Angel  
COLELLO, Clemente J.  
COMÍNGUEZ, Juan Carlos  
COSTARELLI, José

CROATTO, Armando Daniel  
CROCCO, Luis Ferdinando  
CHAQUIREZ de PALACIOS, María  
D'ANGELO, Lorenzo Francisco  
DAVICO, Miguel Angel  
DAY, Alberto Ricardo  
DE APARICI, Ricardo José Manuel  
DE LUCA, Ricardo  
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo  
DÍAZ ORTIZ, Santiago Francisco  
EQUIKEUN, Enrique  
ESPECHE, Juan Bautista  
ESPONDABURU, Raúl Horacio  
ESQUIVEL, Faustino  
FADUI de SOBRINO, Esther Mercedes  
FALABELLA, Francisco José  
FARIAS, Eduardo Isidro  
FERNANDEZ, Juan Máximo  
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano  
FERNANDEZ GU, Guillermo Carlos  
FERNANDEZ VALONI, José Luis  
FLORES, José María F.  
FONTE, Carlos A.  
FRANCO, Hugo Armando  
FRESCHI, Pedro José  
FUENTES, Pedro Alfredo  
GAITAN, Adelmo Alberto  
GALVAN, Raúl Alfredo  
GALLO, Carlos R.  
GANEM, Héctor  
GARCIA, Luis Antonio  
GARONA, Alberto A.  
GARRÉ, Nilda Celia  
GASS, Adolfo  
GIMENEZ, Nicolás Alberto  
GLELLEL, Jorge  
GOLE, Tomás Juan B.  
GONZALEZ, Ricardo A.  
GRAU, Mario Agustín  
GUALCO, Jorge Nelson  
GUERRERO, Antonio Isaac  
HAIEK, José  
HUEYO, Horacio  
HUGHES, Gilbert  
IMBAUD, Carlos Alfredo  
INSÚA, Carlos Raúl  
ITURRIETA, Anibal A.  
KELLY, Rodolfo Feliciano  
KUNKEL, Carlos Miguel  
LABAKE, Juan Gabriel  
LASTIRI, Raúl Alberto

LAIRUFENSE, Francisco Alberto  
LAVALLE, Mario  
LAZZARINI, José Luis  
LENCINA, Luis A.  
LEPEZ, Cysis Augusto  
LIMA, Hugo Ramón  
LITERAS, María Haydée A. de  
LOPEZ, Domingo  
LOPEZ, Horacio Fidel  
LOPEZ, Miguel Angel  
LORENCES, Mariano Rufino  
LUCENA, Luis Arnaldo  
LUMELLO, José Erio  
MACRIS, Antonio J.  
MALDONADO, Clemente  
MARINO, Rafael Francisco  
MARQUEZ, Alfonso Carlos  
MARTINEZ, Pedro Nicolás  
MARTOS, Mario Saúl  
MASSOLO, Eduardo A. R.  
MASTOLORENZO, Vicente  
MAUHUM, Fernando Hugo  
MERA FIGUEROA, Julio T.  
MERCHENSKY, Marcos  
MIGLIOZZI, Julio Alberto  
MIGUEL, Pedro Honorio  
MIRA, Jesús  
MOLINA, Gilberto H.  
MOLINA, Manuel Isaura  
MOLINA ZAVALIA, Armando  
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto  
MONACO, Horacio Miguel  
MONTERO TELLO, Régulo L.  
MORENO, Antonio E.  
MORENO FERRER, José Carlos W.  
MORINI, María Teresa Mercadri de  
MOYANO, Francisco J.  
MUNIZ GARRETO, Diego  
MUSACCHIO, Vicente Miguel  
MUSSO, Eufemia  
NATALE, Ricardo T.  
NICOLICHE, Lisardo Oscar  
NO-IGLIA, Plácido Enrique  
ODENA, Isidro J.  
OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio  
PALACIO DEHEZA, Carlos  
PARENTE, Rodolfo Domingo  
PASCUAL, Paulino Rubén  
PATALAGOITIA, Osvaldo E.  
PAZ, Guido Ulises  
PEDRINI, Ferdinando

PEREIRA, Antonio  
 PONCE, Rodolfo Antonio  
 PORTO, Jesús E.  
 RABANAL, Rubén Francisco  
 RACCHINI, Juan Nicolás  
 RAFAEL, Juan  
 RAMÍREZ, Juan Manuel  
 RATTI, Luis Carlos  
 RITVO, Miguel  
 RIZO, Eusebio Víctor  
 RODRÍGUEZ, Alfredo S.  
 RODRÍGUEZ FLORES, Argentina  
 ROJAS, Ramón Pablo  
 ROLANDO, Esteban Domingo  
 ROMÁN, Irene Graciela  
 ROMERO, Carlos Alberto  
 ROMERO, Juana N.  
 ROSAS, Alberto Horacio  
 ROTA, Silvana María I.  
 RUBEO, Luis  
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo  
 SALIM, Luis  
 SALOMÓN, Jorge  
 SALVADOR, Nicolás  
 SALVATIERRA, Julio Domingo  
 SAMBUEZA, Osvaldo  
 SÁNCHEZ AHUMADA, Luis Alberto  
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio  
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo  
 SANGUINETI, Virginia Luisa  
 SARLI, Osvaldo Raúl

SAÚL, Roberto  
 SERVINI GARCIA, Clara Cristina  
 SILVA, Analicio  
 SLAMOVITS, Ludovico  
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto  
 SOLANA, Jorge D.  
 STECCO, Alberto Eleodoro  
 SUÁREZ, Humberto F.  
 SUÁREZ, Leopoldo M.  
 SUELDO, Horacio Jorge  
 SULETA DE ARRAYA, Arminda  
 SVRSEK, Enrique A.  
 TACHELLA, Eliberto S. J.  
 TAGLIAFERRO, Jorge  
 TOLLER, Roberto Lino  
 TRÓCCOLI, Antonio A.  
 VACCAREZZA, Eduardo H.  
 VALENZUELA, Héctor R.  
 VALERI, Salvador  
 VÁZQUEZ POL, José  
 VERGARA, Roque Antonio  
 VESCO, José Luis  
 VIDAÑA, Roberto  
 VILLADA, Mario Anselmo  
 VILLALBA, Bernardo Samuel  
 VINARDELL MOLINERO, Miguel  
 VINTI, Carmelo  
 VITTAR, Rodolfo Oscar  
 ZAMANILLO, José Miguel  
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

## AUSENTES, CON AVISO:

ARANA, Tomás Pedro  
 ARBO, Tomás Ameghino  
 AZURMENDI, Ernesto  
 BALESTRA, Ricardo Ramón  
 COSSY ISASI, Edgar  
 ESTIGARRIA, Agustín Tomás  
 FALU, Ricardo Munir  
 FERREYRA, Jorge Washington  
 GUZMAN de ANDREUSSI, María Cristina  
 HARRINGTON, Luis José D.  
 LLANO, Juan Pedro  
 LLORENS, Roberto Oscar  
 MOMBELLI, Fausto J.  
 MONSALVE, Evaristo A.  
 MORAL, Angel  
 PETRUCELLI, Agustín  
 PORTERO, Héctor  
 SANDLER, Héctor Raúl  
 SILEONI, Nelo I.  
 TRABOULSI, Eduardo Elías  
 TULA DURÁN, Joaquín  
 URDINEZ de VOLPE, Clotilde Isolina

## AUSENTES, CON LICENCIA:

ARCE, Rodolfo Juvenio  
 FERNÁNDEZ, Dante Dionisio  
 MARTÍNEZ, Juan Antonio  
 NARANJO, Decio B.  
 SARBOLI, Rubén Juan  
 VIALE, Jorge Omar

## SUMARIO

- 1.—Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 3648.)
- 2.—Convocatoria a sesión especial para considerar el proyecto de ley en revisión por el que se autoriza al señor presidente de la Nación a viajar al exterior, y la situación política de la provincia de Formosa. Se acepta. (Pág. 3648.)
- 3.—Plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria para la sesión especial del día de la fecha. (Pág. 3649.)
- 4.—Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión por el que se concede permiso al señor presidente de la Nación para ausentarse del país en el período comprendido hasta el 31 de diciembre próximo. Se sanciona definitivamente. (Pág. 3649.)
- 5.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión sobre intervención a la provincia de Formosa a los fines de su normalización institucional y de la reorganización de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. (Pág. 3651.)
- 6.—Moción del señor diputado Suárez (L. M.) para que se invite al señor ministro del Interior a concurrir a la presente sesión con el objeto de informar sobre el problema suscitado en la provincia de Formosa. Se rechaza. (Pág. 3659.)
- 7.—Continúa la consideración del dictamen que se registra en el punto 5 de este sumario. (Pág. 3659.)
- 8.—Cuestiones de privilegio planteadas por los señores diputados Díaz Ortiz y Guerrero con motivo de expresiones vertidas por el señor diputado

Fernández Bedoya en el curso del debate sobre intervención a la provincia de Formosa. Pasan a comisión. (Pág. 3692.)

- 9.—Termina la consideración del dictamen a que se refiere el punto 5 del sumario. Se sanciona definitivamente. (Pág. 3694.)

- 10.—Apéndice:  
 Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 3699.)

—En Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre de 1973, a la hora 21:

## 1

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Odena).**—Queda abierta la sesión con la presencia de 150 señores diputados. Invito al señor diputado por el distrito electoral del Neuquén, don Ramón Asmar, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y los concurrentes a las galerías, el señor diputado Ramón Asmar procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

## 2

## CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL

**Sr. Presidente (Odena).**—Por Secretaría se va a dar lectura del pedido de celebración de sesión especial y de la resolución de la Presidencia.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El pedido de celebración de sesión especial dice así:

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973.

*Al señor vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor D. Isidro J. Odena*

S/D.

Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle la citación del cuerpo a sesión especial, a realizarse el próximo domingo 18 de noviembre a las 19 horas, con el fin de tratar la autorización al excelentísimo señor presidente de la Nación para viajar al exterior y la situación política e institucional en la provincia de Formosa.

Saludamos al señor vicepresidente 2º con distinguida consideración.

*Ferdinando Pedrini. — Arolinda S. A. Bonifatti. — Julio D. Bárbaro. — Esther Mercedes Fadul de Sobrino. — Virginia Luisa Sanguinetti. — Humberto Carral Tolosa. — Alberto Eleodoro Stecco. — Raúl I. Bajczmar. — Luis Ferdinando Crocco. — Eduardo Isidro Farias. — José Armando Catalano. — Luis Antonio García. — Carlos Alfredo Imbaud.*

Como consecuencia de este pedido, la Presidencia de la Honorable Cámara dictó la siguiente resolución:

Visto la presentación del señor diputado Ferdinando Pedrini y otros, por la que solicitan se cite a la Honorable Cámara a celebrar sesión especial el próximo domingo 18 de noviembre a las 19 horas, con el objeto de tratar la autorización al excelentísimo señor presidente de la Nación para viajar al exterior, y la situación política e institucional de la provincia de Formosa; y

**CONSIDERANDO:**

Que dicha presentación se halla encuadrada en las disposiciones del artículo 35 del reglamento de la Honorable Cámara y en virtud de lo dispuesto por el artículo 36 del mismo;

*El vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

**RESUELVE:**

Citar a la Honorable Cámara a celebrar sesión especial el domingo 18 del corriente mes a las 19 horas, a los fines indicados precedentemente.

Sala de la Presidencia, 16 de noviembre de 1973.

Se ha cursado la correspondiente citación a cada señor diputado.

**Sr. Presidente (Odena).** — La Honorable Cámara debe decidir si se acepta la realización de la sesión especial con el objeto indicado.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

3

**PLAN DE LABOR**

**Sr. Presidente (Odena).** — El plan de labor aprobado por la Comisión de Labor Parlamentaria comprende los asuntos incluidos en la convocatoria. Además se ha resuelto en el seno de la Comisión Parlamentaria que se voten por partes los dos puntos de la convocatoria. Después de haberse votado la primera parte, la Honorable Cámara realizará un breve cuarto intermedio para facilitar las consultas pertinentes que debe hacer la Comisión de Labor Parlamentaria en relación con la segunda etapa de la convocatoria.

—Asentimiento.

4

**PERMISO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION**

**Dictamen de comisión**

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto venido en revisión por el que se concede al excelentísimo señor presidente de la Nación el permiso que solicita para ausentarse del país en el período comprendido hasta el 31 de diciembre del corriente año, inclusive, cuando razones de gobierno lo indiquen; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña, y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 18 de noviembre de 1973.

*Luis Antonio García. — Carlos Alberto Camilo Auyero. — Mario D. Aguirre. — José Armando Catalano. — Francisco José Falabella. — Raúl Alfredo Galván. — Ricardo A. González. — Mario Agustín Grau. — Hugo Ramón Lima. — Domingo López. — Francisco J. Moyano. — Julio Domingo Salvatierra. — Leopoldo M. Suárez.*

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Concédese al excelentísimo señor presidente de la Nación el permiso que solicita para ausentarse del país en el período comprendido hasta el 31 de diciembre del co-

Con estas palabras, señor presidente, nuestro bloque va a votar afirmativamente el pedido solicitado. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Vinti.

**Sr. Vinti.** — Señor presidente: el bloque de la Unión Popular va a votar favorablemente el pedido de que se autorice al señor presidente de la Nación a ausentarse del país.

Nuestro bloque comparte los conceptos de los diputados preopinantes, y entre ellos la preocupación expuesta por el representante de la Unión Cívica Radical, pues efectivamente en el país que el señor presidente de la República va a visitar no están funcionando en plenitud los resortes constitucionales. Pero también es importante, como ha dicho el señor diputado Sueldo, la expresión de esta Cámara respaldando la gestión del señor presidente para que el ejemplo argentino cunda en todos los países que habrán de ser visitados y esos pueblos vuelvan a reencauzarse dentro de un orden constitucional como el que nosotros hemos alcanzado después de dieciocho años de lucha.

Por lo expuesto, señor presidente, nuestro bloque apoya decididamente la autorización solicitada. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Gill.

**Sr. Fernández Gill.** — Señor presidente: el bloque de la Alianza Popular Federalista también va a dar su apoyo a esta iniciativa, dejando expresa constancia de que no lo hace solamente por razones formales sino porque comparte plenamente la política de apertura hacia el exterior, que espera se traduzca en hechos realmente positivos no sólo para nuestro país sino para la concreción de las aspiraciones de todos los pueblos latinoamericanos.

Ese es, pues, el sentido del voto afirmativo que habrá de dar el bloque de la Alianza Popular Federalista (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Colello.

**Sr. Colello.** — He pedido la palabra para dejar sentada nuestra adhesión a esta gira de la hermandad que trata de realizar el señor presidente de la República en la seguridad de que todos los argentinos responderemos cabalmente. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

**Sr. Salomón.** — Señor presidente: en nombre del bloque justicialista deseo hacer resaltar que con las opiniones vertidas por los señores diputados representantes de los distintos bloques que integran esta Cámara se está dando un ejemplo magnífico de solidaridad a la gestión de integración latinoamericana que ha iniciado el gobierno que preside el teniente general Perón (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Odena).** — Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

**Sr. Presidente (Odena).** — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— El artículo 2º es de forma.

**Sr. Presidente (Odena).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley (1). Se comunicará al Poder Ejecutivo y al Honorable Senado.

Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio durante veinte minutos.

— Se pasa a cuarto intermedio a las 21 y 15.

**Sr. Pedrini.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

**Sr. Pedrini.** — Habiéndose cumplido con exceso el plazo previsto para el cuarto intermedio, si hay número suficiente para sesionar, formulo indicación de que prosiga la sesión.

**Sr. Presidente (Odena).** — Habiendo número suficiente, continúa la sesión.

Se va a pasar a considerar el punto segundo de la convocatoria a sesión especial.

5

## INTERVENCION A FORMOSA

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara intervenida la provincia de Formosa, a los fines de su normalización institucional y de la reorganización de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la Comisión, 18 de noviembre de 1973.

Luis Antonio García. — Carlos Alberto Camilo Auyero. — Mario D. Aguirre. — José Armando Catalano. — Ricardo A. González. — José Luis Lazzarini. — Hugo Ramón Lima. — Domingo López. — Julio Domingo Salvatierra. — Ricardo Arturo Sangiacomo.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

*En disidencia total:*

*Raúl Alfredo Galván. — Mario Agustín Grau. — Leopoldo M. Suárez.*

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1973.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Declárase intervenida la provincia de Formosa a los fines de su normalización institucional y de la reorganización de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Art. 2º — Los gastos que ocasione el cumplimiento de esta ley se harán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo a los fines de su cumplimiento.

Dios guarde al señor presidente.

JOSÉ ANTONIO ALLENDE.  
Aldo Hermes Cantoni.

#### INFORME

El proyecto de ley por el cual se dispone la intervención a la provincia de Formosa para reorganizar los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial responde a una evidente situación de subversión institucional producida en esa provincia, a raíz de un enfrentamiento abierto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el cual se ha hecho parte el Poder Judicial, y que no encuentra dentro de los resortes constitucionales de la provincia solución adecuada para normalizar esa situación institucional.

Por otra parte, los acontecimientos se han venido precipitando en tal forma que puede afirmarse que, en estos momentos, la provincia de Formosa se ve frente a una situación de extrema gravedad, derivada del hecho de que se atribuyen la autoridad ejecutiva dos gobernadores, o sea el titular del Poder Ejecutivo, suspendido por la Legislatura convertida en tribunal político, que no acata la decisión de ese organismo, y el vicegobernador, que ha asumido el mando de gobernador y que ha establecido su sede en el Palacio Legislativo, con la agravante de que la policía y demás fuerzas de seguridad han declarado que no apoyan a ninguno de los dos funcionarios, lo que provoca en definitiva un vacío de poder.

Para resolver esta situación conflictiva, que ha subvertido la forma republicana de gobierno, se hace indispensable aplicar el remedio pre-

visto por el artículo 6º de la Constitución Nacional e intervenir los tres poderes de la provincia.

*Luis Antonio García.*

#### Disidencia total al dictamen de mayoría

Del mensaje del Poder Ejecutivo nacional, remitido al Honorable Senado de la Nación, no surge estén dadas las condiciones que reclamen la intervención federal a la provincia de Formosa. Por ello, los diputados firmantes del presente despacho rechazan de plano la media sanción venida del Honorable Senado de la Nación.

El remedio constitucional que se propicia (artículo 6º, Constitución Nacional) es de carácter excepcional y sólo debe prosperar cuando median situaciones que no encuentran solución dentro del marco institucional local; y, en virtud de los antecedentes recogidos, el ejercicio del Poder Ejecutivo se encuentra a cargo del señor vicegobernador de Formosa por estar suspendido en sus funciones el gobernador en virtud del trámite de juicio político iniciado por la Legislatura de la mencionada provincia, conforme al artículo 110 de la Constitución local.

Más aún, no se advierten las razones de una intervención total que involucre al mismo Poder Judicial, por lo que de prosperar el proyecto de ley en consideración se estaría en presencia de un verdadero avasallamiento a la autonomía provincial, todo lo que viola flagrantemente las Constituciones Nacional y Provincial.

Por estas razones, que serán ampliadas oportunamente en el recinto de la Honorable Cámara, votamos en contra del proyecto venido en revisión.

Sala de la comisión, 18 de noviembre de 1973.

*Leopoldo M. Suárez. — Raúl Alfredo Galván. — Mario Agustín Grau.*

#### II

#### Dictamen de minoría

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Asuntos Constitucionales —en minoría— ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara intervenida la provincia de Formosa; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su rechazo.

Sala de la comisión, 18 de noviembre de 1973.

*Francisco José Falabella. — Francisco J. Moyano.*

#### INFORME DE LA MINORÍA

Tras analizar, en angustioso plazo de horas, el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, con la información que brindan los diarios de la Ca-

pital Federal y los datos que hemos podido obtener directamente de autoridades de la provincia de Formosa, hemos hecho convicción de que no existe y menos en la forma aguda que entrañe peligro de alteración del orden público, un conflicto institucional insoluble en la provincia citada. Con ello, entendemos que no estaría dada ninguna de las causales que del artículo 69 de la Constitución Nacional ha extraído la doctrina del derecho público argentino, por lo que el proceso en la provincia no se habría agotado y además el Estado de Formosa tendría medios aptos y autónomos para dar solución satisfactoria.

En estas circunstancias, la substitución de los poderes del Estado provincial por parte del gobierno federal, importaría privar a la provincia de Formosa del ejercicio pleno de sus instituciones que, incluso para casos de conflictos como el presente, prevén soluciones eficaces y sus procedimientos para adoptarlas. El hecho de la intervención quedaría agravado por la circunstancia de que este Estado argentino ha recuperado recién hace seis meses el ejercicio de sus instituciones y nada hace pensar ni afirmar que dentro del mismo no pueda lograr definiciones aceptables sin la protección del poder federal.

Una intervención en estas circunstancias, si se releva a uno o a todos los poderes de la provincia, significaría eliminar las garantías y derechos que le están acordados al pueblo en las distintas áreas de la administración, e importaría, como se ha afirmado, privar a Formosa de los medios que su Constitución le aporta para superar una crisis que no tiene más significación ni trascendencia que las que comúnmente sufren todos los estados argentinos, a poco que se desarrolle una disputa entre sectores políticos vinculados al gobierno.

Está muy claro que ni Formosa, ni ningún Estado constituyente del Pacto Federal, y signatario de la Constitución Nacional, ha delegado la facultad de resolver con sus propios medios sus problemas internos. Lo contrario sería ingresar desde muy temprano a la viciosa práctica de someter, con pretexto de peligro para la paz pública o para el mantenimiento del orden, las autonomías provinciales, que desde los albores y las bases de nuestra organización se fijaron como irrenunciables.

Por estos fundamentos, subscribimos el despacho adjunto, por intermedio del cual se declara la innecesaria e inoportunidad de la intervención federal a la provincia de Formosa.

*Francisco José Falabella.*

**Observaciones al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales formulado en el día de la fecha, referente a la intervención a la provincia de Formosa**

En disidencia total con el despacho que aprueba la media sanción del Honorable Senado por

la que se declara intervenida la provincia de Formosa.

El proyecto de ley sancionado por el Honorable Senado se anticipa a la posibilidad de que la propia provincia remedie el conflicto institucional que la aqueja. En efecto, las instancias constitucionales previstas por la Carta Magna provincial no se encuentran agotadas. El artículo 124, inciso 19, de la Constitución provincial atribuye competencia al Superior Tribunal de Justicia para dirimir el conflicto existente entre los demás poderes de gobierno. Agotada esta instancia, recién entonces cabría la intervención del poder central, so pena de avasallar las autoridades provinciales, sentando un peligroso precedente.

La modificación concreta que se propone es la siguiente:

Rechazar el proyecto de intervención venido en revisión.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1973.

*Vicente Miguel Musacchio. — Armando Molina Zavalia. — Mariano Rufino Lorences. — Juan Carlos Comínguez. — Jesús Mira. — Horacio Jorge Sueldo.*

#### ANTECEDENTES

##### 1

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1973.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad remitiéndole los antecedentes relativos al conflicto de poderes suscitado en la provincia de Formosa.

De los mismos resulta:

1. — Que la Legislatura provincial de Formosa resolvió por unanimidad comisionar a una delegación ad hoc, que se entrevistó con el señor ministro del Interior y que fuera encabezada por el señor **vicegobernador** de la provincia en su carácter de presidente nato de dicho cuerpo e integrada por representantes de todos los bloques. La referida comisión impuso al señor ministro del Interior acerca del enfrentamiento existente entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia con respecto a diversos episodios que se consignan en los antecedentes adjuntos. Así mismo, los legisladores comisionados destacaron el consenso existente dentro de la Legislatura en el sentido de la procedencia de la destitución del gobernador por el procedimiento del juicio político.

2. — Que la Legislatura de Formosa sancionó con fecha 16 de octubre de 1973 una ley (número 357) regulando el procedimiento del juicio político, que contempla el artículo 110 de la Constitución provincial, y que carecía de reglamentación en la provincia.

3. — Que el Poder Ejecutivo el 29 de octubre de 1973 vetó, por decreto 1.975 de la misma fecha, el referido texto legal.

4. — Que con fecha 31 de octubre y de acuerdo al artículo 85 de la Constitución provincial, la Legislatura insistió en su sanción, con lo que quedó convertido en ley.

5. — Que la Legislatura de la provincia de Formosa, con fecha 4 de noviembre último aprobó una declaración de repudio con motivo del secuestro del que fuera víctima el diputado doctor Juan de Rosa Benítez, en la que se cuestiona la eficacia del Poder Ejecutivo provincial para garantizar la seguridad de los habitantes de la provincia. La declaración denuncia así mismo la circunstancia de que en la provincia se vive una insoportable presión política, mediante la utilización de grupos armados que atacan locales partidarios y educacionales de quienes no comulgan con sus posiciones.

6. — Que con fecha 5 de noviembre pasado la Legislatura aprueba una nueva declaración en la que sostiene la inexistencia de conflicto de poderes ni de causal alguna que justifique una intervención federal.

7. — Que con fecha 6 de noviembre del corriente, el señor gobernador de la provincia se dirige al señor ministro del Interior, denunciando un nuevo enfrentamiento producido con la Legislatura, a raíz de un pedido formalizado por ésta en el sentido de que el gobernador solicitara una licencia por el término de seis meses.

8. — Que este último episodio determina que el Poder Ejecutivo de la provincia se dirija al señor ministro del Interior, solicitando formal y oficialmente se promueva la intervención federal del Poder Legislativo.

9. — Que con fecha 9 de noviembre pasado el gobernador de la provincia anticipa al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, que se interpondrá recurso de inconstitucionalidad preventiva contra la ley del juicio político, por ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, al que, quedará de este modo involucrado en el conflicto de poderes.

10. — Que el 4 de octubre de 1973 tuvo entrada en la Legislatura el pedido de desafuero del señor diputado doctor Juan de Rosa Benítez solicitado por el juez de primera instancia a cargo del Juzgado N° 12 en lo Criminal y Correccional de la provincia a exhorto del juez de instrucción y correccional de la primera nominación de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, doctor Moisés L. Lavía. La solicitud de desafuero fue girada a estudio de comisión sin que hasta la fecha haya merecido tratamiento; tampoco se tiene conocimiento de la existencia de intervención judicial alguna tendiente a su impulso. Se señala que el desafuero que se requiere lo es a fin de cumplir la condena recaída en una causa seguida por falsificación reiterada de documento público, en grado de instigación. El diputado de Rosa Benítez se desempeñaba —al tiempo del pedido de desafuero— como presidente provisional de la Legislatura.

11. — Que la Legislatura sanciona una ley que el Poder Ejecutivo promulga, por la que se dispone hacer extensivas a la provincia de Formosa, demandando reciprocidad, las inmunidades parlamentarias de que gozan legisladores de otras jurisdicciones.

Se acompaña a este mensaje la documentación reunida por el Poder Ejecutivo acerca de los hechos que configuran el conflicto institucional reseñado.

El Poder Ejecutivo deja librado al criterio de vuestra honorabilidad determinar si el caso planteado encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 6º de la Constitución Nacional.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.  
Benito P. Llambi.

2

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad a fin de ampliar su anterior mensaje de fecha 15 de noviembre en curso a fin de dar cuenta de los nuevos hechos suscitados en la provincia de Formosa, referidos a la situación institucional que vive la misma.

Ellos son:

1. — Con fecha 14 del corriente mes el diputado Juan de Rosa Benítez solicitó su propio desafuero y se presentó voluntariamente al juez que lo requería en la provincia del Chaco, siendo acompañado por representantes de todos los bloques y quedando detenido a la orden del mismo.

2. — El día 15 de noviembre en horas de la noche y no habiendo aún entrado en vigencia la ley reglamentaria del juicio político, la Legislatura resuelve constituir con la presidencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, y someter a juicio político al gobernador de la provincia disponiendo su suspensión en el cargo, según lo establece el artículo 113 de la Constitución provincial; a la vez que se resuelve disponer que por escribanía de gobierno se adopten las medidas correspondientes a efectos de la asunción por el vicegobernador.

3. — El Poder Ejecutivo provincial, impuesto en la madrugada del día de la fecha de lo resuelto por la Legislatura, se ha dirigido al gobierno nacional insistiendo en su pedido de intervención al Poder Legislativo.

Se acompaña a este mensaje la documentación que ilustra acerca de los hechos nuevos de que se da cuenta.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.  
Benito P. Llambi.

3

### Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a fin de que por intermedio del Ministerio del Interior informe sobre los hechos que más adelante exponen, recabando en los casos que fuere menester la información necesaria de los organismos pertinentes, y en particular del señor gobernador de la provincia de Formosa, en su carácter de agente natural del gobierno federal, de conformidad con el artículo 110 de la Constitución Nacional:

1º — Si son reales las expresiones que se le atribuyen al señor ministro de Gobierno de la provincia de Formosa, don Hugo Lindor Gauna, y que obran en solicitudes y comentarios periodísticos, en el sentido de que en la Legislatura de la referida provincia se amparan, bajo los fueros parlamentarios, delincuentes o delincuentes públicos requeridos por la justicia, haciendo peligrar la salud moral de las instituciones republicanas.

2º — Si dicha situación ha creado un proceso conflictivo de fondo entre algunos de los poderes de

dicha provincia, según manifiestos publicitados por órganos de la prensa nacional y provincial.

3º — Si es cierto que existen pedidos de desafueros no considerados por dicha Legislatura, con relación a uno o más legisladores provinciales, por la comisión de delitos comunes de naturaleza infamantes.

4º — Si el Poder Ejecutivo nacional no considera, de confirmarse debidamente los aspectos puntualizados, que se dan las condiciones necesarias para la intervención federal a dicho Poder Legislativo provincial, de conformidad a lo previsto en el artículo 6º de la Constitución Nacional.

*Lysis Augusto Lépez.*

Señor presidente:

Solicito tratar sobre tablas un urgente pedido de informes al Poder Ejecutivo, a raíz de las gravísimas imputaciones que habría formulado el señor ministro de gobierno de dicha provincia, en un informe destinado a la propia Legislatura local, acusándola de encubrir a delinquentes públicos bajo los fueros parlamentarios y concretando hechos que implicarían un estado de corrupción sin precedentes en las instituciones parlamentarias de la República, motivando que se ponga en tela de juicio no solamente la honorabilidad de los legisladores locales, sino también la de sus pares nacionales y provinciales.

Como esta denuncia ha conmocionado al país, despertando una expectativa (salvando distancias) semejante al reciente caso Watergate, registrado en los Estados Unidos, al tomar estado público y despertar el interés que se verifica en la opinión pública y en todos los órganos de la prensa nacional y provincial, lo que es natural al afirmar el señor ministro que existen graves condenas y causas pendientes que descalifican, por tratarse de delitos comunes infamantes, para la función representativa contra uno o varios legisladores provinciales, con requerimientos judiciales de desafuero y detención, que a pesar de hallarse debidamente fundados y de llenar las formas legales, no son considerados por dicha Legislatura provincial, en un manifiesto deseo de total encubrimiento, con el agregado de que el propio presidente no puede salir de la provincia por circular su captura en el resto del país. Este encubrimiento, según información periodística que obra en mi poder, se confirmaría haciéndose patente en una ley sancionada por la Legislatura cuestionada y que puede denominarse de reciprocidad de inmunidades tendientes a facilitar el libre desplazamiento de dicho legislador o legisladores substraéndolos así indefinida y totalmente a la acción de la justicia.

*Lysis Augusto Lépez.*

Dada la responsabilidad que presupone la investigación del denunciante y los datos aportados cabe una especial atención de la situación, pues de comprobarse estos asertos cabrían drásticas medidas destinadas a preservar la salud moral de las instituciones republicanas.

Incuestionablemente una situación de esta naturaleza escaparía a una solución local y generaría un estado de cosas imprevisible, lo que ya se está dando en buena medida con un virtual conflicto del que participan los tres poderes de dicha provincia, según se advierte en la profusa información periodística adjunta, por lo que resulta deber ineludible de los poderes federales el de intervenir para resguardar la vida institucional de los Estados para que se realicen totalmente en el ejercicio armónico de los poderes y

en la ética absoluta de sus funciones. (precedente intervención de los poderes Legislativo y Judicial de Santa Fe, en 1929, citado por la Oficina de Información Parlamentaria, página 230, apartado 114).

*Lysis Augusto Lépez.*

4

La Cámara de Diputados de la provincia de Formosa comunica la resolución 213 del 5 de noviembre de 1973, en la que sostiene que no existen causas para la intervención federal a la provincia.

5

La Cámara de Diputados de la provincia de Formosa comunica la sanción de la declaración 89 del 4 de noviembre de 1973, por la que se repudian los actos de violencia que atentan contra la paz, el orden y el progreso de la provincia.

6

El gobernador de la provincia de Formosa comunica que la Cámara de Diputados de la provincia ha resuelto, en sesión del 16 de noviembre de 1973, iniciarle juicio político, disponiendo la suspensión del mismo y su reemplazo por el vicegobernador, y solicita se agilicen los trámites de intervención federal a la Legislatura.

**Sr. Presidente (Odena).** — Se va a votar si se considera sobre tablas el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Odena).** — En consideración en general. Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

**Sr. García.** — Señor presidente, señores diputados: en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales vengo a solicitar de la Honorable Cámara se preste sanción definitiva al proyecto de ley formulado por el señor senador Fonrouge por el cual se declara intervenida la provincia de Formosa en sus tres poderes, que ya ha sido aprobado por la Cámara de la que forma parte dicho legislador.

El proyecto en cuestión se originó como consecuencia del mensaje que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación con fecha 15 de noviembre y su ampliación del día 16 del mismo mes, por el cual da cuenta de los hechos producidos en la provincia de Formosa, dejando librado al criterio del Poder Legislativo el determinar si existen hechos encuadrados dentro de los supuestos previstos por el artículo 6º de la Constitución Nacional.

La comisión que presido, por mayoría, ha decidido dictaminar aconsejando la definitiva sanción de dicho proyecto.

Participo en este debate —haciendo mías las palabras del senador Fonrouge— con una gran pena republicana, pues hubiéramos querido no dar este paso tan importante que significa nada menos que intervenir a una de las provincias que componen la Nación Argentina.



Es evidente —más allá de nuestros sentimientos— que no se trata de avasallar a un gobierno, sino, por el contrario, de lograr las condiciones necesarias para que la provincia de Formosa se reencuentre dentro de la mayor brevedad posible con las esencias republicanas, que son, en definitiva, los presupuestos indispensables para que de acuerdo con el artículo 59 de la Constitución Nacional pueda el gobierno nacional garantizar el goce y el ejercicio de las instituciones.

Es indudable que en la provincia de Formosa se ha subvertido el orden republicano y ello abre la vía para que el gobierno federal intervenga.

En doctrina, como lo afirma el tratadista Bidart Campos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Nacional habría dos tipos de intervención en función de la necesidad o no de solicitud o requerimiento por parte de la provincia afectada, que ese autor califica como intervención requerida o dispuesta *motu proprio*.

Bidart Campos encuentra que esa calificación no contempla una diferencia —que estima importante— como es la de distinguir entre intervención represiva o intervención protectora, contemplando la primera los casos que se motivan por incumplimiento de las condiciones bajo cuya efectividad se presta la garantía federal y refiriéndose la última a las que son motivadas por la necesidad de defender a los Estados miembros.

No participo totalmente de los conceptos de Bidart Campos en cuanto habla de intervenciones represivas, pues tal vez sería mejor designarlas como intervenciones reparadoras, como es el caso del proyecto de ley en consideración, porque en este supuesto no se trata de castigar ni reprimir a una provincia sino de lograr la reconstrucción del orden republicano.

Existe en Formosa un estado de subversión institucional que, a nuestro juicio, hace indispensable imponer el remedio de la intervención federal a los tres poderes.

Se ha intentado en el Senado, y se intentará sin duda alguna en esta Cámara, demostrar que en Formosa no existe problema alguno que justifique el envío de la misión federal que propugnamos. Para llegar a esa conclusión se han tomado dos o tres elementos de juicio, y haciendo una valoración superficial de los mismos se ha arribado a aquella conclusión, y ello porque no se ha considerado el problema de Formosa dentro del total encuadre institucional en que debe ser ubicado.

No voy a fatigar a esta Honorable Cámara haciendo un *racconto* de todos los hechos, episodios y acontecimientos que se han ido jalando en esa provincia desde que el actual gobernador asumiera el mando el 25 de mayo de 1973. Sí quiero, en cambio, señalar que en Formosa en estos momentos existen dos gobernadores: uno

es el señor Antenor Argentino Gauna, elegido en los comicios del 11 de marzo y el 15 de abril de 1973, y otro es el vicegobernador electo en esos mismos comicios, señor Ausberto Ortiz, quien asumió la primera magistratura de la provincia en virtud del juicio político efectuado por la Legislatura al gobernador titular, a quien se suspendió en el ejercicio de sus funciones. Y hay dos gobernadores, porque ocurre que el señor Antenor Argentino Gauna no ha acatado la decisión de la Legislatura, que es el tribunal que lo está juzgando políticamente.

Honestamente, señor presidente, entiendo que este solo hecho justifica en plenitud la intervención que propiciamos, porque no podemos afirmar, por lo menos lúcidamente, que en estos momentos no se haya subvertido la forma republicana de gobierno, desde el momento que uno de los pilares básicos de la misma, que es la separación de poderes, está conflictuado porque existen dos pretendientes a la misma función.

En el debate del Senado algún señor senador afirmó que de la circunstancia de existir dos gobernadores no había que extraer la conclusión de que se hubiera producido conflicto de poderes, y así se dijo por cuanto se entendió que, en definitiva, de lo que se trataba en Formosa era que un gobernador había sido suspendido y, conforme con lo previsto por la Constitución de esa provincia, lo reemplazó el vicegobernador, agregándose que de lo que entonces en realidad se trata es de respetar la decisión de la Legislatura.

Sin embargo, dentro de ese razonamiento no se han tenido en cuenta dos circunstancias. Una de ellas es que el hecho existe y que la policía de Formosa ha decidido no intervenir en el conflicto, de manera que hay dos autoridades, de las cuales en definitiva ninguna tiene imperio, por lo que Formosa, en lugar de tener en este momento dos gobernadores, en la práctica no tiene ninguno. La otra circunstancia que señalo parte del supuesto de que, siguiendo el proceso institucional interno y aceptando la decisión de la Legislatura, la policía prestara su concurso al vicegobernador —esto sin contar con los probables choques entre los grupos adictos a uno y otro sector—. No se ha tenido en cuenta —y esto lo juzgo muy importante— que el gobernador Gauna ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la medida de la Legislatura que ordenó suspenderlo en su cargo. Se podrá argüir que ése es un planteo político y que como tal va a ser desechado por la justicia; pero esto es prejuzgar. De todas maneras, el recurso está interpuesto y siguiendo el respeto por las instituciones, y teniendo en cuenta que esta clase de recursos se concede con efecto suspensivo, tendríamos que considerar que el gobernador sigue siendo Gauna y no Ortiz. Es evidente también que esto nos llevaría a una cuestión

bizantina. En definitiva, dentro de las instituciones locales no habría resortes que permitieran resolver el diferendo en paz y en tranquilidad, que es lo que necesita la República.

Lo cierto es que, se quiera no, en estos momentos hay en la provincia de Formosa dos gobernadores y, si no la intervenimos, mucho me temo que, dadas las características del pleito, la única víctima va a ser quien nada tiene que ver con esto: el pueblo de la provincia.

Entiendo que ahí está todo el meollo de la cuestión y, por lo tanto, no cabría agregar nada más, salvo considerar los antecedentes que surgen del mensaje del Poder Ejecutivo y de su ampliación, como todos los demás elementos que se desprenden de la carpeta remitida por el Poder Ejecutivo, como argumentos complementarios destinados a robustecer la tesis sustentada.

Ante este conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la provincia de Formosa, surge con meridiana claridad la necesidad inmediata de intervenir a ambos poderes. Sólo resta analizar las circunstancias que hacen aconsejable extender la intervención al Poder Judicial de la provincia, que es lo que ha motivado la preocupación de algunos legisladores.

Los señores diputados deben estar informados de que al formularse el juicio político contra el gobernador Gauna, presidió la Legislatura el titular del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, doctor Juan Fernández Bedoya. Al hacerlo, como muy bien lo señaló el señor senador Díaz Bialeto durante el debate habido en el Honorable Senado, dicho magistrado quedó involucrado en el conflicto, máxime cuando con su firma se dirigió al señor Gauna y le comunicó la suspensión al cargo de gobernador, subscribiendo los fundamentos de matiz político adoptados por la Legislatura, donde se hicieron juicios de valor referidos al gobernador Gauna.

En este sentido, voy a permitirme leer la nota a que he hecho referencia. Dice así: «Formosa, 16 de noviembre de 1973. A su excelencia, el señor gobernador de la provincia, don Antenor Gauna.

«Cumplido en dirigirme a su excelencia, llevando a su conocimiento que esta Honorable Cámara, en sesión extraordinaria del día de la fecha, ha sancionado la resolución número 217, cuya copia se remite a sus efectos.»

La resolución número 217 dice así: «Visto el despacho producido por la comisión especial designada por esta Honorable Cámara de Diputados para el estudio del juicio político formulado contra el señor gobernador de la provincia, don Antenor Argentino Gauna, y considerando:

•Que en los fundamentos del referido despacho, provenientes de un exhaustivo examen de las causales enunciadas por los elementos probatorios producidos y de las demás instancias referenciales, se constata que la valoración a priori de los cargos es de grave y peligrosa significación.

»Que las violaciones constitucionales, legales y administrativas, reiteradas en incontables testimonios públicos emanados del poder administrador, como así mismo actos de este mismo poder violan flagrantemente aun las normas de ordenamiento penal y que en el orden federal el estado de la administración es caótico y deviene en actos arbitrarios carentes de motivaciones y absolutamente no encuadrados aun en un orden elemental en los marcos de contención que fijan los preceptos jurídicos y constitucionales a que debe ajustar el desarrollo del gobierno;

»Que así mismo tal estado de cosas, tal inoperancia, negligencia y desaprensión en el manejo de la cosa pública, se reflejan en un estado de confusión e inseguridad colectiva, sin que los administrados puedan tener certidumbre alguna de sus instituciones progresivamente deterioradas, comprometiéndose así mismo, sin aplicación a fines de beneficio social y público, los fondos del patrimonio y del erario provincial.» Luego continúan otras apreciaciones, que de todas maneras están configurando que el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa —como muy bien se ha dicho en el Senado de la Nación— se ha hecho parte en este conflicto que envuelve al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la provincia de Formosa.

Además, el doctor Fernández Bedoya se prestó a presidir la Legislatura sin estar reglamentado el juicio político o, mejor dicho, sin que la ley reglamentaria del juicio político hubiera entrado en vigencia. Algunos argüirán que para efectuar un juicio político a un gobernador, por lo menos en el caso de la provincia de Formosa, es innecesaria una ley reglamentaria.

Sin embargo, no es así, porque la propia Constitución de la provincia, en la última parte del artículo 116...

**Sr. Hueyo.** — Que lo lea.

**Sr. García.** — Con muchísimo gusto lo haré, señor diputado, porque precisamente pensaba citarlo textualmente. De manera que con sumo placer habré de satisfacer su pedido.

El artículo 116 de la Constitución de la provincia de Formosa dice que «para dictar sentencia condenatoria se requerirá mayoría de los dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros de la Legislatura. La ley reglamentará estas bases».

**Sr. Hueyo.** — Esa es su interpretación.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Odena).** — Ruego a los señores diputados no dialogar.

**Sr. García.** — Ruego a los señores diputados que se sirvan respetar mi interpretación para este caso, así como yo habré de hacerlo con la que otros colegas eventualmente puedan formular.

«La ley reglamentará estas bases». Esta norma está puesta al final del capítulo IV de la Constitución de la provincia de Formosa. De manera que es congruente interpretar que la ley reglamentaria a que se refiere este artículo de la Constitución comprende todo lo referente al trámite del juicio político.

Por otra parte, y esto es sumamente importante, el artículo 110 de la Constitución provincial —creo que no habrá necesidad de su lectura, aunque no tengo inconvenientes en **hacerla textualmente**— prescribe que para que la Legislatura declare que hay lugar a la causa de juicio político, la declaración tiene que hacerse con citación y audiencia del interesado.

**Sr. Falabella.** — Si la pidiere.

**Sr. García.** — Soy muy auténtico, señor diputado Falabella, y al citar un artículo de una norma, lo hago textualmente. Efectivamente: si la pidiere.

De los antecedentes de todo este proceso no surge que en momento alguno se haya citado y dado audiencia al señor Gauna, anomalía ésta consentida por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa.

He de hacer una breve digresión, con motivo de la interrupción del señor diputado Falabella, por lo que pido a los señores diputados me permitan continuar con el desarrollo de mi pensamiento.

Con respecto a la citación y audiencia del interesado, si éste la pidiere, la interpretación lógica es que lo que está condicionado a un pedido del interesado es la audiencia y no la citación, la que tiene que ser necesariamente obligatoria. Fijense los señores diputados que esto hace a la libertad de la defensa en juicio; que el interesado pida o no la audiencia puede ser facultativo, pero no que sea citado, lo que es imperativo.

Es evidente, entonces, que con esta actitud se ha comprometido la majestad de la justicia, por lo que, teniendo en cuenta el estado de anarquía y desquicio que se vive en Formosa, la intervención tiene que comprender también al Poder Judicial.

Surge también de los antecedentes del caso que la justicia actuó por lo menos con reticencia en el trámite del exhorto librado por el juez de instrucción y correccional de la ciudad de Resistencia, doctor Moisés Lavia, al juzgado de primera instancia en lo criminal y correccional número 12 de la provincia del Chaco, solicitando el desafuero del presidente de la Legislatura, doctor Juan de la Rosa Benítez, pues, no obstante la notoria importancia y trascendencia del asunto, se limitó a hacerlo conocer a la Legislatura, sin impulsar el procedimiento, por lo que se desentendió de una cuestión en la que estaba en juego el cumplimiento de una condena penal.

Cabe señalar aquí que el doctor Juan de la Rosa Benítez estaba condenado. Alguna información deficiente en este sentido decía que es-

taba simplemente procesado. Tengo información, de la cual no puedo dudar, de que en realidad se trataba de hacerle cumplir una condena. Y el juez exhortado no demostró ninguna inquietud ni preocupación para activar el trámite del exhorto a fin de obtener el desafuero de una persona que había sido condenada por la justicia.

**Sr. Fernández Bedoya.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. García.** — No puedo permitir interrupciones, lamentablemente, a fin de no alterar la unidad de mi exposición.

**Sr. Presidente (Odena).** — Ruego a los señores diputados respetar el deseo del orador en el sentido de no ser interrumpido.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García.

**Sr. García.** — Dejo de lado, por ahora, todo lo referente a los episodios reseñados en el mensaje del Poder Ejecutivo, como ser el pedido de intervención efectuado por el gobernador en la Legislatura: la información de ésta al Ministerio del Interior acerca de la decisión de destituir al gobernador antes de probarse los cargos; la reglamentación del trámite del juicio político efectuada en circunstancias éticamente extemporáneas y con un objetivo determinado; el veto de dicha ley efectuado por el Poder Ejecutivo, con iguales connotaciones; la denuncia de la Legislatura acerca de la existencia de grupos armados que atacan locales partidarios; la presión ejercida por la Legislatura contra el gobernador recabándole en pleno recinto el pedido de una licencia por seis meses, el recurso preventivo de inconstitucionalidad contra la ley reglamentaria del juicio político; la ley sancionada por la Legislatura de Formosa disponiendo hacer extensivas a esa provincia —demandando reciprocidad— las inmunidades parlamentarias de que gozan los legisladores de otras jurisdicciones, con el evidente propósito de favorecer la situación del doctor Juan de la Rosa Benítez.

Todos estos episodios, que si bien —lo reconozco— no tienen entidad suficiente como para justificar por sí solos la intervención, hacen a un contexto que, en función de los elementos fundamentales expresados anteriormente, contribuye a crear la imagen de una situación caótica, que, de no adoptarse a tiempo el recaudo constitucional que proponemos, puede provocar situaciones irreparables que la responsabilidad que los legisladores que estamos al servicio de la Nación asumimos no podemos rehuir.

Finalmente, debo expresar la complacencia, de la que creo que participa toda la Cámara, derivada de la actitud del presidente de la Nación que, respetuoso de los derechos y garantías constitucionales y del orden institucional establecido por la Carta Magna, no ha vacilado en poner en conocimiento del Congreso de la Nación todos los antecedentes referidos al caso en cuestión, para que éste, en el pleno ejercicio de

sus poderes constitucionales, adopte las medidas que entienda más adecuadas para poner término a la situación planteada. Con esta actitud que señalo se ha dejado de lado otro tipo de temperamentos, de los que lamentablemente tantas muestras ha dado nuestra azarosa vida institucional, imponiendo intervenciones por decreto con cargo de dar cuenta al Congreso.

El teniente general Perón, fiel a sus consignas de respeto por la Constitución y las leyes de la Nación, ha ubicado la problemática dentro de los resortes instrumentales respectivos, lo que indudablemente habla, con la mayor elocuencia, de una profunda vocación al servicio de la intangibilidad de las instituciones. (Aplausos.)

6

MOCION

**Sr. Suárez (L. M.).** — Pido la palabra para plantear una cuestión previa.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Leopoldo Suárez.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Señor presidente: dada la jerarquía de este debate y la importancia del tema que debemos considerar, nos parece indispensable la presencia en este recinto del señor ministro del Interior. No puede ser excusa que no se encuentra al señor ministro, porque hay diputados de esta bancada, que es opositora, que se han trasladado desde sus provincias para formar quórum y estar aquí cumpliendo con sus obligaciones de legisladores.

El señor ministro del Interior tiene que informar al Congreso respecto del problema suscitado en la provincia de Formosa y debe estar presente, por lo que solicito que sea invitado a concurrir al recinto.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

**Sr. Pedrini.** — La bancada del Frente Justicialista de Liberación se va a oponer al pedido formulado por el señor diputado Leopoldo Suárez en el sentido de exigir la presencia del señor ministro del Interior en el recinto. Consideramos que este problema atañe exclusivamente al Poder Legislativo, porque de ninguna manera el Poder Ejecutivo ha solicitado la intervención a la provincia de Formosa.

Por estos fundamentos votaremos por la negativa la moción formulada por el señor diputado Leopoldo Suárez.

**Sr. Presidente (Odena).** — Se va a votar la moción del señor diputado Leopoldo Suárez de invitar a concurrir al recinto al señor ministro del Interior.

—Resulta negativa.

7

INTERVENCION A FORMOSA

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

**Sr. Musacchio.** — Señor presidente: tengo la intención de que mi exposición sea objetiva. Deseo fijar, lejos de toda pasión, el pensamiento de nuestro bloque respecto de la intervención que se auspicia.

Hemos presentado un despacho en disidencia total con el de la mayoría, que dice: «El proyecto de ley sancionado por el Honorable Senado se anticipa a la posibilidad de que la propia provincia remedie el conflicto institucional que le aqueja». En efecto, las instancias constitucionales previstas por la Carta Magna provincial no se encuentran agotadas.

El artículo 124, inciso 1) de la Constitución provincial atribuye competencia al Superior Tribunal de Justicia para dirimir el conflicto existente entre los demás poderes de gobierno. Agotada esta instancia, recién entonces cabía la intervención del poder central, so pena de avasallar a las autoridades provinciales, sentando un peligroso precedente.

Se ha citado reiteradamente la actitud del Poder Ejecutivo...

**Sr. García.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Musacchio.** — Con mucho gusto, señor diputado.

**Sr. Presidente (Odena).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado García.

**Sr. García.** — Deseo preguntar al señor diputado si en las observaciones a que ha dado lectura se dice que se atribuye competencia al Superior Tribunal para dirimir el conflicto o si se lo faculta para establecer la competencia, porque del artículo 124 surge otra cosa, según mi parecer.

Por eso quiero preguntarle si el término «conflicto» es el que se quiso consignar, o si se reemplazó por otro, dado que en la Constitución se habla de competencia.

**Sr. Presidente (Odena).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Musacchio.

**Sr. Musacchio.** — Señor presidente: me voy a extender sobre ese punto para que quede aclarado el por qué de la redacción del despacho de nuestro bloque.

Quería decir que el Poder Ejecutivo ha enviado al Honorable Senado de la Nación los antecedentes para determinar si el Congreso considera que existen causas suficientes como para proceder a este remedio de tipo institucional que significa la intervención a una provincia.

Lo primero que piensa el legislador en estas circunstancias es que resulta evidente que el Poder Ejecutivo nacional, por ser el poder administrador y por tener en sus manos los mayores elementos de juicio posibles de informa-

ción, es quien está en mejores condiciones de saber sobre los hechos, causas y circunstancias producidos en la provincia de Formosa para ejercer las facultades de poder colegislador, y en esta forma decidir, si considera que los elementos dados son causa suficiente para la intervención y no limitarse a remitir sólo los antecedentes al Congreso para nuestra decisión, sino, inclusive, tener la iniciativa a los efectos de intervenir esta provincia.

Es decir, que la actitud del Poder Ejecutivo, que considero prudente, me hace pensar, en primera instancia, que no ha considerado el problema, en principio, por sí solo y con la información que posee en el sentido de que estaban dadas en la provincia de Formosa las condiciones para la intervención. Porque entonces, también es cierto, y sobre esto no tengo la menor duda que, con valentía republicana, hubiera enviado concretamente la iniciativa a fin de que consideráramos el proyecto: pero esto no fue así, señor presidente.

El Poder Ejecutivo ha remitido a este cuerpo el análisis de los hechos y de las circunstancias acaecidas para que nosotros tengamos la responsabilidad de la decisión. Y afirmo que hemos de asumirla en plenitud.

Al presenciar la sesión que realizara el Honorable Senado, me preguntaba, ante los elementos de juicio que se poseían y a los que se dio lectura, que son los que tenemos aquí sobre nuestras bancas, si eran realmente suficientes para determinar la intervención en una provincia.

Y digo eso porque tengo en cuenta expresamente las palabras del Poder Ejecutivo, ya que el señor presidente de la Nación ha expresado concretamente el celo constitucional con que maneja y piensa manejar su gestión, lo cual a nosotros nos parece muy positivo. Esto, además, también ha sido ratificado por el propio ministro del Interior, quien, en una declaración del 16 de noviembre del corriente año, referida concretamente a este problema de Formosa, decía: «No se va a hacer absolutamente nada que no esté en un todo de acuerdo con la Constitución y las leyes, tal como corresponde a un régimen que está viviendo democráticamente y en plenitud.»

Vamos a ver, entonces, con toda objetividad, si las circunstancias dadas en la provincia de Formosa se ajustan, desde el punto de vista legal y constitucional, al caso de la intervención.

Sabemos que la Constitución se hizo, pese a sus defectos y a las necesidades de corrección que ella tiene, buscando la armonía en el juego de los poderes creados por este instrumento legal. Hemos visto como, a pesar de los conflictos, la división tripartita de los poderes juega armónicamente, de manera tal que cada uno tiene específicamente determinadas en la norma constitucional las funciones que le competen.

También sabemos que a veces estas funciones de los poderes se entremezclan un poco, y así suele ocurrir que, por circunstancias determinadas, el Poder Ejecutivo ejerce a veces funciones de materia judicial, por ejemplo, cuando indulta; pero todo esto ha sido remediado por la doctrina y por la interpretación jurisprudencial.

Están, pues, determinadas con claridad las funciones de los poderes y sus relaciones entre sí, y también están expresadas armónicamente las atribuciones de las provincias, de modo que aquellas facultades no expresamente delegadas al gobierno central han sido retenidas por cada una de las provincias, que las ejercen por derecho propio, de acuerdo con el pacto constitucional. Por esto el artículo 104 de la Constitución Nacional dice que las provincias conservan todo el poder que no han delegado, y el artículo 106 expresa que cada provincia dicta para sí su propia Constitución, según lo que establece el artículo 59 de la Constitución, es decir, bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones —dice el citado artículo 59— el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Veamos ahora, en breve síntesis, qué es lo que ha ocurrido en la provincia de Formosa, de acuerdo con la información que tenemos del Poder Ejecutivo. Lo que más nos interesa destacar es que el 16 de octubre la Legislatura sanciona la ley 357, regulando el procedimiento de juicio político que contempla el artículo 110 de la Constitución provincial y que hasta entonces carecía de la respectiva reglamentación. Con fecha 29 de octubre, por decreto número 1.975, el Poder Ejecutivo provincial veta dicha ley y dos días después, el 31 de octubre, la Legislatura insiste en su sanción, que de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución provincial queda entonces convertida en ley.

Por otra parte, advirtiendo lo que podía ocurrir, el 5 de noviembre la propia Legislatura dicta una declaración en la cual afirma la inexistencia de conflicto de poderes y de causal alguna que justifique la intervención federal.

Lo que corresponde determinar antes de tomar ninguna actitud es si dentro de la organización constitucional de la provincia de Formosa, si dentro del juego de sus propias instituciones, existe o no remedio legal, porque es evidente que sólo en el caso de que estén agotadas las vías locales procede el remedio federal. Pero tampoco podemos pasar muy livianamente por el análisis de las circunstancias de esta provincia, porque si no nos informamos bien de lo ocurrido, podríamos cometer un tremendo error e inclusive sentar un mal precedente.

Aquí está en juego la interpretación del artículo 69 de la Constitución Nacional, cuyo texto

vale la pena recordar: «El gobierno federal —dice el artículo 6º— interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de las autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia». Como lo dijo el señor diputado de la mayoría, este artículo tiene dos partes: la primera, referida a la intervención federal llamada de oficio, que es cuando está afectada la forma republicana; la segunda, que es la intervención federal, con la requisitoria hecha expresamente por las autoridades de la provincia. En este caso existió, por lo menos por las notas que tenemos, una requisitoria del Poder Ejecutivo provincial, pidiendo la intervención no de todos los poderes sino exclusivamente del Poder Legislativo.

Esta intervención que se proyecta por entender no que está alterada la forma republicana de gobierno, sino, en definitiva, porque se aplica la segunda parte del artículo 6º, que es una requisitoria hecha por el Poder Ejecutivo provincial, nos lleva a analizar los requisitos que establece el mencionado artículo, referidos al sostenimiento o restablecimiento de las autoridades si hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia. No nos queda otro camino que analizar qué es la sedición para saber si están comprendidos los actos y hechos de Formosa en este delito legislado por el artículo 229 del Código Penal, que dice: «Serán reprimidos con prisión de uno a seis años los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidos en la ley».

A esta altura del análisis coincidimos en que la Legislatura ha adoptado la vía del juicio político y ha suspendido al gobernador, quien desató esa decisión, que es constitucional, porque está expresamente establecido en la Constitución de la provincia, en su artículo 110, que dice: «Están sujetos a juicio político el gobernador, el vicegobernador y sus ministros, los miembros y procuradores...», etcétera. El artículo 112, al referirse concretamente al gobernador y al vicegobernador, dice: «Cuando el acusado fuere el gobernador o vicegobernador, el presidente del Superior Tribunal de Justicia presidirá las sesiones de la Legislatura, pero no tendrá voto en el fallo».

Se ha dicho que si el sistema es unicameral y la intervención del presidente del Tribunal de Justicia es constitucional, si éste acata la decisión del Poder Legislativo es parte y está comprometido, me pregunto, si no acata la decisión,

¿también es parte y está comprometido? De manera, entonces, que con esta interpretación de tipo constitucional no habría actitud alguna para el presidente del Superior Tribunal de Justicia que no significara un compromiso. Entonces no tendría salvación posible frente a los conflictos de poderes que se pudieran crear en la provincia de Formosa. No es así, señor presidente. Lo que el titular del Superior Tribunal de Justicia ha analizado es si la resolución tomada por la Legislatura por unanimidad revestía o no las características legales que debe analizar un juez. Si ello fue así, si la resolución fue tomada como corresponde, la única actitud que le incumbía al juez, independientemente de su juicio personal, era acatar la decisión de la Legislatura y, en consecuencia, jugar un papel que la mayoría lo considera como el de parte, pero que yo estimo que es del Tribunal de Justicia, y que no otra cosa podría hacer.

El Poder Judicial de Formosa no puede estar complicado en esto y menos aún en la intervención, pues sabemos los peligros que significa la intervención de la justicia, porque en definitiva la justicia, cuando funciona como corresponde, es el verdadero órgano de control de todos los poderes.

Además, la Constitución Nacional, en su artículo 5º, dice textualmente: «Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones».

Cuando en el artículo 6º, que fue reformado en el año 1860, se agregó a petición de la provincia de Buenos Aires la norma tal cual hoy está redactada, no fue por casualidad. Tanto es así que cuando se dictó la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en 1873, se tuvo bien presente que los conflictos entre los poderes de la provincia debían dilucidarse en definitiva en la Suprema Corte provincial. Reglamenta la Constitución este derecho no por casualidad, sino porque los constituyentes de la provincia de Buenos Aires han querido que el conflicto entre los poderes provinciales se agote en la instancia de la Suprema Corte de la provincia, y que recién cuando allí no tenga solución proceda la intervención federal. En los fundamentos dados en la reforma del 60 y en la sanción de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, los constituyentes dijeron que esto era para salvaguardar las intervenciones federales en las provincias y para que se agote en cada provincia la instancia judicial que correspondiera.

Esto es así y la Constitución de la provincia de Formosa también establece en el artículo 124, inciso 1º, que «son atribuciones del Superior

Tribunal de Justicia conocer y resolver originaria y exclusivamente en las cuestiones de competencia entre los poderes públicos de la provincia y en los que se susciten entre las municipalidades y entre éstas y el Estado provincial».

Tengo, entonces, derecho a aplicar la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, que por otra parte se ha generalizado en las demás provincias, para decir que mientras esté abierta la instancia judicial, que lo está, dado lo expresamente dicho por el señor diputado de la mayoría, en la medida que existe un recurso de inconstitucionalidad, lo más prudente, lo más sereno, lo más ajustado a la Constitución sería dejar que esas vías se agoten. Y recién entonces, si no existe ningún tipo de solución por el órgano jurisdiccional competente, correspondería entrar a tratar el recurso federal.

Se ha dicho aquí que en los hechos concretos se ha producido ya el enfrentamiento, que hay dos gobernadores. Yo comprendo que en los hechos hay dos gobernadores, y los dos dicen tener derechos. También es cierto que con respecto a la existencia de los dos gobernadores debo dejar planteada una pregunta que me ha causado profunda preocupación, pues no sé qué actitud tendría que haber asumido en definitiva la policía de la provincia. Pienso que corresponde la actitud de acatamiento a las normas legales y a lo prescrito por la Constitución. Pero en una información —que tengo sobre mi banca— publicada en «La Nación» del sábado 17 de noviembre, bajo el subtítulo «Instrucciones de Interior», se dice: «Es de hacer notar que en el acta de toma del gobierno por parte del señor Ortiz, que lleva el número 108 y corre a fojas 149, 150 y 151 del libro de la Escribanía Mayor de Gobierno, se señala que al solicitar el requerimiento y apoyo de la fuerza policial provincial, el jefe de este organismo, señor Elvio Borrini, señaló que tenía instrucciones telefónicas del Ministerio del Interior de no acatar órdenes de ninguna de las dos partes en conflicto, y limitarse al mantenimiento del orden en el territorio provincial. Agregó que estas mismas instrucciones habían sido remitidas a otras fuerzas de seguridad con representación en la provincia.»

Tengo el derecho de preguntarme por qué si la policía provincial estaba dispuesta a acatar la decisión de la Legislatura se dan esas órdenes desde el Ministerio del Interior, que entiendo son inconstitucionales, porque no tiene jurisdicción en la provincia y, en definitiva, en acatamiento a esas órdenes no se moviliza y deja a los dos gobernadores enfrentados, a que hacía referencia el señor diputado.

Me pregunto si la información es correcta, si desgraciadamente el ministro del Interior no puede ser una de las causales del conflicto que no se ha podido superar en Formosa.

**Sr. Insúa.** — En «La Nación» de la fecha hay una declaración del funcionario que se ha

mentado, desmintiendo categóricamente lo que el señor diputado afirma.

**Sr. Musacchio.** — Me he limitado a dar lectura a una información. Desgraciadamente toda la información que tenemos, por el apremio con que estamos trabajando, reúne esas características y sería distinto si la Cámara hubiera nombrado una comisión especial para concurrir a la provincia y hacer un estudio en el lugar de los hechos.

**Sr. Galván.** — La versión que acaba de leer el señor diputado Musacchio surge del acta de asunción del señor vicegobernador de la provincia. Por esta razón la señora escribana fue dejada cesante en su cargo.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

**Sr. Presidente (Odena).** — Ruego a los señores diputados no dialogar.

Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Fernández Bedoya.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Tengo en mi banca, en fotocopia autenticada, el acta número 108 del Protocolo de la Escribanía Mayor de Gobierno de la provincia de Formosa, que se refiere al acto que recién ha mencionado el señor diputado Musacchio.

En la parte pertinente dicha funcionaria asienta lo siguiente: «Se deja expresa constancia que este acto se lleva a cabo en la dependencia arriba indicada, por manifestar el requirente, resultar imposible acceder al despacho oficial de la Casa de Gobierno por razones de carencia de garantías y seguridades, atento que la misma se halla ocupada por civiles armados. Que solicitado el auxilio de las fuerzas de seguridad provinciales al titular de la jefatura de la policía provincial, Lorenzo Elvio Gorrini, manifestó que no puede prestar el auxilio y apoyo peticionado por haber recibido instrucciones telefónicas impartidas desde el Ministerio del Interior en el sentido de limitarse a preservar el orden y la tranquilidad de la población, sin responder a las órdenes ni del gobernador suspendido, señor Antenor Argentino Gauna, ni del señor vicegobernador, don Ausberto Ortiz, quien por la referida resolución y normas constitucionales debe asumir la gobernación; expresando así mismo que tiene conocimiento que iguales instrucciones han recibido las otras fuerzas de seguridad dependientes de las autoridades nacionales, circunstancias que el autorizante confirmó personalmente por expresiones del mismo señor jefe de policía y en iguales términos...». Esta es la parte que nos interesa, porque en ella queda patentizada la interferencia del gobierno central sobre la provincia de Formosa en el pleno goce de su autonomía federal.

**Sr. Lima.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Musacchio.** — Con mucho gusto.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Lima.



**Sr. Lima.** — En realidad, lo que acaba de leer el señor diputado es un fragmento de un acta labrada por una de las partes en litigio. Las instrucciones del ministro del Interior no se dan nunca por teléfono, sino que se transmiten por cable. Por otro lado, el señor ministro del Interior no ha ratificado esa afirmación del jefe de policía de la provincia...

**Sr. Day.** — Tampoco vino aquí a negarlo.

**Sr. Lima.** — ... por lo que no me explico cómo el señor diputado Musacchio puede afirmar su posición en la declaración unilateral de una de las partes en litigio. De modo que éste no es un fundamento que pueda ser utilizado por el señor diputado.

**Sr. Presidente (Odena).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Musacchio.

**Sr. Musacchio.** — Con respecto a la forma como el señor ministro del Interior puede cursar las instrucciones, utilizando o no la vía telefónica, amablemente le pido al señor diputado que se dirija al señor ministro para que no utilice más ese medio. *(Risas y aplausos.)*

He dicho ya que quería ser objetivo en mi exposición, y no tengo ánimo de agresión para nadie; simplemente, queremos dejar establecida nuestra posición, que la sentimos profundamente, respetando las posiciones de otros sectores.

De acuerdo con la información que tenemos, objetivamente considerada, lo que se está tramitando en la provincia de Formosa es un juicio político, procedimiento que se halla legislado en la Constitución de la provincia, en los artículos 110, 111, 112, 113 y 114 de ese cuerpo legal. El artículo 113 dispone que la Legislatura tiene facultades para suspender al gobernador que está en ejercicio de sus funciones cuando se inicia el juicio político; pero quiero hacer notar al señor diputado miembro informante de la mayoría que eso no quiere decir en manera alguna que la garantía de la defensa en juicio está vulnerada, porque recién se ha iniciado el juicio. Si con posterioridad no se escucha al gobernador recién podremos afirmar que hay vulneración de la garantía de la defensa en juicio. Si la misma Constitución ordena la suspensión mientras se tramita el juicio político, quiere decir que estaríamos prejuzgando si dijésemos que ya se ha vulnerado un principio tan fundamental cual es el de la defensa en juicio.

**Sr. García.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Musacchio.** — Sí, señor diputado.

**Sr. García.** — Es para preguntar al señor diputado quién es, a su criterio, el gobernador actual de la provincia de Formosa: ¿es el señor Gauna o el señor Ortiz?

**Sr. Musacchio.** — Le voy a contestar al señor diputado con mi opinión personal, aunque como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales sabe bien que, si se ha respetado el procedimiento establecido por la Constitución

de la provincia de Formosa, desde el punto de vista legal y constitucional, es el vicegobernador en ejercicio.

**Sr. García.** — Si me permite el señor diputado...

En el curso de mi exposición señalé que el gobernador Gauna había interpuesto ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa un recurso de inconstitucionalidad, y que ese recurso se concedió con efecto suspensivo. En consecuencia, como no está consentida la suspensión que dispuso la Legislatura, entiendo que el actual gobernador de Formosa, de acuerdo con la interpretación constitucional que hago, es el señor Gauna, y no el doctor Ortiz.

**Sr. Musacchio.** — Si no he leído mal, de la información remitida por el Poder Ejecutivo surge que el gobernador anunció que presentaría el recurso ante la Justicia. Yo desearía saber ahora si el señor diputado García tiene una información escrita o fidedigna de que el gobernador haya planteado verdaderamente el recurso ante la justicia. En ese caso, también le contestaría, pero se habla de que va a plantear un recurso en momentos en que estamos por sancionar una intervención a una provincia, que es mucho más importante que una suposición.

Voy a terminar mi exposición, pero antes quiero señalar que la del juicio político es una institución muy querida para nosotros, porque significa realmente la posibilidad de control específico por parte de la Legislatura y del Congreso respecto de las actitudes de los otros poderes. Tanto es así que en la reforma de 1860 se modificó la redacción de 1853, y se estableció que podía tener lugar no sólo por la comisión de delitos, sino por el mal desempeño de las funciones, lo cual implica que aquí está en juego la responsabilidad republicana y no solamente la comisión de delitos. Y los únicos que pueden determinar la responsabilidad republicana son la Legislatura o el Congreso, que actúa entonces como tribunal de la Constitución y no como un organismo judicial.

En este sentido, si la Legislatura de Formosa, en ejercicio de esa responsabilidad republicana, ha considerado que existen prima facie circunstancias para este juicio, estimo que la actitud respetuosa que nos corresponde frente a los representantes del pueblo de Formosa es acatar esa decisión y, en todo caso, acudir ante el Poder Ejecutivo para respaldar a las instituciones provinciales, que legalmente se han expedido ante un problema de estas características.

Por último, sostengo que no existe un conflicto de poderes, ni tampoco contienda de competencia. La contienda de competencia significa que ambos poderes están discutiendo sus propias atribuciones constitucionales, en la creencia de que son las mismas, y este hecho no existe en la provincia de Formosa. En segundo



lugar, no existe conflicto de poderes porque aquí lo que está ocurriendo es que un poder, en circunstancias dadas, ha avanzado sobre el otro poder constitucional, que se resiste. Esto es importante aclararlo, señor presidente, porque no estamos ante un conflicto de poderes, sino ante la resistencia de un poder que no acata la decisión de otro poder, que ha actuado legalmente.

Por estas consideraciones, que he expuesto con toda objetividad, sin entrar a analizar los problemas políticos en juego en la provincia, quiero dejar sentada nuestra posición. Aspiro, si así se resuelve por mayoría, a que ésta sea la primera y última intervención que pueda haber en el país en esta etapa institucional, porque soy solidario con el pensamiento del señor presidente de la República y del señor ministro del Interior, en el sentido de que si se quiere dar al exterior la impresión de un país organizado, que se maneja por sus leyes, y se pretende evitar los hechos de fuerza, tenemos que empezar por agotar todas las instancias que permitan el que las leyes nacionales y las constituciones provinciales rijan más allá de los hombres. Esta es nuestra inquietud, que se refleja en el sentido de nuestro voto. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Suárez.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Señor presidente y señores diputados: desde luego, entramos con tranquilidad a este debate. Normalmente, cuando se discute la intervención a una provincia, siempre aparece un interés político de por medio. Desde las bancas del Congreso de la Nación, frente a un proyecto de intervención, de una situación provincial o un matiz político, siempre habrá de advertirse que aparece aquí la defensa de la autonomía.

Por nuestra parte, nosotros entramos doblemente tranquilos en este debate. En primer término, porque aquí se trata de la intervención a un gobierno que no es de nuestro partido ni de ninguno de los hombres de la oposición en este Parlamento. Es un gobierno del partido de la mayoría; y es un conflicto que toma a mayorías y minorías, pero que, en definitiva, sella el destino de un gobierno de extracción política perteneciente al sector mayoritario de esta Cámara.

De manera, entonces, que cuando defendemos, como en este caso concreto, la autonomía de la provincia de Formosa, lo hacemos despojados de un interés político inmediato o pequeño; estamos defendiendo principios.

Hace un rato algún señor diputado de la mayoría nos señalaba que no habíamos contribuido a formar quórum al inicio de esta sesión. Yo diría que sí tiene razón. Pero conviene y es necesario tener presente que hemos contribuido a formar quórum muchas veces, no solamente para las reuniones en el recinto sino también en las

de comisión. Tanto es así que muchos asuntos pudieron ser despachados por las comisiones en que estaban radicados gracias a la presencia, al esfuerzo y al trabajo de los miembros de la minoría. Desde estas bancas del Congreso de la Nación, permanentemente hemos actuado en función de colaboración con el país.

Pero esto no nos puede llevar a que tengamos, con nuestra presencia, constituyendo el quórum para sesionar, que legitimar la posibilidad del avasallamiento de la autonomía provincial de Formosa. De allí que aguardáramos que algunos señores diputados asumieran la responsabilidad previa de lograr quórum para sesionar, a fin de debatir la intervención federal a esta provincia. Yo lamento mucho...

**Sr. López (D.).** — Ese es su criterio, señor diputado.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Desde luego que es el mío, señor diputado. Yo no pretendo manejarme con el suyo; sobre todo, en este tema.

**Sr. López (D.).** — Le rogaria que mida un poco sus expresiones, porque es su criterio.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Yo quiero señalar que realmente resulta penoso que una de las provincias quizá más jóvenes del país haya tenido un sino institucional tan azaroso. Elevada al rango de Estado provincial en 1953, si mal no recuerdo no ha tenido un solo gobernador que concluyera su mandato. Uno por muerte; otros por ruptura del orden institucional.

Con verdadero respeto he leído el discurso del señor senador Cáceres en defensa de la autonomía de Formosa. Allí se hace un parangón de lo que ha acontecido en esa provincia postergada a través de gobiernos constitucionales —cualesquiera fueron éstos— y lo que ocurrió en Formosa con gobiernos no constitucionales o con gobiernos que se manejaron desde la Capital Federal.

**Sr. Rubeo.** — Esos fueron gobiernos originados en golpes de Estado.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Sea como fuere, esos gobiernos manejados de la Capital Federal han sido insensibles a los problemas y necesidades de la provincia.

Yo sé que en el fondo a los señores diputados de las provincias que están en este Congreso les duele tener que vulnerar la autonomía provincial y decretar una intervención. En ninguna época las intervenciones federales han sido buenas; siempre fueron desastrosas para la evolución de las provincias.

Y yo pregunto: ¿por qué le interrumpimos a esta joven provincia argentina su vida institucional que durante muy poco tiempo ha podido vivir y desarrollar? Lo que ocurre es que éste no es un problema solamente de Formosa. Se trata de un conflicto de tipo político que es común a muchas provincias argentinas, desgraciadamente; y esto no nos alegra, nos entristece que suceda. Pero el hecho es cierto: el proble-

ma de Formosa es de la misma naturaleza que el de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Salta. Yo no sé si a todas estas provincias también las van a intervenir. Yo hago votos para que esto no ocurra y que se permita que jueguen las instituciones locales y que el derecho y los órganos provinciales puedan legítimamente desenvolverse.

Solamente aprendiendo a vivir nuestras propias instituciones habremos de hacer que los pueblos crean en esas instituciones que nosotros queremos defender e inculcar al país. Pero cuando los primeros descreídos de las instituciones somos nosotros, que precisamente tenemos la obligación moral y política de defenderlas, entonces aparece comprometido el sistema y el régimen institucional de la República.

Y si me formulara la pregunta el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por quien tengo un gran respeto personal e intelectual, yo le diría que no sé si es Pedro o Juan el gobernador legítimo; le respondería que Formosa, mediante el libre juego de sus instituciones, tiene que establecer quién tiene derecho a gobernarla.

Nosotros no somos los jueces de los pleitos provinciales; no lo es el Senado de la República, ni tampoco el Poder Ejecutivo. Por eso a mí me duele que un ministro del Interior dé órdenes a un jefe de policía de provincia, porque con ello se está vulnerando el federalismo argentino. El ministro no tiene derecho de impartir esas órdenes ni de procurar que el funcionario provincial actúe de uno u otro modo. La propia Constitución prevé los remedios necesarios para los casos en que realmente se han excedido las posibilidades de que los conflictos encuentren solución en el propio medio provincial.

Pero no nos engañemos. En este caso hay un gobernador, que será bueno o malo, pero también existe una Legislatura, un Congreso «chico» de provincia, que por unanimidad, con el voto de los distintos sectores políticos —justicialismo, radicalismo y MID—, señala un procedimiento de juicio político; lo inicia, lo concreta, hace cargos —vale decir, busca la solución de su problema mediante el régimen institucional que le crea su propia Constitución—, y nosotros salimos a parar el proceso y a decir lo que tienen que hacer. De un solo manotazo se decide que termine el Poder Ejecutivo, que acaben el Poder Legislativo y también el Poder Judicial.

¿Por qué se resuelve terminar con el Poder Judicial? Porque hubo un solo juez que, acatando lo que ordena la Constitución, dijo que cumplía con el artículo 112 de la Constitución de Formosa. Pareciera que al cumplir con su deber compromete a todo el Poder Judicial de la provincia, y a todos los arrastramos con la intervención. Creo que esto es un exceso que no beneficia a nadie y que daña a este proceso de institucionalización que queremos defender.

Sé que puede haber argumentos en favor de uno u otro de los dos gobernadores, pero también sé que cuando se quieren arreglar políticamente estos problemas, se arreglan. Muestra de ello son las provincias de Buenos Aires y de Mendoza, tan conflictivas como la de Formosa. Tanto es así que si los señores diputados revisan la versión taquigráfica de la última sesión del Senado de la Nación podrán observar que se confunde permanentemente a Formosa con Mendoza, y hoy, en la misma reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados también confundían a Mendoza con Formosa, como si fuera un prolegómeno de lo que puede ocurrir.

No sé si esto no nos está señalando algo que debe llamarnos la atención. Esto no hace bien a nadie. No estamos defendiendo a un gobernador radical, ni de ninguna de las alianzas que componen esta Cámara. Estamos defendiendo un gobierno que ha sido electo en un comicio limpio, luego de la institucionalización del país. Por eso pregunto: ¿tenemos derecho ahora de venir a recordar, como argumento, que hay un diputado provincial de la mayoría, en Formosa, que estaba condenado? ¿No lo supieron cuando lo eligieron como candidato? ¿No lo conocían cuando lo incorporaron a la Cámara provincial? ¿O es que recién ahora descubren que este señor está condenado o es un delincuente? Esto es lo que no tiene explicación valedera.

No quiero enredarme en argumentos casuísticos de cómo se han producido los acontecimientos. Creo que el Poder Ejecutivo no debió dejar que se produjeran, y si se fueron desarrollando escapando de su voluntad o de sus posibilidades de impedirlo, el Congreso de la Nación tenía la obligación de obrar con la medida necesaria y de actuar a través de su Comisión de Asuntos Constitucionales, trasladarse al lugar de los hechos y procurar obtener, si era posible, una solución que salvara la autonomía de la provincia de Formosa.

**Sr. Labake.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Suárez (L. M.).** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Odena).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Labake.

**Sr. Labake.** — Creo haber entendido que el señor diputado manifestó que el Poder Ejecutivo no debió permitir que se llegara a esta situación institucional en la provincia de Formosa. ¿Podría explicarnos concretamente qué medidas debió adoptar el Poder Ejecutivo para que en la provincia de Formosa no se llegara a esta situación?

**Sr. Suárez (L. M.).** — Supongo que la tan mentada verticalidad debe servir para alguna otra cosa que no sean las más simples; tiene que servir también para resolver este tipo de problemas, y muestra de que este tipo de situaciones se pueden encarar así por el gobierno la

hemos tenido a través de los episodios de las provincias de Buenos Aires y de Mendoza...

**Sr. Labake.** — Desearía que el señor diputado aclarara...

**Sr. Presidente (Odena).** — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Suárez.

**Sr. Suárez (L. M.).** — En estas condiciones, señor presidente, debo señalar la posición de nuestro bloque.

Hubiéramos querido que estuviera aquí, en el recinto, el señor ministro del Interior y tenemos razones para ello. Hubiéramos deseado que explicara esta situación y algo que no está del todo claro, por lo menos, para la gente de Formosa.

La Legislatura que se interviene ha dictado una ley por la que se expropián muchas hectáreas de tierra, y en este momento tiene la posibilidad de dictar otra ley, que está en preparación y que es conocida por toda la provincia de Formosa, por la que también se expropia una enorme cantidad de hectáreas, con lo cual se comprende a diez sociedades anónimas. Nosotros, como diputados de la Nación, deseamos saber a quién pertenecen las tierras de esas sociedades anónimas y si estas entidades tienen algo que ver con el proceso institucional de Formosa.

Y como no deseamos que esto quede así, en el aire, nuestro bloque ha presentado un proyecto de interpelación al señor ministro del Interior señalando concretamente algunos hechos que nos hubiera agradado aclarar con el señor ministro sin necesidad de recurrir al mecanismo de la interpelación. La conversación con el señor ministro deseábamos mantenerla en esta sesión en que se discute el problema de la provincia de Formosa. De esta manera, quizá, se hubiera clarificado en forma más amplia el pensamiento y la decisión de la Honorable Cámara.

No sé si la Honorable Cámara votará esta noche este proyecto de intervención federal a la provincia de Formosa. Pienso que tal vez lo votará, y también creo que muchos de los señores diputados lo van a votar por verticalidad.

Hago un llamado a todos los señores diputados, que como el que habla representan al interior del país, para que reflexionen. Para que piensen que si hay algo que tenemos la obligación de defender desde estas bancas son, precisamente, las autonomías provinciales. Este es el mandato de nuestro pueblo. Es el mandato de los que han votado a los señores diputados de la mayoría y el mandato de los que nos han votado a nosotros, que representamos a la minoría.

Defendamos nuestras instituciones provinciales, defendamos la dignidad de los gobiernos provinciales, y de esta manera estaremos salvando el futuro institucional de la República. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Señor presidente: si debiera ingresar a este debate con la solemnidad que lo hicieron los integrantes del Parlamento sensibilizados tras la organización nacional, diría que en estos sucesos y detrás de estos sucesos o se consolida el sistema republicano federal que hemos adoptado y señalado como vocación, o agilizan el sistema republicano federal y la Constitución de la Nación misma.

Un simple incidente político, multiplicado en su densidad y magnitud desde las más altas esferas oficiales, hace que nuevamente venga a rondar la sombra sobre el espíritu del federalismo argentino; y más que sombras acaso. Porque si se caracterizara lo que aquí se denuncia, si bien es cierto que nos abocamos a institucionalizar la intervención del gobierno federal en una provincia, no es menos cierto que esta provincia ya está anímicamente intervenida por el gobierno de la Nación. Está ya anímicamente intervenida porque lo dice un acta legalizada ante la escribana mayor de gobierno de Formosa, dando cuenta de la orden interferente del gobierno federal, y lo dice también un comentario de todos los diarios que no fue rectificado sino en el día de hoy ante el eventual tratamiento de este asunto.

Está también aparentemente sentenciada porque, no obstante todas las razones que exponemos en este recinto, tenemos la seguridad —como lo ha dicho el señor diputado Suárez— de que ya se ha resuelto su suerte y se ha instruido para que se imponga, que no otra cosa resultaría este concepto vernáculo de la verticalidad, que no es disciplina porque excluye la libertad, y con ello elimina la dignidad personal...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Odena).** — Sírvanse los señores diputados no interrumpir al orador.

**Sr. Díaz Ortiz.** — El señor diputado está haciendo imputaciones que personalmente no le admito.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Si el señor diputado Falabella no rectifica sus expresiones, plantearé una cuestión de privilegio.

**Sr. Falabella.** — He dicho que la verticalidad no es disciplina porque computo dentro de la disciplina, fundamentalmente, parámetros morales, y pienso entonces que si gravitara la libertad moral desaparecería el sentido de la verticalidad.

**Sr. Díaz Ortiz.** — El juego de palabras que hace el señor diputado no nos aclara nada, de modo tal que si no formula una aclaración perfectamente coherente...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente** (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Además, señor presidente, he hablado en términos absolutamente generales, y solamente quien quiera atribuirse su dictado está en libertad de hacerlo.

**Sr. Labake.** — El señor diputado ha dicho que no hay dignidad personal cuando hay verticalidad.

**Sr. Falabella.** — No he dicho eso; he dicho que no hay disciplina sin libertad moral...

**Sr. Presidente** (Odena). — Ante observaciones formuladas por señores diputados, el señor diputado Falabella ha aclarado ya el sentido de sus expresiones.

**Sr. Labake.** — Yo no me doy por conforme con la aclaración.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente** (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — En el día de ayer hemos recurrido a la Comisión de Asuntos Constitucionales...

**Sr. Labake.** — Que se lea la versión taquigráfica para saber qué es lo que se ha dicho.

**Sr. Falabella.** — He hecho la aclaración y el presidente de la comisión la ha aceptado.

**Sr. Presidente** (Odena). — Los señores diputados se han considerado agraviados y piden al señor diputado que rectifique sus palabras, pues no se han sentido satisfechos con la aclaración que ha hecho. Si algún señor diputado desea plantear alguna cuestión de privilegio, la Presidencia tendrá que concederle el uso de la palabra.

**Sr. Falabella.** — Yo no he dicho que los señores diputados son indignos. Si eso vale como rectificación, lo afirmo. Lo hago como aclaración.

**Sr. Presidente** (Odena). — Señores diputados: lo que pudo haber dicho el señor diputado Falabella...

**Sr. Acuña.** — Lo que pudo haber dicho, no. Pedimos que se lea la versión taquigráfica.

**Sr. Labake.** — Que diga si la verticalidad del peronismo significa ausencia de dignidad personal en los señores diputados.

**Sr. Falabella.** — Yo no he nombrado la palabra «peronismo». He hablado de la verticalidad en un sentido genérico.

**Sr. Labake.** — Que aclare si ha utilizado la palabra «verticalidad» con significado político.

**Sr. Falabella.** — Si el señor diputado quiere amenazarme, pierde el tiempo; si quiere perturbarme, pierde más tiempo aún.

**Sr. Presidente** (Odena). — Señor diputado Falabella: con el propósito de mantener este debate en un nivel de aceptable tranquilidad, la Presidencia le solicita haga la aclaración de que no ha querido agraviar a ningún colega.

**Sr. Falabella.** — Yo no hago ninguna rectificación. Solamente digo que cuando me he referido a la disciplina he dicho que no puede existir ella sin un contenido moral.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Falabella.** — Cambio mis expresiones anteriores por las que acabo de formular.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena de campana.

**Sr. Presidente** (Odena). — El señor diputado Falabella acaba de manifestar que reemplaza sus anteriores expresiones por las que termina de formular. Por consiguiente, ha rectificado su anterior aclaración.

**Sr. Falabella.** — Si, señor presidente.

**Sr. Labake.** — Ahora, sí.

**Sr. Presidente** (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — En el día de la fecha, mediante dos telegramas dirigidos a nuestros domicilios del interior, hemos sido convocados para asistir a la sesión de esta Cámara, a las 19, y a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a las 17.

Lo menos que podía tener un miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales para informarse acabadamente de la base fáctica y de la argumentación jurídica que se hacía valer para pedir una intervención a una provincia, era una copia del mensaje. Pero se argumentó que las máquinas copiadoras no andaban y parece ser que tampoco andaban las máquinas de escribir. De manera tal que ese privilegio solamente lo ha tenido el presidente de la comisión para actuar como miembro informante...

**Sr. García.** — No es así, señor diputado.

**Sr. Falabella.** — ...pero nuestra responsabilidad nos ha llevado a informarnos por otros conductos que no son las fuentes informativas naturales de esta Cámara. Así, pues, hemos leído en los diarios del día de hoy la transcripción del mensaje del Poder Ejecutivo, hemos leído los diarios de Formosa y hemos tomado contacto con los naturales de esa provincia, para averiguar qué pasa en ese Estado, porque resultaba verdaderamente un interrogante, como se lo formuló el señor diputado Suárez, por qué, si existe tanta obediencia, no se hizo valer esa obediencia para evitar un conflicto de tipo institucional.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente** (Odena). — Ruego a los señores diputados no interrumpan, a fin de que el señor diputado Falabella pueda continuar su exposición.

**Sr. Acuña.** — Si el señor diputado se manifiesta correctamente, no tenemos ningún problema en escucharlo.

**Sr. Falabella.** — No he oído las interrupciones, pero no tengo inconveniente en ceder el micrófono para poder escucharlas.

**Sr. Presidente** (Odena). — Solicito al señor diputado que tenga a bien continuar con su exposición.

**Sr. Falabella.** — Señor presidente: hemos querido saber qué pasa en Formosa. Queríamos saber qué decía el mensaje, pero fundamentalmente qué era lo que el mensaje callaba. Porque se han echado a rodar muchas especies y estas especies están asistidas en nuestro ánimo por la total falta de información. Por eso no se nos podrá imputar mañana que hemos hecho valer la suspicacia con el más alto poder de imaginación. Por ello, como decía el señor diputado Musacchio, estamos contraidos al esfuerzo de averiguar la verdad que nos esclarezca el panorama.

El problema planteado por el señor gobernador de Formosa, que es replicado por los legisladores de ese Estado, tiene algunos pasajes interesantes. Voy a cambiar el método: voy a examinar los hechos y después haré el esfuerzo de vestirlos con los elementos de la intencionalidad.

El señor gobernador de Formosa incurre en un tipo de conducta que para los señores legisladores de esa provincia resulta observable. La Legislatura de la provincia analiza la posibilidad de iniciar al señor gobernador un juicio político. Interin se sucede una serie de acontecimientos, algunos de extrema violencia: irrupción en comités partidarios del propio gobernador, con guardias o acompañantes, lesiones graves a algunos de los presentes y reacción consiguiente de los agredidos. Cuando la Legislatura de Formosa, haciendo uso de las facultades que le acuerdan los artículos 110 a 116 de su Constitución, promueve el juicio político, ya había ocurrido un proceso de alta significación entre las partes —llamémoslas así: el Poder Ejecutivo y los miembros de la Legislatura—, que habían viajado, según las noticias, a entrevistar a altas autoridades nacionales.

No sabemos cuál es la opinión del gobernador, aunque en un matutino salió una nota afirmando que se le había dado la seguridad de que se iba a intevenir la Legislatura. Pero si sabemos la opinión de los legisladores, a quienes he escuchado, y a quienes les dijeron en el Ministerio del Interior que llevaran adelante el juicio político al gobernador Gauna.

Ante estos hechos, que tornan muy equívoco el panorama y lo confunden dando la impresión que el poder central en lugar de sugerir soluciones busca que el conflicto se agudice y se torne prácticamente insoluble en el territorio de Formosa, las partes se reúnen y acuerdan la paz y la conciliación.

El acuerdo de conciliación está firmado por el gobernador y representantes de los bloques en la Legislatura. Tengo a mi vista, y se me ha

acreditado como fotocopia auténtica del original, el acuerdo escrito con la propia letra del gobernador, Antenor Gauna, que consiste: reestructuración del gabinete y directorios con participación del bloque y sectores del movimiento; respeto y apoyo mutuos; reconsideración de las medidas partidarias de expulsión; rectificación de la acusación de traidores y olvido de agravios recíproco, y colaboración y participación en las medidas importantes de gobierno.

Este documento, que los intervinientes sabrán si es auténtico, fue firmado el 7 de noviembre de 1973, y con él estaría solucionado el conflicto. Según dicen algunos de los protagonistas a quienes he escuchado —agrego una vez más que se ha tenido que entrevistarlos para poder obtener la única información posible—, al arribar el gobernador Antenor Gauna a la Capital Federal, en conocimiento el gobierno central que se había pactado una solución, le dijo que estaba mal hecha, y que volviera a su provincia tranquilo, porque se iba a resolver la intervención al Poder Legislativo, de modo que no renunciara a su triunfo seguro. En tanto parecía que el gobierno central alentaba al gobernador en su posición intransigente, simultáneamente se alentaba a la Legislatura en su iniciativa de hacer el juicio político y acusar y destituir al gobernador. Si esta actitud del poder central fuera cierta, llamaría poderosamente la atención. Dejo registrados los hechos porque en caso de ser exactos asumirían extrema gravedad.

Cuando he preguntado cuál es la razón para que el gobierno central se afane en crear disociación en Formosa, cuando ello le habrá de traer preocupaciones, pesares, inconvenientes y dificultades de orden político y administrativo, los protagonistas me han contestado —y no hago otra cosa que repetir lo que escuché directamente— que se ha tratado de paralizar a la Legislatura de Formosa para que no sancionara algunas leyes de las que habría derivado un alto perjuicio económico para gente vinculada al gobierno de la Nación. Si esto fuera cierto, también registro el hecho por su extrema gravedad, y recojo la expresión del señor diputado Suárez: bien podría ser esa ley de expropiación de 4.500 hectáreas de la sociedad anónima Arbol Solo y otras sociedades anónimas en las que aparecen diez nombres de apellido Llambi, que no se sabe si son familiares o no del señor ministro del Interior.

**Sr. Labake.** — Eso es inexacto, señor diputado.

**Sr. Falabella.** — Me alegraría mucho.

**Sr. Pedrini.** — Los integrantes de la firma Arbol Solo, a quienes conozco perfectamente bien, no tienen ningún tipo de vinculación con el señor ministro del Interior Llambi. Eso me consta, por lo que es una total y absoluta mentira...

**Sr. Falabella.** — Me alegra, señor diputado.

**Sr. Pedrini.** — Esa es una calumnia; es una infamia; es un cuento de Caperucita Roja.

**Sr. Falabella.** — He tenido la preocupación de adelantar que es algo que he escuchado, pero que no me consta.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

**Sr. Pedrini.** — No se puede acusar al apellido de un señor ministro del Interior sin tener las pruebas, porque ello es una calumnia.

**Sr. Falabella.** — He dicho que no sé si tenían parentesco o relación...

**Sr. Pedrini.** — Eso es una calumnia...

**Sr. Labake.** — Es insidia, que es peor.

**Sr. Pedrini.** — ... y lo desafío a que demuestre lo que afirma.

**Sr. Falabella.** — Le pediría al señor presidente que se repitiese la expresión que acabo de pronunciar y que ha de constar en la versión taquigráfica. De ninguna manera he dicho a título personal y con alguna constancia que el señor ministro del Interior estuviera implicado. Dije que he escuchado de los protagonistas que ellos interpretaban los hechos de esa manera. Si esto es falso, les diré a los protagonistas que me han faltado a la verdad, y aclararé. Todos estamos obligados a verificar la exactitud o no de esta afirmación.

**Sr. Pedrini.** — No se puede acusar en el recinto de la Cámara de Diputados a un señor ministro sin tener las pruebas correspondientes.

**Sr. Falabella.** — No me va a enseñar a mí lo que tengo que decir.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

**Sr. Falabella.** — Si no se quiere que corramos el riesgo de presunciones que pueden ser calificadas como traviesas, traigan explícitamente el problema para que lo tratemos, porque estamos a oscuras. Estoy haciendo una tentativa de imaginación para ver cuáles pueden ser las causas, porque no se nos han dicho en el fondo cuáles son las verdaderas razones para la intervención.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente (Odena).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Si lo que se me ha afirmado no fuera verdad, no tengo ningún inconveniente...

**Sra. Rota.** — Mientras tanto, deja en el aire una sospecha...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

**Sr. Falabella.** — En todo caso, esa expresión me la han transmitido legisladores de la provincia de Formosa, y sería sumamente grave que ellos jugaran con un diputado de la Nación. Además, aclaro que esos diputados no pertenecen a mi partido...

**Sr. Rojas.** — ¿De qué partido son?

**Sr. Falabella.** — Son del oficialismo.

Yo desafío a los señores diputados a que establezcan el origen de esa información, porque es un antecedente muy grave.

**Sr. Pedrini.** — Y yo lo desafío públicamente, señor diputado, a que renunciemos a nuestras bancas, usted o yo, según sea el que se equivoque.

**Sr. Falabella.** — Yo he renunciado siempre a todo...

**Sr. Pedrini.** — Observe el señor diputado la gravedad de lo que estoy proponiendo...

**Sr. Falabella.** — ...pero no se trata de poner en apuesta las bancas.

**Sr. Pedrini.** — No se puede calumniar a hombres que están sirviendo al país.

**Sr. Falabella.** — Yo no he calumniado. Dije simplemente que resultaría de interés averiguar si existe una relación —de ninguna manera dije que exista— y es la información que se me dio.

**Sra. Rota.** — Pero tampoco la puede repetir así.

**Sr. Falabella.** — No lo he expresado asertóricamente sino como una problemática, pues no he hecho sino verter una información.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente (Odena).** — Solicito a los señores diputados se sirvan no dialogar.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — En lo que respecta al señor ministro del Interior, aclaro que no he pretendido echarle sombra, ni formular una imputación concreta. Simplemente, estoy informado de una versión que me llegó por fuentes que me resultan personalmente insospechables, y aspiro a que se desestime por quien debe hacerlo.

**Sra. Rota.** — Dé el nombre de los diputados.

**Sr. Labake.** — El día que le regalen una bomba, no la vaya a traer aquí, señor diputado.

**Sr. Falabella.** — En eso sí que —para su uso— le voy a pedir consejo. (Risas.)

**Sr. Presidente (Odena).** — La Presidencia vuelve a solicitar de los señores diputados que no incurran en este tipo de diálogo.

**Sr. Pedrini.** — En ese caso, que el señor diputado Falabella no incurra en insidias.

**Sr. Presidente (Odena).** — El señor diputado Falabella se ha rectificado y ha hecho la aclaración.

**Sr. Falabella.** — No, no me he rectificado, pero sí he hecho la aclaración.

**Sr. Pedrini.** — Si me permite el señor presidente, estimo que su función es la de dirigir el debate, pero no opinar ni dar consejos.

**Sr. Presidente (Odena).** — No he dado ningún consejo, señor diputado. Estoy tratando de dirigir el debate...

**Sr. Pedrini.** — Es que va a haber muchas rectificaciones si seguimos así.

**Sr. Presidente** (Odena) — Estoy tratando de dirigir el debate en la mejor forma posible, así como de evitar esta clase de diálogos.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Lépez.** — Que el señor diputado Falabella dé los nombres...

**Sr. Falabella.** — Esto es en cuanto a los hechos. Desde el punto de vista institucional, en la órbita de la provincia de Formosa, la Legislatura se reúne para determinar la viabilidad del juicio político sobre la base del artículo 110 y concordantes de la Constitución provincial.

**Sr. D'Angelo.** — ¿Por qué no respetaron ustedes a las provincias, ya que desde el gobierno intervinieron hasta las municipalidades? Al único que dejaron en pie fue a Barceló.

**Sr. Falabella.** — Lo saco del error, señor diputado. El gobierno que menos intervenciones dispuso en la Argentina fue el gobierno conservador.

**Sr. D'Angelo.** — Pero cambiaban las urnas...

— Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

**Sr. Falabella.** — Ustedes intervinieron Catamarca a los tres meses de tomar el gobierno, y como después practicaron la intervención en medida industrial, ahora están engolosinados.

— Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Falabella.** — La Legislatura, en virtud del artículo 112 de la Constitución provincial, decidida a formular la acusación, convoca al señor presidente del Superior Tribunal de Justicia al aplicar el artículo 112, es decir, se mueve por carril constitucional. Y el señor presidente del tribunal habrá tenido seguramente la alternativa que nos plantea el señor diputado Musacchio: voy, o no voy. Si concurría podía encontrarse frente a la situación que ahora se pretende descalificar; pero si no iba, resultaba peor, pues desobedecía una cláusula expresa y terminante de la Constitución de su provincia. Y el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia concurre, y los señores legisladores, por unanimidad, resuelven concretar el juicio político al señor gobernador.

Se han discutido aquí tres o cuatro puntos. El señor diputado García se preguntaba —entendiendo que quiso preguntarse— el sentido de la expresión del artículo 110, cuando en la mecánica del acto inicial la Constitución de Formosa señala «con citación y audiencia del interesado, si la pidiere», y da una interpretación que me parece es la menos aceptable. El señor diputado García separa del acto procesal «audiencia» el accesorio de la citación. Pero una y otra cosa son lo mismo: la citación a la audiencia y la audiencia misma. No se lo llama telepáticamente a la audiencia

sino por medio de una citación. Y si «no pide» la citación, no pide la audiencia.

**Sr. García.** — No es así, señor diputado.

**Sr. Falabella.** — De cualquier manera el señor diputado García interpreta y resuelve el problema. Dice lo siguiente: había que mandarle por lo menos la citación. Pero el señor diputado Musacchio agrega «si la pidiere». Si no la pedía, de acuerdo con la Constitución no tenía por qué mandársele la citación.

Con respecto a la intervención del señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, los señores diputados la han comentado y también han hecho su interpretación. El mensaje del Poder Ejecutivo grava al señor presidente de este tribunal por haber concurrido a la Legislatura a raíz de su interpretación de un artículo de la Constitución provincial, en tanto otros señores diputados han señalado aquí que el presidente del tribunal judicial cumplió con su deber, pues concurrió al llamado del Poder Legislativo provincial sobre la base de la fórmula constitucional.

Y hay otro punto, señor presidente. Se pregunta quién es gobernador en Formosa, y se pregunta si existía o no reglamentación del artículo 116 de la Constitución provincial. Y en el primero, segundo y tercer caso se incurre en un gravísimo error, porque no es aquí donde debe decidirse si debía concurrir o no el presidente del Tribunal de Justicia ni si debió hacerse o no citación del interesado en el momento de la acusación en el juicio político. No es en el nivel nacional donde debe resolverse quién es el actual gobernador de Formosa. Ni si había o no reglamentación.

Es tan fuerte la intención de intervenirla, que ya la han suprimido a Formosa, olvidando que el único que puede decidir los tres casos es el régimen institucional de la provincia interesada, autónomamente, hasta el agotamiento del conflicto.

**Sr. Lazzarini.** — Pero no lo ha podido resolver.

**Sr. Falabella.** — ¿Acaso, después de declamar tanto tiempo lo que quieren decir federalismo y autonomía —y se hace el viaje a La Rioja para festejar el federalismo, y se realizan campañas publicitarias, y se habla de un federalismo de consumo ingenuo— pasan sin solución de continuidad a olvidarse de ese federalismo?

El federalismo es otra cosa: respetar el Pacto Federal y, en consecuencia, permitir que las provincias hagan uso de sus instituciones y solucionen todos sus problemas en el pleno ejercicio de las mismas.

El unitarismo es inconstitucional y no se puede, a nivel de gobierno nacional, querer interpretar la Constitución de Formosa. Y es unitarismo analizar si estuvo bien el presidente de la Suprema Corte y querer resolver el problema de quién es el actual gobernador.

**Sr. Insúa.** — Federalismo fue la anulación de los comicios del año 31.

**Sr. Falabella.** — En el 31 yo ni pantalones cortos tenía.

**Sr. Insúa.** — Pero yo tuve la suerte de haber votado.

**Sr. Falabella.** — Se acordó olvidarlo todo y nos han hecho apoyar una ley de amnistía y han proclamado principios aparentemente generosos. ¿Nos estaban haciendo trampa?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Falabella.** — Ustedes han guardado el rencor para tirarlo aquí, así, de esta manera, después que nosotros votáramos la amnistía y permitiéramos la liberación de los presos...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente (Odena).** — La Presidencia ruega al señor diputado que se cija a ella.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente (Odena).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

La Presidencia ruega a los señores diputados que no interrumpan al orador.

**Sr. Díaz Ortiz.** — ¿Me permite una interrupción?...

**Sr. Presidente (Odena).** — ¿Concede la interrupción el señor diputado Falabella?

**Sr. Falabella.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Quería señalar que no creo que el señor diputado Falabella haya votado la amnistía canjeándola por presuntos o supuestos compromisos anteriores. Si el señor diputado Falabella la votó, lo habrá hecho por un problema de conciencia o, tal vez, de remordimiento de conciencia; o si no, la habrá votado pensando simplemente en una especulación que no correspondía. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Le voy a contestar al señor diputado Díaz Ortiz.

Ha sido un problema de conciencia; yo no tengo remordimientos. Y partía del supuesto de que era un problema de conciencia para todos. De manera tal que cuando se me obligaba a mí a olvidar, no podía admitir que ustedes se quedaban con el privilegio del recuerdo. Si esto fuera así nos han faltado al pacto de la amnistía que solemnemente y con toda la fuerza de nuestro espíritu consagramos y firmamos en este recinto.

Verán que yo puedo recuperar los recuerdos. Habíamos hecho el pacto de enterrar a los muertos, pero si quieren desenterrarlos, lo vamos a hacer con todas las palas. Me quedará el derecho de no haber sido yo el que quebró el pacto de paz y olvido que significó, para el pluralismo político, la amnistía que votamos aquí.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Odena).** — Ruego a los señores diputados se sirvan no dialogar.

**Sr. Falabella.** — Además de señalar que no eran el gobierno federal, los representantes o los poderes del gobierno federal quienes estaban obligados o convocados para interpretar la Constitución de Formosa, puntualizo que no se ha permitido agotar el procedimiento.

Se debió dar, tal como está escrito en la Constitución, plena libertad a Formosa para que en el juego que le da su ordenamiento jurídico decida su destino; esa autonomía irrenunciable que no tiene por qué estar rescatando todos los días, que se le quedó en las manos desde que se firmó el Pacto Federal o cuando el conjunto de las provincias entonces existentes firmaron la Constitución Nacional.

Pero, ¿qué incidente es éste? ¿De qué gravedad? ¿Qué entidad tiene? El diario «La Nación», en su edición de hoy, dice: «Hay calma», en un subtítulo grande, en la primera página, a la izquierda. «La Mañana», de Formosa, trae un título que expresa —espero que no traiga reclamos ni gritos—: «¿Solución institucional o partidaria?» No voy a leer este artículo. El que me interesaba para este caso es otro que dice: «Serenidad y expectativa signaron la jornada del día de ayer».

**Sr. Labake.** — ¿Usted quiere que primero se maten?

**Sr. Falabella.** — Quienes tienen que defenderse de que no los maten son los formoseños. Lo que no conviene es ir a matarlos desde aquí. Eso, por lo menos, es teoría federal.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Odena).** — Ruego a los señores diputados se sirvan no dialogar, y al señor diputado Falabella que no se aparte del tema en debate.

**Sr. Falabella.** — La Constitución Nacional, que ya ha sido mencionada, dice en el artículo 69 que el gobierno federal interviene, a requisición de las Legislaturas o gobernadores provinciales o sin ella, en el territorio de cualquiera de las provincias, al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición o para atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior.

Evidentemente, las cláusulas son tremendamente restrictivas en cuanto a que, como lo examinó muy bien el señor diputado Musacchio, tiene que estar decisivamente alterado el orden público por una sedición o tiene que existir una amenaza de ataque o peligro exterior. Me valgo de la fundamentación realizada por el señor diputado Musacchio, para no repetirla.

Las causales no están dadas en los hechos. No son las motivaciones que se exhiben en el mensaje ni las que conocemos por la prensa, por el comentario, por lo que ha trascendido. Aquí hay un conflicto de tipo político.



Pero me interesa, en este artículo 69 que fue votado sin discusión por los Constituyentes de 1853 o, por lo menos, la discusión no se registró —es decir, que no tenemos una fuente original de interpretación— determinar qué es el gobierno federal. ¿El gobierno federal es el Poder Ejecutivo Nacional? ¿El gobierno federal es el Congreso de la Nación?

De manera tal que podría aceptarse como teoría, más tarde envilecida en la práctica, que los Constituyentes sólo se referían a la intervención del gobierno federal en cuanto a sus fuerzas o a sus milicias...

**Sr. Lazzarini.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Falabella.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Lazzarini.** — El interrogante que plantea el señor diputado desde hace mucho tiempo está aclarado en la doctrina.

El artículo 69 de la Constitución Nacional dice que «El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias...», y el artículo 67, que hace referencia a las atribuciones del Congreso, en su inciso 28, determina que el Congreso de la Nación tendrá todos los otros poderes concedidos por la Constitución al gobierno federal. Cada vez que en la Constitución se habla de poderes dados en general al gobierno federal, se está haciendo referencia a poderes que corresponden al Congreso de la Nación. Es por ello que la intervención federal en las provincias es un tema de exclusiva competencia del Congreso de la Nación. Por lo tanto, el interrogante que formula el señor diputado ya está resuelto y no hace falta plantearlo en el recinto.

El tema, en consecuencia, es de competencia exclusiva del Congreso de la Nación en virtud de lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 69 y en el inciso 28 del artículo 67.

**Sr. Falabella.** — Creo, señor presidente, que si trataba de substituir a los poderes provinciales, lo menos que debieron hacer los Constituyentes, iluminados como eran, fue incluir un texto expreso en el artículo 67 y otro en el artículo 86 de la Constitución Nacional.

El señor diputado supone que ésta es una facultad genérica, no declarada, que solamente se da al Poder Legislativo y que no aparece entre las facultades del Poder Ejecutivo de la Nación. Sin embargo, sabemos que en algún receso del Parlamento el Poder Ejecutivo ejerció esta facultad.

**Sr. Lazzarini.** — Es una facultad expresa y nadie la discute.

**Sr. Gualco.** — Los conservadores saben mucho de esto.

**Sr. Falabella.** — Todo esto es materia opinable. Hay autores que sostienen que se trata simplemente de la intervención de las fuerzas armadas en el lugar, y derivan su doctrina del artículo 49, sección IV, de la Constitución norteamericana.

**Sr. Lazzarini.** — ¿Qué autor dice eso?

**Sr. Falabella.** — Lo voy a leer para una mejor información del señor diputado.

La obra se titula *El federalismo argentino*, y es de Emilio J. González, la referencia aparece en la revista «La Ley», tomo LXXXVIII, página 887. Dice este autor que «el artículo 69 de nuestra Constitución ha sido tomado del artículo 49, sección IV, de la Constitución de los Estados Unidos de América, con la sola diferencia de texto y de interpretación substancial entre lo que en nuestra República ha significado la institución “interviene” y en la norteamericana la institución “garantirán”». La sola diferencia de estas dos palabras ha valido para que en los Estados Unidos no hayan existido intervenciones federales con asunción plena de los gobiernos en los Estados independientes, bien diferente de lo que ha ocurrido en la República Argentina, donde la intervención total en las provincias ha sido un procedimiento político frecuente y normal. Pero, además, según el artículo 49, sección IV, de la Constitución norteamericana, los Estados Unidos garantizarán a todos los Estados de la Unión una forma republicana de gobierno y los protegerán contra invasión y la inquisición de las Legislaturas o del Poder Ejecutivo cuando la Legislatura no pueda ser convocada, contra violencia doméstica. Tenemos el antecedente del Estado de Arkansas, donde no obstante tratarse de una verdadera conmoción interior derivada de un problema racial, el presidente Roosevelt no atacó a uno solo de los poderes del Estado y se limitó simplemente a que las tropas federales se hicieran presentes en el territorio de dicho Estado hasta la total normalización de sus instituciones, de esas instituciones a las que el presidente de los Estados Unidos no se animaba a vulnerar.

**Sr. Presidente (Odena).** — La Presidencia hace notar al señor diputado Falabella que restan cinco minutos para que venza el término de que dispone.

**Sr. Falabella.** — Me quedan aún quince minutos, pues dispongo de una hora.

**Sr. Presidente (Odena).** — De acuerdo con el cómputo de Secretaría sólo quedan cinco minutos, pues el señor diputado ha hablado durante cincuenta y cinco minutos.

**Sr. Falabella.** — Trataré, entonces, de abreviar mi exposición.

Tengo aquí una carpeta que contiene los cargos formulados al señor gobernador Antenor Gauna. Esta carpeta, que contiene aproximadamente cuarenta y cinco cargos, está certificada por la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa. Si se duda de la certificación, después podremos discutir ese aspecto; pero, de cualquier manera, la certificación existe y debo tenerla por auténtica.

Esta información se inicia diciendo que el señor gobernador Antenor Gauna ha llevado a su máxima posibilidad el nepotismo en la provincia, y señala concretamente que están empleados dos

hermanos del gobernador, una hija, un hermano con categoría de ministro, una nuera, dos sobrinas, una hija del ministro, el yerno de ese ministro como director del banco de la provincia, una nuera en secretaría privada y así también sus hijos y aun sus parientes cercanos, todo lo cual importa una retribución mensual de 10 millones de pesos moneda nacional por mes. Los señores legisladores provinciales de Formosa dan en este aspecto un resultado económico del nepotismo, con una cifra *pro domo sua* del señor gobernador y los suyos de 500 millones de pesos moneda nacional durante el ejercicio.

La carpeta de cargos contiene la mención de todos los decretos firmados por el gobernador que han sido invalidados por el Honorable Tribunal de Cuentas de Formosa. Ha hecho designaciones fuera del escalafón; ha dispuesto ascensos sin respetar la reglamentación correspondiente; ha hecho nombramientos violando la ley de presupuesto, y ha incurrido en violaciones a normas presupuestarias otorgando subsidios que no podía dar porque no disponía de las partidas correspondientes; ha dispuesto cesantías en contra de las reglamentaciones; ha firmado convenios interprovinciales sin dar cuenta a la Legislatura, como lo manda la Constitución; ha hecho contrataciones ilegítimas que en esta carpeta se señalan. De acuerdo con ella son cincuenta cargos.

En virtud de esos cargos, la Legislatura ha resuelto suspender provisoriamente al señor gobernador de Formosa. De manera tal que en la mecánica de la Constitución el actual gobernador de Formosa —no cabe duda alguna para nosotros que examinamos desde aquí el problema—, tras la suspensión fundamentada del ex titular, es el señor vicegobernador, que ya ha asumido su cargo.

¿Por qué el gobierno de la Nación teme que en Formosa haya una guerra civil? ¿Por qué teme que haya una conmoción? ¿Sobre qué bases se maneja para determinar que este enfrentamiento puede ser luctuoso? ¿Por qué se nos quiere alarmar, acaso extremando, sobre la posibilidad de que armen ejércitos los dos grupos y se ataquen o que vayan a pedir refuerzos a otra provincia, y lleven un ejército extraprovincial?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Falabella.** — La verdad es otra. Este es un incidente político magnificado. No se le ha permitido a la provincia de Formosa, ni a su Legislatura, ejercitar los derechos que le acuerda la Constitución provincial y se está decidido a privar a Formosa de la soberanía que no delegó, pero por medio de la cual constituyó sus tres poderes hace apenas unos meses.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Odena)** — El señor diputado está por concluir su exposición...

**Sr. Falabella.** — Eso va por su cuenta, señor presidente. (Risas.)

**Sr. Presidente (Odena).** — ... y si los señores diputados lo interrumpen, tendrá derecho a solicitar que no se le compute el tiempo de las interrupciones.

**Sr. Falabella.** — En el año 1871, siendo Montes gobernador de Santiago del Estero, el presidente Sarmiento y su ministro del Interior, Vélez Sarsfield, pidieron la intervención a esa provincia. El Congreso de la Nación comunica al presidente Sarmiento que el ejercicio de la intervención por el gobierno federal debe ser usado con la máxima prudencia y teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, para una provincia es mucho más grave perder su soberanía y su libertad institucional que tener que afrontar problemas intestinos; denegó el pedido. El Congreso de 1871 da una lección al país. ¡No hay nadie que pueda arrepentirse de haber cumplido con la Constitución! No hay nadie que pueda arrepentirse si la consagra en cada uno de sus actos y sus decisiones. Este federalismo voceado para los cánticos debe tener necesaria y devota militancia constitucional. Aquí están los hombres de las provincias argentinas. Vamos a ver cómo responden los hombres del interior, cuál es el sentido de soberanía provincial que creen tener, en qué medida están dispuestos a defenderla con su voto y afrontando hasta las sanciones que pudieran venir, porque se consagrarían defendiendo a la Constitución Nacional. ¡Quien la defienda no tendría por qué arrepentirse!

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Cárdenas.

**Sr. Cárdenas.** — Señor presidente: pertenezco a un partido provincial que ha hecho de la defensa del federalismo y de las autonomías provinciales la base misma de su existencia política. He formado quórum para esta sesión, no como dijo en forma apresurada el señor diputado Leopoldo Suárez, para avasallar una autonomía provincial, sino porque entiendo que el deber del legislador se cumple en su banca, esté en la posición que estuviere, y no en la rotonda o en sus aledaños.

Lamento entrar a un debate disminuido en su nivel por las ya acostumbradas incontenencias verbales y conceptuales del señor diputado del conservadorismo, y he de abreviar mi exposición porque toda la estructura jurídica que tenía preparada como argumento, ha sido expuesta con solvencia y brillantez por el señor diputado Vicente Musacchio, con conceptos que hago totalmente míos.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Luis Antonio García.

**Sr. Cárdenas.** — Estimamos que en el mensaje que el Poder Ejecutivo ha enviado al Senado

de la Nación no se dan los elementos necesarios para fundar y cohonestar una medida de esta extrema gravedad. Creemos que dada esa circunstancia hubiera sido preferible que esta Cámara se muniera en forma directa y no por interpósita persona de todos los elementos que le permitieran fundar un voto razonado y serio. Destaco el hecho notorio —como ya lo hizo el señor diputado Musacchio— de que el Poder Ejecutivo nacional, luego de la evaluación de los hechos, hecha por medio de los organismos naturales del gobierno, no ha querido tomar sobre sí la responsabilidad de proyectar la intervención de la provincia de Formosa, quizá por estar convencido en el fondo de que no es oportuna, ni adecuada, ni justa.

Tomó sobre sí la tarea de estructurar este proyecto un señor senador conservador, que quizá llevado por la fuerza del atavismo, indicó el cerrojazo de los tres poderes constitucionales. Esto no nos llama la atención; lo que es asombroso es que haya recibido el apoyo de muchos de quienes están en sus bancas presuntamente en representación de los Estados federados y en defensa de sus autonomías.

Es cierto que es un principio parlamentario recibido y universalmente aceptado que una Cámara debe ignorar lo que hace la otra, pero en este caso particular me niego personalmente a ignorarlo porque el proyecto y la sanción senatoriales constituyen a mi juicio una monstruosidad cuya proyección amenazante sobre el futuro político del país es indiscutible. Ya en el debate del Senado, y según dan cuenta las crónicas periodísticas, el jefe de la bancada mayoritaria confundió tres veces, como sucedió en este recinto, Formosa con Mendoza, no sé si por un lapsus, por ser ambas consonantes o por una mala jugada del subconsciente del señor senador.

Cabe a este respecto decir, como decía un historiador, en conferencia de julio de este año, que «de la crisis del federalismo no es culpable solamente el poder centralizador y penetrante de la gran Capital; más culpables son gobernadores y legisladores que enajenan la autonomía de sus provincias como Esaú vendió su primogenitura. Lo señaló el senador Alfredo Palacios, que enrostró la indiferencia de los senadores que son los representantes constitucionales, de las autonomías provinciales y con sus votos podrían conjurar la crisis del federalismo».

»En nuestros días —sigue el conferencista— los partidos políticos han levantado la bandera federal y han prometido restablecer el federalismo. Ha sido un conjunto de halagüeñas promesas. Es la enésima vez que las provincias renuevan sus esperanzas de ser federales como lo manda la Constitución. Si al cabo de tantos años de infortunios y esperanzas fracasaran las promesas, entonces, sí, con la desesperación en el alma y la mirada al cielo podríamos clamar la terrible imprecación del profeta Elías: ¡Señor! Exterminadnos porque somos incorregibles.»

Esta cuestión se plantea a escasos seis meses de la iniciación de la etapa de la reconstrucción nacional y después de dieciocho años en que las mayorías estuvieron en los hechos marginadas del quehacer republicano. Ningún conflicto institucional puede adquirir en tan poco tiempo extremos de gravedad tales que justifiquen el remedio federal, salvo que dudemos de la capacidad de las mayorías populares para manejar sus propios asuntos.

El proceso ha sido analizado en el mensaje del Poder Ejecutivo y no es necesario repetirlo porque todos los señores diputados lo conocen: el enfrentamiento de la Legislatura formoseña con el señor gobernador derivó, después de muchas alternativas, en un juicio político que destituye al mandatario y lo suspende, negándose él mismo a reconocer la sanción. Lo que ha habido es un enfrentamiento de poderes provinciales que tiene solución dentro de los resortes constitucionales de Formosa que deben ser puestos en juego para remediarlo. Insisto en afirmar que el propio Poder Ejecutivo nacional lo ha visto así y por ello no actúa en este caso como poder colegislador, y tal como lo manifiesta en su mensaje, «deja librado al Congreso determinar si el proceso encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 6º de la Constitución Nacional».

Y bien; frente a la decisión de la unanimidad de los señores diputados de Formosa nosotros, recogiendo la sugerencia del Poder Ejecutivo nacional, no podemos tener, sino un criterio: respetar esa decisión y hacerla respetar con todos los medios que estén a nuestro alcance.

No es cierto que la seguridad nacional esté comprometida, como se ha dicho en el Senado. Aceptar este argumento sería tanto como introducir un nuevo y extraconstitucional elemento para definir esta situación y colocar en estado de debilidad institucional latente a todas las provincias de frontera. Ese argumento intenta, señor presidente, suplir con un peligro externo la ausencia total de razones en el orden interno, crea inseguridad interna en nombre de una hipotética seguridad nacional amenazada, y propicia una cirugía drástica cuya marca quedará no sólo en el cuerpo de esta joven y sacrificada provincia de Formosa, sino sobre todo en el cuerpo de la República, justo en momentos en que estamos andando en paz y civilización el largo camino de nuestra recuperación definitiva.

La forma republicana de gobierno está garantizada en Formosa, tal como se dijo acá, por el juego normal de su Constitución. No hay invasión exterior, y el señor gobernador ha sido destituido por un procedimiento totalmente legítimo; no hay sedición ni invasión de otra provincia. Nada tiene que hacer aquí la norma del artículo 6º de la Constitución Nacional.

Todavía tengo que destacar que cuando asumió el señor vicegobernador de Formosa se encontraba a su lado la totalidad de los legis-

ladores de todos los partidos, los representantes de la CGT y de las 62 Organizaciones.

Aquella frase «yo haré lo que el pueblo quiere» ha dejado de ser el patrimonio singular de un caudillo político, desde luego indiscutido, para convertirse en un imperativo común de todos los que tenemos alguna responsabilidad de gobierno. El pueblo de Formosa quiere su Constitución, quiere sus autoridades, quiere sus leyes y quiere su autonomía. Respetemos, pues, esa voluntad; votemos en contra de esta intervención y habremos cumplido con nuestro deber.

**Sr. Presidente (García).** -- Tiene la palabra el señor diputado Sueldo.

**Sr. Sueldo.** -- Señor presidente: tenía entendido que éste no era mi turno, sino otro posterior ubicado luego de cuatro o cinco oradores; sin embargo, me da lo mismo porque yo me acomodo a cualquier turno.

En todas las materias legislativas, pero especialmente en ésta de las intervenciones federales, que hoy nos toca afrontar por primera vez, deberíamos hacer un esfuerzo para mantener un nivel que permita profundizar y analizar diría que con delicadeza tales temas. Me remito, en ese sentido, a las admonitorias palabras del señor diputado Cárdenas, con cuyos fundamentos, así como con los de los señores diputados Musacchio y Suárez, me declaro plenamente identificado. Pero me quedaría con una incomodidad espiritual si no dijera que yo también deploro, como el colega Cárdenas, que ese nivel no se haya mantenido. Valga el reproche, que lo hago con fraternal espíritu de libertad. No creo que podemos sacar fruto para los trabajos de las Cámaras con el estilo personal, que no comparto y que no juzgo más allá de lo que acabo de decir, que reitera el señor diputado Falabella en sus intervenciones.

Aquí se ha llegado a hablar de ciertas tierras, un asunto que quema; pero lo ha hecho el señor diputado Suárez con tal respeto y con tal autolimitación y decoro en sus expresiones que no ha motivado ningún escándalo. Ha utilizado la palabra «verticalidad» también el señor diputado Suárez. La ha usado, y no ha molestado a la bancada mayoritaria, porque la ha usado con delicadeza. Hasta de los temas más espinosos se puede hablar, pero con la mesura que debe caracterizar a la función parlamentaria.

Ahora tenemos que hacer un esfuerzo para levantar el asunto desde el nivel de cero o de cinco bajo cero, para empezar a argumentar de nuevo. Cuando terminó la exposición del señor diputado Suárez, tan contundente y tan emotiva, el silencio de la Cámara y la expresión de los señores diputados trasuntaba una preocupación muy honda, muy íntima, muy sincera; sobre todo los señores diputados del interior parecían sentirse tocados por esa apelación. Yo voy a tratar de retomar el hilo y el estilo de ese tipo de intervenciones.

Decía, señor presidente, que la interpretación jurídico-constitucional debe naturalmente ser restrictiva, y no extensiva, en materia de intervención federal en las provincias. Como hombres de ley —que lo somos los abogados, y también los no abogados en cuanto parlamentarios porque hacen la ley— en tal carácter, pues, no tenemos derecho a usar de analogías o de conjeturas personales para interpretar los preceptos fundamentales del orden institucional de la República. Aquí se nos exige la rotundidad de la certeza. ¿Por qué? No sólo por los artículos 5º y 6º que consagran la autonomía de las provincias y expresan que el gobierno central la garantiza y que cuando interviene lo hace para garantizar y no para avasallar, sino también por lo que dice el Preámbulo, que es además de la introducción espiritual, el *substractum* de la Constitución.

«Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina...». De alguna manera, aunque no seamos constituyentes, también investimos esa representación. Y sigue el texto: «...reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen...». Obsérvese que no se dice «que lo componen», es decir, al pueblo, sino «que la componen», esto es, que componen a la Nación. Pero no la componen con esa idea rudimentaria producto un poco de la escuela primaria que todos llevamos en la cabeza, es decir, por la vía sumatoria de pedazos reproducidos en un mapa. No, no es así. La componen porque la han engendrado.

Muchas veces se habla también de las provincias como si fueran hijas de la Nación. La verdad histórica es que la Nación es hija de las provincias. Ellas han preexistido a la ordenación de esta Argentina como nación. Antes había patria, que es el *alma mater* de la nación. Y esa madre, ese espíritu de nacionalidad que flotaba en las provincias, en medio de la anarquía y de todos los avatares por los que atravesamos como país en el siglo pasado, engendró a la Nación porque así lo quisieron las provincias, por sus pactos, por su voluntad reiterada, por su vocación nacional. Y la definieron también sobre el territorio. Una patria puede existir sin límites precisos. Desde mayo de 1810 hasta la organización constitucional, no sabíamos bien si teníamos como territorio al Alto Perú o la Banda Oriental. Pero cuando una nación se ordena como tal, cesan esas imprecisiones; y en nuestro caso se ordena la Nación porque las provincias, en su voluntad común, la dan a luz.

Por lo tanto, deberíamos dejar de hablar de las provincias, mirándolas desde del hombro para abajo, como hijitas del gobierno central, que éste pudiese tutelar a discreción.

Pero supongamos que debiese intervenir Formosa o cualquier otra provincia, de alguna manera y en alguna medida. Vamos a ver si demostramos el teorema por reducción al absurdo.

Se supone que la prudencia política exige gestiones previas para evitar la situación límite. A esto aludió delicadamente el señor diputado Suárez, cuando habló del gobierno central y de su disposición por la verticalidad. Yo diría, simplemente, del enorme consenso que tiene este gobierno, más allá de las fronteras de sus propios votantes; del enorme poder que concentra en sí, más aún con nuestro federalismo endeble, de cartón, al que tenemos que fortificar para que no se siga llevándolo por delante.

Pudieron haberse hecho gestiones; no oír a las partes y pasar el papelito al Congreso; pudo intervenir activamente como en el caso de Mendoza, esto es, intervenir para evitar intervenir. Primero, uso la palabra en el sentido corriente: intervenir como un gestor, como un componedor, como el deber del poder central, para evitar tener que intervenir en el segundo sentido de la palabra: avasallar la autonomía provincial. Esto no es una acusación gratuita. Nadie se sienta molesto, porque evidentemente, si se intervienen los tres poderes, se avasalla la autonomía de la provincia. Esto es un hecho, una descripción de la realidad jurídico-institucional que esta medida significa.

Encuentro que esas gestiones no se han cumplido. Lamentablemente, por lo menos no se han cumplido en cuanto a la forma en que el asunto ha sido traído a este Parlamento. No hay noticia pública ni hay estado de conciencia nacional sobre que se hayan hecho esfuerzos para evitar esto.

En segundo lugar, suponiendo que hay que dar el paso de la intervención, para qué y en qué medida. No todas las intervenciones son iguales. Hay un margen muy amplio en la Constitución. Se puede intervenir para ayudar al funcionamiento de los mecanismos institucionales de la provincia; incluso para sugerir correcciones, ordenar procedimientos, etcétera. Otra vez vale lo que antes dije, pero ahora intervenir en parte, para no tener que intervenir del todo. Aquí, por ejemplo, intervenir sólo un poder, quizás el Poder Ejecutivo en rebeldía. En fin, hay toda una gama de procedimientos, pero lo que está excluido es que se intervenga para impedir el funcionamiento de los organismos institucionales autónomos.

¿Que hay dos gobernadores, y los dos sin imperio? Yo no creo que esto sea cierto. En todo caso, ¿hasta dónde y por qué?

Antes de este debate ha tomado estado público la presunta orden del Ministerio del Interior para substraer la policía provincial del apoyo que debía prestar a la Legislatura. No ha sido desmentida. La negativa posterior del funcionario policial aludido me vale muy poco. Hay un instrumento público, labrado no por una persona particular de determinado bando político, sino por un funcionario público, un fedatario público. Por su profesión, título y registro, el escribano da fe de los actos, y sus dichos tienen

que ser redargüidos formalmente de falsedad, para poderse destruir lo que se expresa en la escritura pública. Además no le saquemos el cuerpo a la responsabilidad de nuestra impugnación, si es que impugnamos la buena fe u honestidad de la escribana. Estaríamos tirando la piedra a toda la Legislatura provincial, que respaldó esa actuación.

¿Y no nos dice nada la unanimidad de una Legislatura? ¿Es que vamos a pasar por encima de una manifestación coincidente de todos los sectores políticos con representación en esa sala provincial legislativa? Yo creo que en este caso, infelizmente, se ha ayudado a producir la situación límite, en vez de procurarse evitarla. Y no imputo intenciones; no me gusta hacerlo. Además, no hace falta, para estar en desacuerdo con algo, probar que se hizo malintencionadamente. Simplemente aquí ha surgido un *casus belli*, digamos así, porque no se ha seguido la conducta necesaria para impedirlo.

En fin, nos encontramos abocados al tratamiento de un proyecto ya sancionado por el Senado que no pretende hacer cirugía parcial, sino total; y yo me temo que en este caso esa cirugía total equivale a la degollación del enfermo, cuando había mucho margen —y sigue habiéndolo— para que esta situación tenga solución dentro de los carriles institucionales de la provincia, que en alguna medida son también los de la Nación.

Aquí se han apostado bancas. Yo simplemente apostaría palabra contra palabra de colegas, con el más estimado sentido de la relación parlamentaria. Mejor aún: yo diría por qué no apostamos todos a la hipótesis de que se puede remediar el conflicto y damos tiempo a esa provincia para que se encarrile sola y aprenda a vivir en democracia. Se trata de una provincia joven que no acaba de salir, no de los vicios de la politiquería de las viejas provincias, sino de las garras de los gobiernos centrales, que tanto en la Patagonia como en las nuevas provincias nortenas han mantenido después de la autonomía política el manejo de las economías provinciales a través de la posesión de las tierras públicas, luego traspasadas a las provincias, que tampoco han podido hacer buen uso de ellas por estar frecuentemente intervenidas. Vale decir: la mala es la escuela y no el alumno, y nosotros estamos en el deber de reeducar a la escuela y no darle un cachetazo al alumno, ponerlo bajo penitencia en un rincón y decirle: tú no sabes manejarte solo.

¿Por qué la intervención a la Legislatura? ¿Por la ilegalidad del juicio político? Estamos frente a una Constitución reglamentarista, que ha dedicado un puñado de largos artículos a instituir el procedimiento del juicio político.

La interpretación que el jurista debe hacer de las leyes reposa fundamentalmente sobre un criterio que los autores suelen llamar a veces, queriendo hablar en difícil, teleológico, es decir,

finalístico, el «para qué» de la norma; aclara mucho más que la búsqueda del mero significado gramatical, la de los antecedentes que nos permiten determinar la voluntad auténtica del legislador.

¿Para qué la norma? Si este cuerpo, verdadero catálogo reglamentario del juicio político, existe, nos está diciendo que lo de la supuesta ley reglamentaria es bastante relativo. Además, aparece enunciado al final de este capítulo, de la siguiente forma: «una ley reglamentará estas bases». ¿Cuáles bases? Y aquí empezamos a deslizarnos por el tobogán de la incertidumbre. ¿Cuáles bases son las que deben reglamentar? ¿Las de la última frase? ¿Las de ese artículo? ¿Las de todos los artículos? ¿Pero es que eso hace falta, además, con una Constitución que ha detallado todo el procedimiento? De todos modos, la sanción de la Legislatura ha dado una ley que necesitaba, por cierto, de promulgación explícita o tácita.

¿Por qué el plazo para la promulgación? Otra vez la interpretación finalística. Usemos el raciocinio jurídico. ¿Para qué existe el mecanismo de la promulgación? Para que el poder legislador, que es el Ejecutivo, pueda hacer uso, eventualmente, del derecho al veto. O sea que es un mecanismo que existe en expectativa de veto. Vencido el plazo sin que haya hecho uso del veto, la ley es ley en plenitud. Pero habiendo hecho uso del veto, el plazo también se acaba. El Ejecutivo formoseño hizo uso del veto y la Legislatura insistió por unanimidad. El asunto quedó terminado ahí; no hay cuestión en debate, porque no hay nueva expectativa de veto.

También se acusa a la Legislatura porque no oyó antes al gobernador. Entramos entonces otra vez en el tembladeral jurídico. Se dice que el interesado debe pedir, si la desea, citación y audiencia. ¿Será la citación? ¿Será la audiencia? ¿Y sobre bases tan resbaladizas vamos a sostener la nulidad del juicio político? Pero, además, ¿es acaso cierto que se ha violado el derecho de defensa? La suspensión abre recién el proceso, y entonces vendrá el descargo del gobernador, el período de prueba y la sentencia.

No hace falta ser abogado para darse cuenta de que aquí no está violado el derecho de defensa en lo más mínimo. Más aún; la suspensión es previa al juicio propiamente dicho. ¿Por qué? Nuevamente el criterio finalístico. ¿Para qué el instituto de la suspensión? Para que no esté ejerciendo la titularidad de la conducción ejecutiva del Estado un gobernador que va a ser sometido a juicio, por una cuestión de decoro institucional que hace a la salud de la República en ese lugar de la Nación que es Formosa. No puede estar soportando el juicio un gobernador en ejercicio, por decoro y por posible incompatibilidad en el manejo de ciertos mecanismos que precisamente deben ser investigados, que pueden referirse a cuestiones de dinero, de nombramientos, policiales y tantas otras co-

sas. ¿Cómo se puede investigar al investigado si éste está ejerciendo el gobierno?

De manera que aquí no hay una base jurídica cierta para expresar que el juicio político adolece de nulidad. No adolece de ningún defecto que lo invalide y, por lo tanto, el deber del poder central es el de intervenir en respaldo de la Legislatura, como pudo haber sido que el teléfono sirviera para otra cosa, para decirle, no de oficio sino ante una consulta de la policía provincial: «Usted debe acatar el procedimiento de la Constitución». Vale decir, el vicegobernador puesto en ejercicio de la gobernación por la Legislatura.

¿Por qué la intervención al Poder Judicial? ¿Por la actuación del presidente del Superior Tribunal? Huelgan argumentos. Me remito a los dados por los señores diputados que han coincidido con esta posición contraria a la intervención.

El presidente del Superior Tribunal se ha limitado a cumplir lo que le manda la Constitución. No es parte en el pleito. Además, ¿por qué vamos a extender la intervención a todo el Poder Judicial? Se ha dicho que un juez del crimen no fue del todo celoso en el cumplimiento de sus funciones cuando le llegó un exhorto de un tribunal del Chaco, donde se pedía el desafuero de un diputado de la Legislatura formoseña para someterlo a la justicia de aquella provincia. ¿Cuál es el celo que debe tener el juez? El de no retener el exhorto en sus manos. Eso fue lo que hizo; no lo retuvo, lo pasó a la Legislatura. Esta se demoró, como ocurriría también en esta Cámara, supongo, para tratar a fondo y más bien lentamente un pedido de desafuero de cualquiera de sus miembros. En todo caso, eso era parte del problema político de la provincia en el cual no tenía por qué inmiscuirse el juez.

¿Qué hacemos nosotros aquí ante este hecho? ¿Estamos haciendo de jury de enjuiciamiento de magistrados? Pero, ¿con qué bases? Con bases enteramente subjetivas. Acá está campeando la subjetividad. ¿Qué elementos de juicio reales, contundentes, tenemos para sostener que se debe intervenir al Poder Judicial de Formosa? ¿Porque el presidente acató un precepto de la Constitución y porque un juez no fue muy rápido?

En fin; esto ocurre, Honorable Cámara, cuando se quiere construir un andamiaje jurídico sobre un cimiento movable, sobre una ciénaga de interpretaciones jurídicas personales, cargadas de subjetividad. El miembro informante de la mayoría admitió que estaba haciendo interpretaciones personales de algunas palabras de la Constitución provincial de Formosa, y que las consideraba tan respetables como las otras interpretaciones personales que se pudieran hacer.

¿Sobre esa base vamos a intervenir una provincia? ¿Qué significa una intervención en la provincia? ¿Es que acaso no tenemos amplia

experiencia de lo que es la intervención, pese a la buena voluntad con que se la pueda preconizar o estatuir por ley? ¿Va a ser mejor la suerte de la provincia de Formosa con una intervención federal?

El allanamiento de la autonomía provincial es un recurso excepcional, gravísimo, y por esto es de interpretación y de aplicación restrictiva. Y no solamente por los solemnes textos constitucionales que antes he invocado, sino por lo que de ellos resulta en forma indirecta y clara. La lesión al federalismo, que es raíz histórica, jurídica e institucional del ordenamiento institucional de la República, ineludiblemente lesiona también a todo el organismo, a todo el sistema representativo, republicano y federal de la Nación misma.

No es la enfermedad de Formosa; es una enfermedad que de algún modo afecta al organismo político e institucional de la República. Es por ello que apelo hondamente a una reflexión en común, hecha con total desapasionamiento de politiquerías pequeñas, hecha con la gran pasión por el bien público. No nos llevemos por delante la autonomía de la provincia de Formosa, démosle una oportunidad, ayudémosla fraternalmente, que es el deber de hermandad de los Estados provinciales y de la Nación.

Aquí se ha hablado de tierras, y tengo que reconocer que en todo esto hay algo raro. He estado en la Casa de Gobierno de la Nación, la que popularmente se conoce con el nombre de Casa Rosada, y un funcionario, al cual no voy a identificar porque los juicios de prudencia política nadie los delega en el prójimo, un alto funcionario, me ha dicho que el trasfondo de todo esto viene desde hace siete años atrás, con intervenciones militares y con tres millones de hectáreas de tierras fiscales adjudicadas viciosamente. Esto no lo invento, me lo han dicho en la Casa Rosada.

No se puede, desde luego, arrojar una mancha ni una sombra sobre nadie en particular, pero si hay problemas graves en la provincia de Formosa, ¿por qué no los investigamos? Se supone que también estamos para esto.

Y ya que aquí se ha hablado de «penas republicanas», estamos ciertos, yo, por lo menos, de que las penas son de nosotros y las hectáreas son ajenas. Y esto lo puede decir la mayoría del pueblo formoseño, los miles de minifundistas formoseños, que no sé si van a encontrar una solución por la vía de la intervención federal.

Señor presidente: la preocupación que responsablemente, con levantado espíritu y con independencia de todo partidismo, embarga a muchos legisladores, va más allá de la provincia de Formosa. Creemos que es un mal comienzo y que si hoy allanamos la autonomía formoseña en las condiciones que se han dado y con la endeblez de los argumentos jurídicos expuestos,

vamos a sentar un mal precedente, porque, por un quitame allá esas pajas, como dicen los españoles, no habrá autonomía que quede en pie si nosotros sentamos hoy un criterio equivocado en el primer caso que tenemos.

Por estas consideraciones, anticipo el voto negativo de mi sector al proyecto en discusión. (Aplausos.)

**Sr. Presidente** (García). — Tiene la palabra el señor diputado Labake.

**Sr. Labake.** — Señor presidente: es común, y hasta podríamos decir que políticamente hablando es normal, que las oposiciones aprovechen cuanta oportunidad se les presenta para hacer un poco de escándalo político; y todo proyecto de intervención a una provincia, por más justificado que sea, necesariamente da lugar a un escándalo político. Entonces, nadie debe extrañarse, ni nos vamos a rasgar las vestiduras, porque la oposición haya aprovechado esta oportunidad, se haya divertido un poco y haya desfogado su natural *animus* de oposición. No debe preocuparnos que la oposición haga escándalo, que ponga una pica en Flandes de vez en cuando, con razón o sin razón, simplemente aprovechando una oportunidad políticamente escandalosa, siempre y cuando el problema sea de poca monta y no se juegue con valores fundamentales, porque si el problema fuera importante y estuvieran en juego valores fundamentales de la vida de la Nación, entonces ya no se trataría de una picardía política, sino que esa actitud podría llegar a configurar una irresponsabilidad política.

**Sr. Suárez (L. M.).** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Labake.** — Yo estimo que todos los diputados de la oposición tienen un alto grado de responsabilidad política, y así lo han demostrado a lo largo de estos seis meses de sesión. Por eso me han extrañado seis o siete afirmaciones que he ido anotando al pasar, si bien a esta altura de la madrugada honestamente no podría precisar qué diputados las han formulado. Son afirmaciones, a veces contradictorias, y que parecieran dar la impresión de que se ha querido hacer un escandalete político al margen del fondo de la cuestión.

Se ha dicho que intervenimos a pedido, o sea, encuadrando la intervención en el segundo supuesto del artículo 6º de la Constitución —«y a requisición de las autoridades constituidas...»—, y por ello se ha argumentado que como el pedido ha sido hecho por el gobernador para intervenir a la Legislatura, debíamos limitarnos a intervenir a la Legislatura y no a los tres poderes provinciales. Pero no es así; no intervenimos a pedido de las autoridades provinciales. En todo caso el proyecto se encuadra en la primera parte del artículo 6º de la Constitución y, por lo tanto, no digo que no sea responsable, pero por lo menos no es serio argumentar que como es una intervención a pedido tenemos que limitarnos



a intervenir solamente a la Legislatura provincial.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

**Sr. Musacchio.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Labake.** — Estoy tratando de hablar con el mayor respeto justamente para no dar lugar a interrupciones. Pero el señor diputado ha sido tan amable que no puedo negarme a concederle la interrupción que me solicita.

**Sr. Musacchio.** — La pregunta que yo haría es la siguiente: si la intervención no la trata la Cámara a pedido del Poder Ejecutivo de la provincia, y tampoco la ha pedido el Poder Ejecutivo nacional, yo no sé de dónde surge en definitiva este proyecto de intervención, porque ambos poderes —el Poder Ejecutivo provincial y el Poder Ejecutivo nacional— serían, uno por ser interesado directo y el otro por tener los elementos de juicio suficientes, los que tendrían que orientar a la Cámara y formular el pedido concreto.

**Sr. Labake.** — Voy a disipar las dudas. Este tratamiento nace porque el Poder Ejecutivo eleva antecedentes al Senado, éste analiza la información y da media sanción a una ley de intervención, sobre la base de su criterio, sin que la iniciativa de la intervención surja del Poder Ejecutivo nacional ni a pedido de las autoridades provinciales de Formosa. El Poder Ejecutivo nacional eleva información al Senado, y el Senado, basado en esa información, juzga necesaria la intervención. Está claro que es la primera parte del artículo 69 que tratamos.

El segundo episodio, referido a las declaraciones del jefe de policía, ha sido tratado con ligereza. Consigno lo siguiente: el acta famosa no está firmada por el jefe de policía y por lo tanto no es éste el que se desdice de una declaración pública, en el sentido de que un día afirma que recibe una orden del ministro del Interior y al día siguiente lo niega.

La escribana que labró el acta es parte del asunto, y ya veremos luego cómo todo Formosa también lo es: me refiero a todas las autoridades. La escribana, que es una de las partes, dice que el jefe dijo, pero resulta que al día siguiente el jefe dice que no dijo; o sea que no es tan firme el argumento. Es la palabra de uno contra la de otro. En segundo lugar, el acta no dice que el jefe dijo que el ministro le ordenó tal cosa; el acta dice que el jefe dice que por orden emanada del ministerio... En este juego de palabras, «por orden emanada del ministerio», podría llegar a suponerse que se trata de un empleado subalterno amigo del señor jefe de policía, suponiendo que fueran reales las afirmaciones, que le habría aconsejado: «No conviene que usted se meta en esto; directamente, manténgase en una postura de guardar el orden».

Se ha hecho gran hincapié sobre ese argumento, cuya solidez, por lo visto, está muy cuestionada, primero, porque se trata de un hombre al cual se atribuyen manifestaciones que al día siguiente niega, y segundo, porque las manifestaciones no son claras.

El tercer hecho se refiere a las famosas tierras. Sobre este punto se ha actuado con mayor gravedad aún. Si el señor ministro Llambí quisiera hacer un juicio por calumnias no podría hacerlo, porque las palabras fueron dichas con la habilidad de un abogado experto. Técnica-mente hablando, no hay calumnia, hay insidia política que roza el honor personal del señor ministro, y eso es lo grave. Si hay alguna denuncia que hacer, se hace; si hay investigación que hacer, damos la seguridad de que la vamos a hacer. Pero lanzar insidias en la Cámara, no lo vamos a permitir.

**Sr. Suárez (L. M.).** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Labake.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Señalo al señor diputado que no me alarma su tono paternal. Es habitual en sus pretendidas réplicas el usar un tono paternal que a mí no me conmueve.

Quiero dejar en claro que aquí no hay insidia.

**Sr. Labake.** — No me refería a sus palabras.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Yo dije que nos hubiera gustado que estuviera presente el señor ministro del Interior para aclarar una serie de puntos que hemos concretado en un pedido de interpelación. Y en mi exposición me he referido concretamente a un proyecto tratado por la Legislatura de Formosa en donde se expropiaban distintas sociedades anónimas, en número de diez, una gran cantidad de fracciones de terreno. No he dicho, porque tampoco surge del proyecto, cuáles son los propietarios de estas tierras. Lo que sí señalo es que es público y notorio en Formosa que la gente entiende que muchos de los problemas políticos de la provincia tienen vinculación con estas tierras a expropiarse.

Digo esto para colocar las cosas en su lugar, y agradezco al señor diputado la interrupción que me ha concedido.

**Sr. Labake.** — No me he referido al señor diputado Suárez cuando en el curso del debate manifesté que lo que se decía era insidioso; me he referido a lo dicho por el señor diputado Falabella, que era insidioso. Además, yo no pretendo ser padre de ninguno de los señores diputados. No tengo edad para serlo.

**Sr. Falabella.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Labake.** — No voy a permitir más interrupciones.

Creo que esto de largar acusaciones, dichas muy hábilmente para que no puedan aparecer como calumnias, que al día siguiente tienen eco periodístico en todo el país, produce un daño gratuito e injustificado. Esto es como derramar agua: trátase de recogerla después, si se puede.



Con esto lo que se hace es tirarle al ministro Llambí tierra a la cara. ¿Quién la limpia? ¿Y si resulta que éste no tiene nada que ver? Ya será tarde porque mañana periodísticamente se va a jugar con esto. Podrán después venir cincuenta solicitadas de desmentida, pero ya está largado el cargo, y esto no debe hacerse en una Cámara.

Paso ahora al problema de la verticalidad que se nos ha enrostrado. Me doy por satisfecho con el cambio de términos efectuado por el diputado Falabella, pero no me doy por satisfecho con otras manifestaciones acerca de la cuestión de la verticalidad. Esta es una institución que funciona internamente para el peronismo, y no me voy a detener en una larga explicación de cómo funciona, porque es una cuestión nuestra que, en última instancia, a nadie le importa. Nosotros somos lo suficientemente grandes y responsables de nuestra dignidad personal para saber cómo respetamos dicha verticalidad, y no tenemos que dar de ello explicaciones a nadie. Lo que hay que aclarar es que no funciona externamente, no funciona para el gobierno, porque el presidente de la República es por un lado presidente de la Nación y por otro lado conductor de un movimiento. En la conducción del movimiento funciona la verticalidad, pero no como piensan los que están acostumbrados a una mentalidad liberal y creen que todo lo que no sea poner un voto en la urna no es democracia.

**Sr. Molinari Romero.** — No nos meta en la misma bolsa con los liberales.

**Sr. Labake.** — Tiene razón, señor diputado: no son todos. Me refiero a los que han hecho cuestión de la verticalidad.

La verticalidad funciona cuando el señor general Perón actúa como conductor de un movimiento; cuando actúa como presidente de un país, rige la Constitución.

Se dijo aquí incluso, en un juego de palabras, que el Poder Ejecutivo usando la verticalidad, como lo hizo en Mendoza y Buenos Aires, podía evitar esta situación. Si la verticalidad funcionara a nivel del Ejecutivo, o sea, a nivel de gobierno, a nivel externo del peronismo, nos estarían diciendo ya que el Poder Ejecutivo se entromete en las cuestiones de provincias. Mientras tanto, nos piden que el Poder Ejecutivo use la verticalidad con Formosa...

Lo que se ha hecho en todas las provincias, como se hace siempre en el peronismo cuando hay conflictos internos, es sugerir soluciones amistosas entre las partes que están en juego, y sólo cuando eso no ha dado resultados —luego de un plazo más que prudencial— se ha recurrido a los resortes constitucionales de la intervención, como en este caso. Pero de ninguna manera se puede decir que el Poder Ejecutivo, usando de la verticalidad del movimiento, abuse del poder. Lo real es que la verticalidad nada tiene que ver con el asunto en debate.

En este tren de argumentación se ha llegado a decir que en Formosa no hay problemas y que

quien lo tiene es el señor ministro del Interior, pues la paz reina en la provincia. Esto ni siquiera hace falta contestarlo porque los hechos están demostrando la existencia de problemas en Formosa y no en el Ministerio del Interior.

Entrando a considerar lo que podríamos llamar argumentos de fondo de la oposición, se puede concluir que los señores diputados contrarios a la intervención han actuado con una mentalidad excesivamente jurídica formalista o excesivamente emotiva.

Con mentalidad jurídica formalista se quiere insistir en que no hay conflicto en Formosa, y el señor miembro informante de la mayoría ha demostrado que ni siquiera hay allí un gobierno con poder suficiente para imponerse. Dicen que no hay conflicto, pero se ha afirmado que hay particulares armados en la casa de gobierno y que por eso no pudo entrar en ella la escribana. Dicen que no hay conflicto, sino «sólo un poder que no acata a otro» y eso, ¿qué es sino un conflicto?

También se ha dicho que no hay conflicto porque la Legislatura formoseña, en pleno, por unanimidad, ha tomado sus resoluciones. Sin referirme específicamente a Formosa, ni a ninguna otra provincia, señalo que una Legislatura entera también puede equivocarse, como puede también ser parte de un conflicto y, por lo tanto, todo lo que ella diga y resuelva no deja de ser parcial y la Legislatura de Formosa es una de las partes de este conflicto; por lo tanto, todo lo que haga o diga es sólo eso: manifestaciones de una de las partes.

Todo eso no constituye un elemento de juicio para decir que no hay conflicto, porque él existe, está en la calle, en los diarios. Formosa no puede salir del pantano en que se encuentra por más fundamentación formalmente jurídica que se quiera hacer del problema. Porque el conflicto existe y está adelante de nuestros ojos y ha paralizado a Formosa.

También se ha utilizado otro grupo de argumentación: el emotivo. Algunos diputados han dicho, «nos duelen las intervenciones», «cualquier cosa menos intervenir». Yo pregunto si el Poder Legislativo que trata la intervención acaso la quiere decretar por placer. Lo hace para evitar un mal mayor y porque existe una causal absolutamente real, conflictiva, que hay que solucionar de alguna manera. Este tema lo dejo así simplemente, ya que la emotividad no puede manejar actos de tanta importancia.

En cambio, hay otro grupo de argumentación que aquí no se ha dado y que es el que de hecho ha empleado el partido gobernante. Esta es la argumentación política, y constituye en realidad la actitud que ha seguido desde el principio el gobierno, tanto con relación a Formosa como con respecto a las otras provincias que han tenido algún conflicto. Primero ha tratado que se arreglen ellas mismas. Después ha intervenido el Ministerio del Interior como

amigable componedor, y no me cabe la menor duda que lo habrá hecho por indicación del señor presidente de la República. Por este camino, Mendoza arregló su problema, y lo mismo que allí pasó, deseamos que suceda en Buenos Aires o en cualquier otra provincia en la que surja algún conflicto de este tipo. Repito que éste es el criterio político. Lo que ocurre es que algunas provincias están en vías de conseguir una solución, o la han conseguido, en tanto que otras no han podido hacerlo. Este último es el caso de Formosa. Esto significa que Formosa ha entrado en un estado conflictivo o de pantano del que no puede salir. Una parte discute a la otra; un sector viene a pedir la intervención; el Poder Ejecutivo provincial veta el proyecto de ley de reglamentación del juicio político; etcétera, etcétera. Entonces hay que actuar, pero no con la verticalidad partidaria, sino con los mecanismos constitucionales. Se trae el problema al Congreso, y se explican los detalles en un informe del Ejecutivo. Prescindamos de si el informe se ha recibido o no a tiempo; algunos señores diputados han dicho que no se ha enviado con el tiempo suficiente, en tanto que el señor diputado García ha sostenido lo contrario.

**Sr. Falabella.** — No lo recibió ninguno de los miembros de la comisión.

**Sr. Labake.** — Sería un problema de detalle que no creo que afecte la cuestión de fondo.

Este Congreso trata con absoluta libertad el problema, y la mayoría del Senado al igual que la mayoría de esta Cámara llegan a la conclusión de que la única forma de sacar a la provincia de Formosa adelante es una intervención a los tres poderes. Ese ha sido el camino político. No volvamos a caer en argumentaciones estrictamente formales o leguleyas preguntando por qué se hace la intervención a los tres poderes; simplemente, porque los tres poderes, según la documentación que se ha aportado, están inmiscuidos en el problema; los tres han quedado empantanados en este conflicto de poderes. Lo que falta en Formosa es un poder constituido que mande a la provincia y la saque adelante; lo que falta es una definición política del poder, porque los tres poderes han quedado paralizados entre sí. Hoy no se sabe quién gobierna en Formosa. Por eso hay que comenzar de nuevo e intervenir los tres poderes, para que en esa provincia los formoseños puedan arreglar sus cosas eligiendo de nuevo sus gobernantes.

Este es el criterio político con que se pide la intervención, y ésta es la actitud que han seguido tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo.

Una cosa completamente distinta es la que atañe a las tierras; que si son 45.000 ó tres millones de hectáreas, o si pertenecen a la familia tal o cual. Los diputados del bloque de la mayoría van a investigar esta cuestión con el mismo o mayor interés que cualquier otro diputado. Pero, por favor, señores, no mezclamos las co-

sas. Hoy no tratamos el problema de los tres millones de hectáreas, sino que tratamos la intervención a la provincia de Formosa. Los tres millones de hectáreas pueden haber sido causa remota de trastornos sociales en la provincia, que desembocan ahora en un conflicto de poderes. Puede ser, pero no tratemos de solucionar eso antes de arreglar el conflicto de poderes, porque podría suceder que no queden formoseños para gozar de esos tres millones de hectáreas. Arreglemos primero el problema político del poder y luego todo lo demás. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Colello.** — Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Colello.

**Sr. Colello.** — A los fines de que las palabras del señor diputado Labake no queden en el aire, lo invito a que firmemos conjuntamente un proyecto solicitando la formación de una comisión investigadora de este asunto de las tierras de Formosa.

**Sr. Labake.** — Mis palabras nunca quedan en el aire, señor diputado; siempre cumplo con ellas. De cualquier manera, como tengo precisamente la costumbre de cumplir mis palabras, ellas quedan consignadas en la versión taquigráfica de esta sesión.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Gill.

**Sr. Fernández Gill.** — Señor presidente: en este debate tan elevado ha habido solamente dos notas penosas, yo diría lamentables: por un lado, los juicios vertidos con suma peligrosidad por el señor diputado Falabella y, por el otro, el comienzo de la exposición del señor diputado Labake. No puedo pasar por alto las manifestaciones del señor diputado Labake, cuando ha dicho que con este problema —que no ha sido planteado ni originado por los diputados pertenecientes a los partidos de la oposición, sino por los diputados y por el partido mayoritario— hemos querido divertirnos un poco o hacer un escándalo. Con todo el afecto, muy sincero, que tengo por el señor diputado Labake —él lo sabe—, le digo que lo que han querido hacer todos los señores diputados que con gran responsabilidad e inclusive con gran conocimiento de la cuestión constitucional intervinieron en este debate, ha sido simplemente cumplir con el juramento que dimos en este recinto cuando nos comprometimos a respetar la Constitución Nacional y a hacerla respetar en cuanto de nosotros dependa.

**Sr. Labake.** — ¿Me permite aclarar mis propias palabras, señor diputado?

**Sr. Fernández Gill.** — ¿Cómo no!

**Sr. Labake.** — Aclaro que no hablé de diversión, en un sentido peyorativo, sino de «divertimiento» político.

**Sr. Fernández Gill.** — Pero usted señaló que se aprovechaba este tema.

**Sr. Labake.** — Sí, eso lo dije.

**Sr. Fernández Gill** — He permanecido en el recinto durante todo el desarrollo del debate, y no creo que algún diputado haya pretendido hacer escándalo de este tema. En cambio, han dado contundentes argumentos jurídicos, de orden constitucional y de orden político.

Lamento también las expresiones vertidas al comienzo de su exposición por el señor diputado Suárez, cuando señaló que no se habían hecho presentes en el recinto porque no querían legalizar con su presencia el avasallamiento a una provincia argentina, puesto que por intermedio de Secretaría estaban informados que en ese momento había 123 diputados en el recinto. Nuestro bloque, con sus dos diputados, estaba junto con otros sectores políticos cumpliendo con la obligación de contribuir al mantenimiento del quórum.

El señor diputado Suárez ha cometido una injusticia similar a la que en otras circunstancias cometen para con nosotros algunos hombres del peronismo. Me refiero, en concreto, al señor ministro del Interior, cuando permanentemente nos quiere colocar en ese 15 % del país que está en contra de la reconstrucción nacional o de todo cuanto se hace para quebrar las estructuras del colonialismo y la dependencia, o en contra de que la Argentina pueda ser realmente la Argentina potencia que todos soñamos.

**Sr. Suárez (L. M.).** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Fernández Gill.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Cuando señalé al comienzo de mi exposición el hecho que no nos habíamos presentado para contribuir al logro del quórum para sancionar la ley de intervención a Formosa, expuse nuestra actitud. De ninguna manera he pretendido calificar la actitud de los otros sectores que integran la Honorable Cámara, ya que ellos, por supuesto, son dueños de adoptar la táctica y el procedimiento que crean más convenientes para sus finalidades. Por otra parte, son procedimientos perfectamente lícitos tanto el adoptado por nosotros como el seguido por el señor diputado.

**Sr. Fernández Gill.** — Acepto la aclaración del señor diputado, no sin dejar de ratificar nuestra conducta en este Parlamento. Aunque tengamos que librar las batallas en las condiciones más adversas y sepamos de antemano su resultado, vamos a llevarlas a cabo con toda responsabilidad en el seno de esta Honorable Cámara.

Frente al problema que nos ocupa, los argumentos que se dieron en este recinto son suficientemente extensos y claros. Nuestro bloque, que tiene una profunda vocación federalista y que ha condenado no solamente los imperialismos externos, vengan de la derecha o la izquierda, sino que también ha hablado del imperialismo portuario que permanentemente ha ejercido Buenos Aires sobre el resto de las provincias argentinas, no puede sino oponerse a

este proyecto de intervención federal. Inclusive estábamos dispuestos a formular una sugerencia similar a la que en el Senado de la Nación propusieron los señores senadores Sapag y Bravo, en el sentido de crear una comisión especial interparlamentaria para que, constituyéndose *in situ*, hiciera una última tentativa para recabar una información exhaustiva tendiente a impedir un acto de esta naturaleza por parte del Congreso de la Nación. Se trataba de procurar conversar y recibir información objetiva y estar en contacto con todos los sectores de la comunidad, a fin de determinar si realmente los hechos eran tan graves como para justificar una actitud de la importancia de la que seguramente el Parlamento habrá de sancionar en la noche de hoy.

Simplemente, nuestro bloque se opone a este proyecto, por entender que es decididamente inconstitucional. Es decir que no lo podemos ubicar en ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 69 de la Constitución nacional, que dice que «el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia». En este caso, según nuestro criterio, no se da ninguna de esas causales. Desde luego la provincia no ha sido invadida, ni tampoco hay sedición, tal como lo describiera el señor diputado Musacchio y la tipifica el Código Penal en su artículo 229.

Según nuestro criterio, tampoco se da una alteración del sistema republicano de gobierno, desde el momento en que los tres poderes provinciales están funcionando. Por ello es que entendemos que al no existir ninguna de tales alteraciones, debe tener plena vigencia el artículo 59 de la Constitución Nacional, que dice que «cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, la educación primaria, y la cooperación requerida por el gobierno federal a fin de hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten». El artículo concluye expresando: «Con estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones».

Hubiéramos podido entrar a analizar algunos otros aspectos. Por ejemplo, cuál de las fracciones internas del peronismo es la que tiene razón, porque, evidentemente, es el peronismo el que nos ha traído este problema al seno de la Cámara, por lo que nadie podría acusarnos de meternos en casa ajena. ¿Cuál de las fracciones internas del peronismo procura mantener el *statu quo* en la provincia? ¿Cuál de

las fracciones quiere realmente el cambio estructural que la provincia está requiriendo? Podríamos analizar así cuál de las fracciones del peronismo está, en definitiva, enmarcada en el proceso de liberación y recuperación nacional. Pero, por encima de esas consideraciones, nos hemos limitado y nos limitaremos exclusivamente a los argumentos de orden constitucional que, según nuestro criterio, están clara y taxativamente establecidos en los artículos 59 y 69 de la Constitución Nacional, que he citado.

Por estas motivaciones, el bloque de la Alianza Popular Federalista se opone terminantemente a este proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Formosa.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Moyano.

**Sr. Moyano.** — Señor presidente y señores diputados: he de fundar mi oposición al proyecto de ley que la Honorable Cámara está considerando. Lo hago en mi carácter de militante de un partido provincial con muy modesta representación en este Congreso, pero sintiendo sobre mis hombros la grave responsabilidad que, como representante del pueblo, estoy en este momento ejercitando, porque creo que cuando se tratan los problemas de la intervención a las provincias se está considerando algo muy importante, que es el régimen federal de gobierno que la Nación Argentina se ha dado en su Constitución.

No es que crea que no puedan ser intervenidas las provincias. No podría desprenderse semejante conclusión de este aserto. Pensamos que el Congreso Nacional tiene la atribución innegable de intervenir las provincias y tiene también el deber ineludible de informarse plena y acabadamente para verificar en forma inquestionable si han llegado a darse o no los supuestos normativos establecidos en los artículos 59 y 69 de la Constitución Nacional.

No creo que el trámite dado a este proyecto demuestre un estudio acabado de la situación; por lo menos declaro que en mi caso prácticamente estoy navegando en la improvisación por la falta de noticias oficiales. Me parece que si en el Senado se sancionó este proyecto sin despacho de comisión y en esta Cámara de Diputados los despachos se han hecho recién esta tarde, no ha habido elementos de juicio suficientes como para llegar a una auténtica convicción para resolver en definitiva un tema de tal gravedad y tan delicado como es el avasallamiento de las instituciones provinciales.

Creo que el mismo proyecto presentado en el Senado por el senador Fonrouge va más allá de lo que se ha estilado como fórmula en este Congreso. Ni siquiera se habla de la violación que hubiera ocurrido en Formosa del régimen republicano de gobierno y tampoco se expresa, como hubiera sido de desear, el tiempo por el cual se interviene la provincia.

Al tratarse en particular el proyecto voy a proponer algunos agregados, a pesar de que, reitero, me opongo al mismo en forma total.

Muchas veces he escuchado en este recinto aludir a formalismo jurídico en respuesta a razonamientos de carácter constitucional. Creo que aquí no estamos simplemente frente a un formalismo, sino ante un análisis indispensable de las normas constitucionales que tenemos el deber de efectuar los legisladores como representantes del pueblo, y más en este caso de intervención federal, porque somos verdaderos jueces políticos de la situación institucional de la provincia de Formosa.

Declaro con certidumbre que he recibido este informe del Poder Ejecutivo, impreso en fotocopia oficial, recién en las últimas horas de esta tarde. Dejo constancia que no culpo a la Comisión de Asuntos Constitucionales de negligencia. La celeridad con que se ha tramitado este proyecto y los días feriados que han transcurrido justifican de alguna manera la imposibilidad de haber repartido a todos los diputados una copia de tanto valor.

No me parece superabundante reiterar alguna argumentación de orden constitucional y aludir a este informe, porque ello nos va a dar la sensación acabada de que nuestra posición, al oponernos a la sanción de este proyecto, está plenamente justificada.

En cuanto a las argumentaciones jurídico-constitucionales que fundamentan nuestra tesis, deseo hacer, en primer término, una remisión a la muy ajustada exposición efectuada por el señor diputado Musacchio, que me ahorra comentarios, aunque por otras aseveraciones que he escuchado me veo obligado a hacer algunas citas de orden doctrinario.

Es cierto que nos debemos manejar, como dijera inteligentemente el señor diputado Sueldo, con espíritu restrictivo al interpretar la norma de las intervenciones federales. El artículo 69 de la Constitución nos coloca claramente frente a la institución de la intervención, ya sea por deber o por requisitoria. Esta intervención por deber la realiza el gobierno federal para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones del exterior.

Estos son los dos supuestos constitucionales que debemos interpretar restrictivamente, porque se ha descartado, inclusive por los diputados de la mayoría, el supuesto de la intervención por requisitoria, y como no ha habido invasión del exterior debemos caer obligadamente en la garantía de la forma republicana de gobierno. Esto es lo que seguramente pretende el proyecto del señor senador Fonrouge, que se aprobará con el voto de la mayoría.

Entonces debemos llegar a la convicción de que se ha violado efectivamente esta forma republicana de gobierno en la provincia de For-

mosa. Para eso es bueno que averigüemos qué dice nuestra doctrina autorizada en materia de derecho constitucional.

Me voy a permitir citar algún pensamiento del constitucionalista Joaquín V. González, que tantas veces ha ilustrado a los representantes del pueblo. Cuando en su conocido libro *Manual de la Constitución Argentina* trata el tema de «cuándo habrá alteración de la forma republicana», presenta cinco hipótesis que prácticamente describen en forma terminante todos los supuestos de violación de esta forma republicana de gobierno, que es no una mera formalidad sino un aspecto substantivo que hace a las declaraciones, derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional.

El primer supuesto en que se coloca Joaquín V. González, hablando de la alteración de la forma republicana, es el caso que en alguna provincia se auspicie la instauración de un gobierno monárquico —así lo dice en la página 701 de su manual—, o bien que el pueblo no tenga intervención en el nombramiento de sus autoridades bajo ninguna forma o grado de elección. No sería representativo su gobierno —expresa más adelante— y por lo tanto no sería republicano, si en vez de establecer como forma de ejercicio de la soberanía popular el sufragio directo o indirecto, se reconociese a determinadas familias, corporaciones o individuos el poder de nombrar a los funcionarios públicos, etcétera.

El otro supuesto que consigna Joaquín V. González es que sería contraria al sistema republicano toda Constitución o ley de provincia en cuanto destruyese, negase o alterase los derechos reconocidos y garantidos por la Constitución a todo habitante o ciudadano.

Alteraría igualmente, nos dice el citado autor, la forma de gobierno establecida por la Constitución y se colocaría a ese respecto fuera de las garantías correlativas toda provincia que al constituirse o pretender ingresar en la unión federativa no hubiese establecido un poder judicial, ni provisto a la difusión de la enseñanza primaria, ni fundado las bases del régimen municipal, que son los supuestos que exige la Constitución para que el gobierno federal garantice las autonomías provinciales.

Y por último, consigna Joaquín V. González, las características propias de la doctrina republicana, cuando dice que un gobierno en el cual no exista la división esencial de los tres poderes no sería republicano, porque es ése precisamente el sentido de la Constitución federal que ha determinado con claridad las funciones de los tres poderes del Estado. La división de los poderes y la publicidad de los actos de gobierno hacen a la esencia misma del sistema republicano, lo que es una noción que aprendimos en la escuela primaria.

Estas son las interpretaciones que debemos tener en cuenta cuando analizamos si se observa o no en la provincia de Formosa la forma re-

publicana de gobierno. Y aquí tengo que referirme a los informes que el Poder Ejecutivo ha hecho llegar al Congreso de la Nación. Estos informes no inducen a un convencimiento total y absoluto a este Poder Legislativo, porque ni siquiera el Poder Ejecutivo solicita la intervención a la provincia de Formosa, sino que, simplemente, se limita a hacer conocer al Congreso de la Nación cuáles son esos antecedentes. Y esto a través de dos notas que envía los días 15 y 16 de noviembre.

Desearía que las tengamos presente, caso por caso, para analizar si efectivamente estamos ante un hecho de consumada gravedad para sancionar en este tiempo récord, de prácticamente cuarenta y ocho horas, la intervención a una provincia argentina.

Estoy tratando de ceñir mi exposición a la mayor objetividad. Estoy tratando de despojarme de todo el apasionamiento provinciano, y nadie podrá decir que existe apasionamiento en mi exposición, puesto que ninguno de los partidos políticos intervinientes en Formosa, a través de su representación legislativa, tiene absolutamente nada que ver con el partido provincial al cual pertenezco.

Deseo hacer, caso por caso, el desarrollo fáctico de los informes que manda el Poder Ejecutivo de la Nación. En el primer punto se determina que la Legislatura provincial de Formosa resolvió por unanimidad comisionar a una delegación ad hoc para que se entrevistase con el señor ministro del Interior, encabezada por el señor vicegobernador en su carácter de presidente de hecho de dicho cuerpo, e integrada por representantes de todos los bloques. Y que la referida comisión impuso al señor ministro acerca del enfrentamiento existente entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia con respecto a diversos episodios que se consignan en los antecedentes adjuntos.

Es decir, que se estaría insinuando al Congreso de la Nación que investigue acabadamente si existe un enfrentamiento, un conflicto de poderes, que pueda hacer viable la intervención federal. Y en esto quiero señalar mi coincidencia con las expresiones del señor diputado Musacchio y de otros señores legisladores que me han precedido en el uso de la palabra, en el sentido de que de los antecedentes que obran en nuestro poder no se desprende que exista un conflicto de poderes que dé lugar a la intervención en la provincia de Formosa. Y digo esto porque no cualquier conflicto de poderes hace viable una intervención federal.

Hay sí un poder que pretende no acatar a otro poder, pero en la provincia de Formosa tiene vigencia una Constitución que establece detalladamente cuáles son los medios y los procedimientos a través de los cuales deben encauzarse las situaciones conflictivas que pueden llegar incluso hasta la suspensión del gobernador en sus funciones y hasta su propia destitución.

Este es el juego normal de las instituciones, y a mayor abundamiento quiero recoger aquí aquella cita que trajo a colación el señor diputado Musacchio respecto de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que prevé que el alto tribunal de justicia de la provincia es el que debe resolver en última instancia en materia de conflicto de poderes provinciales. Se ha hecho mención, así mismo, de lo dispuesto por el artículo 124, inciso 1º, de la Constitución de Formosa, que también hace referencia a los conflictos de poderes públicos, dentro de esa provincia, delegando en el Superior Tribunal de Justicia la facultad de resolverlos.

Esto es coincidente con la doctrina que nos enseña Joaquín V. González en la página 706 del manual citado, cuando nos dice que es regla de todo gobierno federativo que estas cuestiones corresponden al fuero local. Y dice más adelante: «A menos que fuese legalmente requerida para prestar ayuda o protección, o se tratase de una alteración efectiva de la forma republicana, no es la misión de la autoridad nacional intervenir: debe limitarse a admitir tales soluciones internas como decisivas y concluyentes. Tal es el sentido de las palabras de la Constitución relativas a las provincias: "se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas"».

Decía recién que en Formosa se ha comenzado a dar el juego normal de las instituciones; esto es lo que hemos visto en funcionamiento en los informes del Poder Ejecutivo. Podríamos decir que la situación conflictiva se torna insoluble cuando se observa una paralización total de las instituciones republicanas y al mismo tiempo una subversión que comprometiese al pueblo todo. Pero en realidad vemos que la situación conflictiva que hemos estado tratando no se ha extendido al pueblo todo de Formosa.

Nos refiere el Poder Ejecutivo en su informe que la Legislatura de Formosa sancionó la ley número 357, que regula el procedimiento del juicio político. Desde luego, éste es un hecho que no necesita comentario, por cuanto se trata del ejercicio pleno de las atribuciones del Poder Legislativo formosense.

Dice después el informe que el Poder Ejecutivo provincial vetó esa ley, lo que también constituye el ejercicio de una atribución específica.

Se dice más adelante que con fecha 31 de octubre la Legislatura insistió en su sanción, lo que tampoco constituye otra cosa que un ejercicio normal de atribuciones constitucionales.

Luego, en el punto 5, se señala que la Legislatura de Formosa aprobó una declaración de repudio con motivo del secuestro del que fuera víctima el diputado doctor Juan de Rosa Benítez, hecho que se hizo público a través de la prensa local. Yo no veo en qué medida esta declaración puede afectar el funcionamiento de las instituciones republicanas de Formosa. Ni

tampoco que lo haga el último párrafo de ese punto, cuando alude a grupos armados que atacan locales partidarios y educacionales de quienes no comulgan con sus posiciones, porque delincuencia existe en todas partes a pesar de las buenas intenciones de las normas penales represivas, y por el hecho de que existen delinquentes no vamos a pensar que las normas jurídicas carecen de eficacia. Ellas precisamente tienen eficacia cuando logran perseguir y castigar a los delinquentes que incurren en esas inconductas.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, doctor Carlos Palacio Deheza.

**Sr. Moyano.**—El punto 6 del aludido informe dice que con fecha 5 de noviembre pasado la Legislatura aprobó una nueva declaración en la que sostiene la inexistencia de conflicto de poderes. En el punto 7 dice que al día siguiente el gobernador de la provincia se dirigió al señor ministro del Interior denunciando un nuevo enfrentamiento con la Legislatura, porque parecería que en las tratativas de solución la Legislatura habría pedido al gobernador que se tomara una licencia por seis meses, problemas que evidentemente no rozan ni de cerca la gravedad de una intervención federal.

En el punto 8 dice el Poder Ejecutivo que este último episodio determina que el Poder Ejecutivo de la provincia se dirija al Poder Ejecutivo nacional solicitando formal y oficialmente se promueva la intervención federal del Poder Legislativo. Yo digo que esto que se plantea en el punto 8 no es nada más ni nada menos que una petición que efectúa el gobernador que el Poder Ejecutivo y este Congreso, en todo caso, tiene el deber de verificar para saber si le asisten las razones debidas para conseguir el objetivo que se propone.

El punto 9 dice que con fecha 9 de noviembre el gobernador de la provincia anticipó al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, que se interpondrá recurso de inconstitucionalidad preventiva contra la ley del juicio político. Esto es un anuncio y no un hecho; y si lo fuera, ello es del resorte del juego normal de las instituciones republicanas de Formosa y nunca causal de intervención federal alguna.

El punto 10 se refiere al pedido de desafuero del señor diputado Juan de Rosas Benítez, al que también se ha hecho mención en este Congreso. Esto también es, honestamente, un resorte propio del juego normal de las instituciones republicanas y democráticas que prevén la Constitución Nacional y la de la provincia de Formosa.

En la nota ampliatoria del 16 de noviembre hay un punto que dice que no habiendo entrado aún en vigencia la ley reglamentaria del juicio político, la Legislatura resolvió constituirse con

la presidencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia y someter a juicio político al gobernador de la provincia, disponiendo su suspensión en el cargo.

De ningún modo puede llegarse a la conclusión de que el Poder Judicial formoseño está complicado en alguna situación rara por el hecho de que el presidente del Superior Tribunal de Justicia haya cumplido con su deber constitucional de presidir la Asamblea Legislativa.

Señor presidente: no tengo más elementos de juicio que estos informes del Poder Ejecutivo que, reitero, ni siquiera llevan al Poder Ejecutivo nacional a la conclusión de solicitar *per se* y de acuerdo con sus atribuciones constitucionales la intervención federal a la provincia de Formosa.

Hubiera deseado que un asunto de tanta gravedad requiriera el tratamiento de este recinto después de haber cumplido con la formalidad reglamentaria de haber sido despachado por la comisión con el estudio debido. Creo, por ejemplo, que el caso de la intervención a la provincia de Jujuy sancionada en 1964, que fue la última que sancionó este Congreso demuestra cómo se estudió delicadamente la situación y se llegó a la intervención sólo cuando era imposible encontrar otra solución.

La presencia de diputados y senadores nacionales en la provincia objeto de una medida semejante no sólo sirve para que nos informemos de la situación; sirve también, y en forma elemental, para llevar ánimo de convicción a las partes en litigio para que faciliten soluciones. Y este procedimiento ni siquiera tuve tiempo de sugerirlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales en los pocos minutos que se dispuso esta tarde para conversar sobre el tema.

Señor presidente: no son sólo motivaciones emocionales las que sentimos los hombres del interior, y más aún los que representamos a partidos políticos del interior, las que nos llevan a discrepar con este proyecto de ley. Es que vemos en las autonomías provinciales, en el ejercicio de las instituciones democráticas de cada provincia, la concreción real del federalismo argentino, esto con respecto al federalismo institucional. Porque ya sabemos que en el plano de la economía tan cercenadas están las facultades de las provincias que se hace ilusorio el federalismo por cuya restauración nosotros luchamos.

Quisiera escuchar aquí, y espero tener el gusto de que así ocurra, que los diputados electos por la provincia de Formosa hagan oír su voz para que ellos, que viven de cerca el proceso, nos cuenten qué ha ocurrido en Formosa, para que nos digan, aunque sea con el apasionamiento que les provoque su ubicación parcial dentro del litigio político que puede tener el partido gobernante, qué es lo que ha sucedido en su provincia.

Creo que este Congreso necesita argumentos contundentes, mucho más categóricos de los que ha dado el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para llevar a una convicción plena a los propios señores diputados de la mayoría en el voto que van a formular en esta sesión. Y yo quisiera que no les ocurra a estos señores legisladores de la provincia de Formosa que dentro de algún tiempo deban arrepentirse de lo que le sucede a esta joven provincia, porque espero que la intervención que seguramente se mandará a Formosa no sea como tantas otras que han llegado a las provincias como una manga de langosta devastadora que se alzó con todo el patrimonio provincial.

Cumpliremos nuestro deber cuando hayamos dado en este recinto nuestro voto con absoluta responsabilidad. (Aplausos.)

**Sr. Presidente** (Palacio Deheza). — Tiene la palabra el señor diputado Comínguez.

**Sr. Comínguez.** — Señor presidente: nuestra bancada ya ha planteado exhaustivamente su oposición a la intervención desde el punto de vista jurídico e institucional. Pero queremos dejar también sentada en este debate nuestra preocupación.

Nuestra preocupación está referida a un aspecto que se ha tocado al pasar, que se ha mencionado y que incluso, se ha manifestado, no debemos mezclar con esta cuestión. Nosotros entendemos que todo problema político-institucional tiene un trasfondo de antagonismos, de enfrentamientos de sectores, de luchas de grupos económicos, de intereses de clases. Y en la provincia de Formosa se estaba llevando a cabo una interesante —por llamarla así— experiencia política en materia agraria: el decreto 408, que planteaba la revisión de las adjudicaciones de tierras a los militares en la época de la dictadura, y la ley 339, que expropiaba 49.000 hectáreas. Formosa cuenta con alrededor de siete millones de hectáreas y un millón y medio de éstas, las más importantes, se encuentran en manos de los grandes monopolios, de la oligarquía y de las empresas multinacionales: son tierras que lindan con la frontera, y ya sabemos cuál es la política del imperialismo al respecto.

Solamente siete estancias poseen más de cuatrocientas mil hectáreas, y el grupo Deltec es propietario de tres de ellas: Timbó Sociedad Anónima, Ombú Sociedad Anónima y Pilagá Sociedad Anónima. La política agraria que estaba llevando a cabo el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Agricultura, a cargo del ministro Elizalde Pedroso, las leyes sancionadas por el Parlamento y las que estaban a punto de sancionarse promovieron en materia agraria normas que podemos calificar de avanzadas, que ya existían en Formosa y que son de las más progresistas del país.

También se estaba gestando una política para terminar con la explotación del hachero y se



propiciaba que toda la riqueza forestal pasara a ser explotada a perpetuidad por el Estado, tema que ya hemos tratado en esta Cámara.

Todo ello promueve nuestra preocupación. No es que queramos mezclar las cosas; es que las cosas ya están mezcladas. Pero nosotros debemos saber separar la paja del trigo. Todo eso explica las grandes luchas de las ligas agrarias, los miles de campesinos que se han movilizado, que han incidido en la preocupación del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

No entramos a juzgar, pero esperamos que la intervención que se proyecta, y que seguramente se aprobará, en manera alguna enfle a impedir este proceso, sino que, por el contrario, creemos que debe ahondarlo. Decimos esto porque son grandes los intereses que se mueven en Formosa.

La Comisión pro Recuperación del Patrimonio Provincial y las Ligas Agrarias, por una parte, han denunciado esta situación y, por otra, apoyado las medidas progresistas del gobierno, tales como la expropiación de tierras de la sociedad Arbol Solo, reclamando que se continúe con las grandes extensiones de tierras en poder de los monopolios.

La Comisión pro Recuperación ha dado una nómina de grandes propietarios: Bouvier Sociedad Anónima, Sucesores de Hertelendy, Tierras y Estancias Guaycolec, que no han cumplido con la ley de colonización y adquirieron en forma leonina las tierras; las que, en consecuencia, deben ser expropiadas.

También hay varios militares, quienes, según la citada comisión, habrían obtenido las tierras durante la dictadura (administración Sosa Laprida).

Entre las tierras que se encuentran en poder de sociedades anónimas, podemos mencionar: tierras de la ex estancia La Fidelidad, presuntamente adquiridas por el coronel Sosa Laprida a la firma Bunge y Born, para integrarlas al plan imperialista Agrex, abortado por la lucha de los campesinos en el Chaco; estancia El Magaik, propiedad de una sociedad anónima francesa relacionada con el Banco Supervielle, que también adquirió tierras a la viuda de Dos Santos en Herradura; las tierras que Arbol Solo Sociedad Anónima adquirió en 1968 a la compañía inglesa Bovril Sociedad Anónima; Tierras y Estancias Guaycolec, aparentemente subdivididas y entregadas a testarros pertenecientes a Deltre y ligados al grupo Celta de capitales internacionales; 16.000 hectáreas que poseía el doctor Eduardo Jure; la estancia La Orqueta, de la firma Walter Kullak Sociedad Anónima, propietaria de las tierras despojadas a los indígenas de la ex misión Laishí.

Este es el problema que nosotros, sin prejuizar pero con inquietud y preocupación, traemos a este debate. Haya o no intervención, es preciso continuar con estas medidas progresistas

de expropiación que se han adoptado en Formosa, independientemente de los conflictos que pueda tener, para que así se hagan extensivos a esta provincia, como a las demás, los lineamientos de la lucha antiimperialista y antioligárquica que no pueden quedar solamente en expresiones literarias sino transformarse en hechos concretos; hechos concretos en los que todos nosotros estamos comprometidos, porque luchamos por la liberación nacional y social.

**Sr. Presidente** (Palacio Deheza). — Tiene la palabra el señor diputado Day.

**Sr. Day.** — Señor presidente: en primer término, quiero destacar dos hechos, cumplido uno de ellos por la Legislatura y otro por el Superior Tribunal de Formosa, que acreditan que la formalidad con que han actuado dentro de la Constitución nos aleja de cualquier recuerdo de alguna anécdota de Payró en *Pago chico*.

Veamos ante todo la versión taquigráfica de la Legislatura formoseña que me voy a permitir leer, con la venia de la Presidencia, en el punto relativo al cumplimiento del artículo 112 de esa Constitución provincial que obliga, cuando existe juicio político y el acusado es el gobernador, que sea presidido el cuerpo por el presidente del Superior Tribunal. Allí, cumpliendo este mandato constitucional, el presidente Ortiz manifiesta: «Corresponde presidir la sesión de aquí en más al señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, el doctor Juan Fernández Bedoya. (*Aplausos en las bancas y la barra. Pónense de pie los señores diputados y público presente. Ocupa el sitial de la Presidencia de la Honorable Cámara el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Juan Fernández Bedoya*)». El doctor Fernández Bedoya dice muy pocas palabras, algunas de las cuales recogeré. Manifiesta: «Hace escaso tiempo he recibido la formal convocatoria de las autoridades natas de este cuerpo a efectos de dar cumplimiento al artículo 112 de la Constitución provincial, referente a la petición del juicio político contra el señor gobernador de la provincia de Formosa. En tal sentido debo expresar que mi intervención en esta instancia adquiere el carácter de mandato constitucional, y por cuya circunstancia la misma resulta inexcusable. Sin embargo, ese evento no me exime de la facultad de tener que expresar en esta oportunidad las observaciones que estimo pertinentes en relación al procedimiento que esta Cámara se ha propuesto tramitar. Es la primera vez que en los anales institucionales de nuestra provincia se plantea una situación como la que nos ocupa en estos momentos. De ahí entonces que debamos extremar la ponderación de las normas que hacen al procedimiento constitucional para la emergencia, a efectos de que la falta de precedentes sobre la materia no sea un factor que coadyuve a desaciertos a que involuntariamente puede conducirnos. Es por esta fundamental circunstancia que me permito

exhortar a que cada uno de nosotros extrememos con riguroso celo el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Sabemos, por los sucesos que está viviendo la provincia de Formosa, que cualquier medida que se adopte al respecto estará suscitando la expectativa no solamente de la ciudadanía formoseña, sino también de la ciudadanía de todo el país; y debemos, en consecuencia, a falta de normas reglamentarias vigentes, extremar la interpretación más ortodoxa de las normas y preceptos constitucionales, para interpretar con la mayor exactitud posible el espíritu de quienes las sancionaron, pues ése será el mayor homenaje que podremos rendirles a los constituyentes que nos legaron el texto fundamental de la provincia.

»Debemos también, a través de este procedimiento, brindarnos al máximo, porque también debemos tener presente no solamente circunstancias fortuitas o casuales de actualidad, sino también hacer una pequeña referencia, una breve reflexión a nuestro pasado histórico y no dejar de tener en cuenta, en una circunstancia como la presente, el mandato del fundador de nuestra provincia, comandante Luis Jorge Fontana, cuya inspiración fue siempre la grandeza y el porvenir de la provincia de Formosa.

»En mérito a estas consideraciones, me allano al cumplimiento del mandato constitucional, declarando abierta la sesión del juicio político.»

Y luego, cuando presenta el recurso de inconstitucionalidad el gobernador suspendido, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Juan Fernández Bedoya, se excusa de intervenir diciendo que, en realidad, no se encuentra implicado pues tan solo le ha tocado dirigir las deliberaciones y no votar ni abrir juicio sobre su pensamiento en el caso. Y agrega: «Sin embargo, no obstante considerarme exento de parcialidad en la cuestión cuya inconstitucionalidad promueve el señor Antenor Argentino Gauna en el expresado carácter de gobernador de la provincia, y a efectos de resguardar al Poder Judicial de cualquier grado de sospecha en la imparcialidad y objetividad de ponderación de sus miembros, fundado en motivos de decoro y delicadeza, solicito de vuestra excelencia me excuse de entender en la presentación».

Ahora me interesa considerar muy brevemente, señor presidente, un aspecto que no ha sido abordado. Se ha hablado aquí con seriedad y preocupación del avasallamiento de las autonomías provinciales. Aunque es sumamente importante esta parte de la cuestión, me interesa fundamentalmente otro aspecto. Es decir, me interesa saber cómo quedan esos habitantes, sus bienes y sus libertades, porque observen los señores diputados que el proyecto de ley que consideramos es sumamente escueto. Tan solo expresa que se interviene la provincia de Formosa para lograr la normalización institucional y la reorganización de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

A falta de una ley orgánica sobre intervenciones federales —en esta materia el Congreso argentino se encuentra en mora desde hace casi cien años—, se vuelve útil y necesario, como lo expresa Rafael Bielsa, que las leyes de intervenciones sean lo suficientemente detalladas en las funciones que se otorgan al interventor, debiendo hacer referencia específicamente a las facultades y atribuciones que se confieren a ese funcionario para el cumplimiento de la misión federal.

Nos encontramos, entonces, ante la circunstancia de que una parte de la República quedará sin la protección y sin las garantías que tiene el resto de la población. Bien lo dice Bielsa. Nosotros le damos la atribución y el instrumento al Poder Ejecutivo, y éste nombra a un interventor, un mandatario, que se rige por los principios del mandato. Pero el titular del mandato es el Poder Ejecutivo. Aquí nos encontramos con una intervención amplia, en la que los jueces pierden su inamovilidad. De allí que hubiéramos querido que en la ley se expresara claramente el modo y la forma en que esa intervención habrá de aplicarse al Poder Judicial de la provincia de Formosa, así como que los nuevos jueces que se designen adquirieran la más completa inamovilidad hasta que exista nuevamente Legislatura en ese Estado.

También nos interesa saber qué ocurrirá con el futuro de Formosa. No sabemos si habrá de ser hipotecada por tan solo un hombre, que no habrá de tener el contralor de la Legislatura ni tampoco, por supuesto, la garantía que significa un Poder Judicial independiente. Es así que vemos que el ciudadano formoseño no tendrá asegurados los derechos del artículo 18 de la Constitución Nacional. Por otra parte, entra aquí la prohibición —que nosotros estaríamos violando— del artículo 95 de la Constitución Nacional, que excluye para el Poder Ejecutivo el ejercicio de facultades judiciales, las que se estarían ejerciendo a través del mandatario federal, pues los jueces a designar serían la expresión de una comisión especial. De allí la necesidad de indicar en forma amplia, minuciosa y detallada cuáles serán las reglas a las que tendrá que ajustarse el encargado de la misión federal.

Y también involuntariamente estaríamos entrando en el terreno vedado del artículo 29 de la Constitución Nacional, porque de este modo y con este sistema estamos otorgando al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y la suma del poder público para una zona de la República.

Es decir que para la provincia de Formosa tendremos que depender de la seriedad y discrecionalidad del interventor que se designe; la podemos creer del presidente de la República, pero no tenemos la obligación de estar seguros de que lo mismo habrá de ocurrir con quien no tiene el aval y apuntalamiento de un pronunciamiento popular. Es así entonces que Formosa

tiene menos garantías que si estuviera bajo el estado de sitio, y esto es muy importante tenerlo presente.

¿Y cómo quedarán las municipalidades? Cuando se intervino la provincia de Córdoba, en 1960, se dictó una ley parecida, y luego ocurrió que las comunas fueron intervenidas, lo que desde luego significó una efervescencia popular enfrentando esta circunstancia, que no había estado prevista por la ley, pero que por su amplitud fue interpretada como que tenía tales alcances.

Tampoco —y esto es sumamente grave— la ley que consideramos determina el lapso de duración de la intervención. Es decir que se abre un mandato que puede durar cualquier término, lo que significa que no existe la posibilidad de exigir que la provincia se restituya al juego normal y libre de sus instituciones en un corto plazo.

Considero que estos aspectos tienen que ser meditada y seriamente considerados por los señores legisladores, para que si están dispuestos a aprobar la intervención, procuren que ésta cumpla la tarea institucional que le corresponde y para no, argumentando a favor de la República, matar en esta provincia el sistema republicano. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Palacio Deheza). — Tiene la palabra el señor diputado Insúa.

**Sr. Insúa.** — Señor presidente: sin entrar en teorizaciones jurídico-políticas ni citas jurisprudenciales ni doctrinarias que con tanta elocuencia y brillantez han expuesto representantes de todos los sectores de la Cámara —algunas de las cuales no compartimos—, la bancada de Unión Popular va a fundamentar su voto basado en la realidad de los hechos incontrovertibles y ciertos que demuestran la existencia de un grave conflicto de poderes en la provincia de Formosa.

Ese conflicto surge de los antecedentes que ha informado la Comisión de Asuntos Constitucionales, de los fundamentos del proyecto de ley remitido por el Honorable Senado y de las expresiones vertidas en el recinto que, además, son del dominio público.

Por estas razones mi bloque entiende que es de aplicación lo preceptuado en el artículo 69 de la Constitución Nacional. Entendemos que a esta altura de los acontecimientos de hecho e institucionales por los que atraviesa la provincia de Formosa no cabe confiar que los hechos anormales producidos en dicho Estado puedan encontrar remedio por mediación de los órganos locales. La corrección, entendemos, debe lograrse, por lo tanto, mediante las medidas que la Constitución Nacional prevé y que fundamentar el proyecto de ley sometido a la consideración de esta Honorable Cámara.

Por estas breves consideraciones, el bloque de la Unión Popular va a votar por la afirmativa el proyecto, en la seguridad de que así quedarán

a salvo los propios intereses de la provincia de Formosa y de todos sus habitantes y, principalmente, los sagrados intereses de la Nación que se afectan cuando no se impiden los actos que atentan contra el Estado nacional, intereses que es nuestro deber tutelar.

**Sr. Presidente** (Palacio Deheza). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Bedoya.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Señor presidente: en primer lugar, y a modo de introducción en el tema, señalo que me hago eco de la convocatoria del señor diputado Moyano en el sentido de que nosotros, los legisladores nacionales procedentes de la provincia de Formosa, hagamos escuchar nuestra palabra en este recinto, trayendo el mensaje de nuestro pueblo y el relato cierto del acontecer institucional de nuestra provincia. Me confieso un poco atribulado por sentirme tan solo en la defensa de esta penosa situación por la que atraviesa mi provincia. Hago esta afirmación porque, desgraciadamente, se trata de un error no imputable precisamente a los hombres que en representación de mi provincia ocupan bancas en este Congreso, sino que debe atribuirse más bien al partido que los ha designado para ser postulados ante el pueblo. Digo que por un error, en el Congreso Nacional —Senado y Cámara de Diputados— de ocho representantes, solamente tres son formoseños nativos.

Esto tiene que ver, y enseguida voy a explicar el motivo. Los senadores que representan a la provincia de Formosa en la Cámara alta son el señor senador Joaquín Horacio Esperanza, oriundo de la provincia de San Luis, domiciliado en Formosa; la señora senadora Leni Rosa Valle de González, oriunda de la provincia de Córdoba, radicada en Formosa, y el señor Rubén Osvaldo Cáceres, formoseño nativo. En esta Cámara son el señor diputado Abraham Efraín Bonás, de la provincia de Corrientes, domiciliado en Formosa...

**Sr. Bonás.** — Tengo treinta y siete años de permanencia en Formosa.

**Sr. Fernández Bedoya.** — ...el señor diputado Adelmo Alberto Gaitán, de la provincia de Córdoba, afincado en Formosa; el señor diputado Lysis Augusto López, de la provincia de San Juan, domiciliado en Formosa; el diputado Hugo Luis Castellano y, quien habla, ambos formoseños nativos.

**Sr. Presidente** (Palacio Deheza). — Ruego al señor diputado no personalizar.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Quisiera buscar la forma de expresión para que no se sientan lastimados, porque tengo admiración y simpatía por ellos. No voy a poner en tela de juicio los años de radicación de ese brillante maestro, de ese docente argentino, que es el señor diputado Bonás, que reclama para sí treinta y siete años de radicación, lo que no podrán pretender los demás legisladores mencionados, pero a quienes también mucho respeto.

Señalo simplemente esto por la mención realizada por el señor diputado Moyano y porque pienso que estos señores diputados no podrán sentir el desgarró de entrañas que sentimos los hijos de la provincia herida...

**Sr. Presidente** (Palacio Deheza). — Ruego al señor diputado que no personalice esta situación con los integrantes de la Cámara.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Ocorre, señor presidente, que era necesario hacer esta mención, que no afecta a los señores diputados en lo personal, sino que tiende a demostrar que mi provincia no está suficientemente representada en sus sentimientos en este evento. Considero que estos señores diputados, tan argentinos como los formoseños, para este caso particular, donde se viene a vulnerar y a usurpar la autonomía provincial, en el curso de esta sesión que ya está durando varias horas, han permanecido indiferentes y no han levantado su voz de protesta. Por esa razón, me cabe concluir que la indiferencia les asiste en este problema y por eso no están pegando el grito, protestando y sacudiendo a esta Cámara para defender la autonomía de la provincia de Formosa.

**Sr. Lazzarini.** — Son diputados que representan al pueblo; no a la provincia.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Han transcurrido varias horas y hemos escuchado las exposiciones de los distintos sectores que componen esta Cámara, pero nos impresiona y nos produce la sensación que la mayoría está insensibilizada y verticalizada como si respondiese a un eco extraño al cuerpo.

**Sr. Pedrini.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Fernández Bedoya.** — Y en ese sentido nos parece a nosotros, los hombres del radicalismo, que estamos asistiendo nada menos que al funeral de las instituciones de la provincia de Formosa. En esta sesión se está decretando la atrofia de un instituto, como es el juicio político, con lo que se están castrando tal vez en forma definitiva o, por lo menos, mientras dure la permanencia del justicialismo en la conducción del gobierno, las posibilidades...

— Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Fernández Bedoya.** — ...de las Legislativas, no solamente la de Formosa, que es el caso particular que estamos tratando, sino de todas las legislaturas provinciales, que tendrán que poner las barbas en remojo y renunciar a sus atribuciones constitucionales de ser los jueces

naturales de gobernadores extraviados y corrompidos que han llegado a la función pública engañando a los pueblos...

— Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente** (Odena). — La Presidencia ruega a los señores diputados se sirvan no interrumpir al orador que está en el uso de la palabra.

**Sr. Pedrini.** — Para una aclaración, le solicito una interrupción, señor diputado.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Esta noche, señor presidente, la mayoría está suscribiendo el acta de defunción del federalismo argentino. Se empieza con la provincia de Formosa y se va a continuar con Córdoba, con Buenos Aires, con Salta, con Tucumán y con Misiones, porque el caso de Formosa no es aislado. Este es un problema político del peronismo, que está fracturado en todo el país y que apela a este recurso, sacrificando las instituciones, para salvar la imagen enferma y deteriorada de ese oficialismo que empieza a rodar por la pendiente del descrédito.

**Sr. Pedrini.** — ¿Me permite una aclaración, señor diputado?

**Sr. Fernández Bedoya.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Pedrini.** — Solicito al señor diputado que me aclare, para mi ilustración, si realmente tiene algún parentesco con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, que también está cuestionado en este proceso de intervención al Estado provincial.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Yo le devolvería la pregunta al señor diputado Pedrini: ¿es cierto que al Poder Judicial de Formosa también se lo fulmina, junto con los poderes Legislativo y Ejecutivo, por el delito de ser el presidente del Superior Tribunal de Justicia hermano del diputado radical Fernández Bedoya?

— Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente** (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Fernández Bedoya.

**Sr. Fernández Bedoya.** — La crisis institucional de la provincia de Formosa, dramatizada y magnificada por el ministro del Interior y por los señores diputados de la mayoría que no ocultan su adhesión a la política desplegada por aquel ministerio en la provincia de Formosa, no se produce por generación espontánea. Esa crisis, que tenía sus remedios legales y constitucionales en el libre y armónico juego de las instituciones de la provincia, ha sido interferida y trabada por el señor ministro del Interior para crear condiciones propicias que hagan procedente el tratamiento del proyecto de intervención a los tres poderes de aquella provincia. Este tratamiento se está efectuando en forma preci-

pitada, para no permitir el acopio de elementos de juicio suficientes ni a la oposición ni a los mismos diputados del oficialismo que de esa forma están votando ciegamente un ordenamiento que mañana les va a pesar, porque la mayoría de esos diputados oficialistas provienen de provincias que, como hoy Formosa, mañana sucumbirán sacrificadas por medidas discrecionales y arbitrarias que tienen como única razón la fuerza del número, ya que no están sustentadas en ninguna disposición legal, pues este asunto no encuadra ni siquiera aproximadamente en las previsiones constitucionales del artículo 69.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Estoy en el uso de la palabra y solicito a la Presidencia que se me haga respetar.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Odena).** — De acuerdo con el reglamento, ningún señor diputado puede ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se plantease la cuestión de que está fuera del asunto en debate.

**Sr. Pedrini.** — Se trata de plantear una cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente (Odena).** — La cuestión podrá plantearse en el turno que corresponda al diputado que desea formularla.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Solicito se me anote para plantear oportunamente la cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente (Odena).** — Se tomará nota del pedido que formula el señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Fernández Bedoya.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Decía, señor presidente, que el Estado, que crea las normas jurídicas, no tiene el privilegio de evadirse de esas normas. En otros términos, el Congreso argentino, sólo sustentándose en la fuerza del número podría extralimitarse en sus funciones, que deben estar ajustadamente encuadradas en los moldes de la ley.

**Sr. Acuña.** — Durante dieciocho años tuvimos que aguantar...

**Sr. Fernández Bedoya.** — Nosotros los aguantamos trece años a ustedes...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Fernández Bedoya.** — No vamos a polemizar. Ustedes aguantaron dieciocho años y nosotros trece. Yo rescato para el peronismo que en los trece años, si bien es cierto que tuvieron muchas obras malas, han tenido muchas otras que son excelentes, a las que aplaudo.

Ustedes, que son fanáticos, no consiguen reconocer que en los dieciocho años, además de obras malas, también hubo buenas.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente (Odena).** — La Presidencia está tratando de hacer respetar al señor diputado en el uso de la palabra y le solicita que respete a los demás señores diputados y no haga imputaciones agraviantes.

**Sr. Fernández Bedoya.** — De ninguna manera he agraviado.

**Sr. Gualco.** — Que diga el señor diputado qué significado le da a la palabra «fanáticos».

**Sr. Fernández Bedoya.** — No están dados los presupuestos constitucionales del artículo 69 para que pueda prosperar este proyecto de ley que quiere hacer tabla rasa con los tres poderes de una provincia argentina; que persigue terminar con el principio de legalidad, con el sistema representativo, con el sistema republicano, fulminar la soberanía popular y consagrar el mandato de la imposición de un grupo ensoberbecido que se apoya nada más que en la mayoría y que no tiene más razón que la de levantar la mano y con el número llevar adelante una agresión a las instituciones y al federalismo.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Gualco.** — Ustedes son los culpables de que se intervenga a Formosa.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Esta Cámara de Diputados, si no se ajusta al artículo 69 de la Constitución Nacional, si no conforma los antecedentes de la provincia de Formosa a ese presupuesto legal, no estará legislando; estará dictando una ley y colocándose en una actitud discrecional y arbitraria. Se convertirá en la dictadura del número.

Por eso, los hijos de Formosa, venimos a defenderla, a defender la autonomía provincial. Porque no se nos confunda: no venimos a defender al gobierno peronista de aquella provincia.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Denuncio que el problema de Formosa no se ha generado espontáneamente, sino que ha sido inducido. Al gobernador de la provincia, fuera de ella, aquí en la Capital, le han dicho al oído: usted, vaya a su provincia y tráiganos un pedido para intervenir al Poder Legislativo. A los diputados provinciales —muchos de ellos están en las galerías de este recinto y pertenecen al peronismo— les han dicho: ustedes, vayan a su provincia y promuevan cuanto antes el juicio po-

lítico al gobernador. De esa forma enfrentaron al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y para impedir la regularización del régimen institucional cuando la Legislatura se decidió a poner coto a los excesos del Poder Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior se le quitó el apoyo de la Policía, interfiriendo ilegalmente, cuando la provincia no tenía allanada su autonomía provincial, para de esa forma crear las condiciones que hicieran posible, aunque sea aparamentamente, la procedencia del proyecto que estamos tratando esta noche con tanta orfandad de argumentos de parte del sector mayoritario que lo apoya.

Por último, señor presidente, debo decir que los señores diputados que van a votar este proyecto de ley no conocen el feudo que es Formosa. Nosotros, que vivimos en la capital de la provincia, cuando salimos de ella hacia cualquiera de los puntos cardinales, tenemos que recorrer en automóvil una hora o una hora y media sin encontrar una sola población. Todos son campos ganaderos, grandes estancias con personeros aquí en la Capital, con poderosísimas influencias, que son también los que tratan de terminar con la última defensa que ofrece el pueblo formoseño.

Con la intervención, ya dentro de muy poco, vamos a tener que entrar por ese camino tortuoso de sentirnos un pueblo sin ninguna garantía. Para la provincia de Formosa la garantía de la Constitución será letra muerta, porque irá allí un interventor, irán treinta o cuarenta amigos del Poder Ejecutivo que no los puede ubicar en la metrópoli, y sentarán allá sus reales y gobernarán sin el control de la Legislatura, donde la oposición es hoy mayoría, porque de 25 diputados sólo 12 son peronistas. También gobernarán sin el control del Tribunal de Cuentas, y por último, ya que no queda duda de que quieren el totalitarismo de un gobierno de facto, terminarán con el último refugio de las garantías que es el Poder Judicial.

Por eso esta noche, consternados y abrumados, venimos a denunciar la infamia que significa llevar a esta provincia a tal sacrificio, que no será sólo de ella, porque después se iniciará el mismo sacrificio con otras provincias que ya están en el banquillo de los acusados, que ya están en capilla esperando una situación como ésta, porque el peronismo, fracturado como está en sectores ideológicos, tiene un enfrentamiento interno y en este momento es la oligarquía vacuna peronista la que está enfrentando a los obreros.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Han querido así impedir que el vicegobernador de la provincia, Ausberto Ortiz, de extracción obrera, llegue a la gobernación, porque sabían que iba a terminar con el privilegio de diez sociedades anóni-

mas, a las que hicieron referencia varios señores diputados y cuyos nombres me voy a permitir leer.

Estas sociedades son las siguientes: Nougues Hermanos Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Agrícola y Ganadera; Santa Catalina, Estancias Sociedad Anónima; Compañía de Navegación Ganadera y Comercial; Ganados Sociedad Anónima; Estancias El Ombú, Sociedad Anónima Inmobiliaria y Ganadera; Timbó, Sociedad Anónima Ganadera y Forestal; Santa Olga, Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Agrícola y Ganadera; Villeta, Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Agropecuaria; Ingpevial, Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Minera; Estancias El Arbol Solo, Sociedad Anónima Ganadera.

A estas sociedades se le expropiarían 90.000 hectáreas de tierras aptas para agricultura de las 400.000 que poseen en propiedad para ganadería en los mejores campos, en las zonas más húmedas de la provincia de Formosa, con lo que están frenando el avance de la provincia mientras hay 1.200 familias de campesinos, labriegos sin tierra, reunidos en un poderoso movimiento, que andan deambulando y sintiéndose como parias en su propia provincia y clamando porque no tienen dónde ir a trabajar. Estos hombres de campo, estos agricultores, tropiezan de pronto con esta amenaza cuando se les estaba por solucionar el problema de tierras, porque de no mediar la intervención federal a la provincia en la semana próxima se les haría justicia. En cambio ahora, se yerguen sombrías perspectivas para, incluso, los ocupantes legítimos de tierras fiscales; sin control de la Legislatura y sin justicia inamovible, vendrán los desalojos injustos, y los injustos acomodos.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Exhorto a los colegas diputados del sector oficialista que vuelvan a ser los hombres de avanzada revolucionaria que fueron antes del 11 de marzo, porque se están transformando en conservadores para perjuicio del país.

—Hablan varios señores diputados simultáneamente, y suena la campana.

8

#### CUESTIONES DE PRIVILEGIO

**Sr. Díaz Ortiz.** — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente (Odena).** — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Por segunda vez en el curso de este debate, lamentablemente, tengo que plantear una cuestión de privilegio. Y así las califico porque estas cuestiones son producto de

un desmesurado tono que la bancada de la oposición ha pretendido darle a este debate, desafiándose, adjetivando y creando situaciones de orden personal que de ninguna manera ni yo ni mis compañeros de bancada estamos dispuestos a admitir.

En el primer caso, el responsable del planteamiento de la cuestión de privilegio se ha rectificado...

**Sr. Labella.** — Aclarado, señor diputado. (Risas.)

**Sr. Díaz Ortiz.** — Estamos ante el mismo caso. Son numerosos los agravios vertidos por el señor diputado de la bancada opositora a punto tal que del cúmulo de adjetivaciones y de planteos que ha hecho recuerdo uno que fundamentalmente me afecta. El señor diputado de la bancada opositora dijo que nosotros recibimos órdenes, sin aclarar de quién, con lo cual ha afectado en forma singular no sólo al diputado que habla, sino a todos sus compañeros.

Solicito que de la versión taquigráfica de esta sesión se saque copia de sus palabras, y que las mismas sean giradas a la comisión que corresponde.

**Sr. Presidente (Odena).** — Así se hará, señor diputado. Las constancias a que ha hecho referencia el señor diputado pasarán a la comisión respectiva.

**Sr. Galván.** — La Presidencia tiene que poner a consideración de la Cámara si la cuestión de privilegio que plantea el señor diputado es pertinente. Así lo establece el artículo 109 del reglamento.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente (Odena).** — Al término de la intervención del señor diputado Díaz Ortiz, advertí que había asentimiento general para que pasara a la comisión respectiva la cuestión de privilegio planteada; pero si el señor diputado insiste en que se ponga a votación, así lo hará la Presidencia.

Se va a votar si la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Díaz Ortiz pasa a la comisión respectiva.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Galván.** — Pido que se rectifique la votación.

**Sr. Presidente (Odena).** — Se va a rectificar la votación.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Odena).** — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado Guerrero.

**Sr. Guerrero.** — Recogiendo las palabras del señor diputado que en este debate ha manifes-

tado que diputados del interior están traicionando a su propia provincia, voy a plantear una cuestión de privilegio. Como hombre del interior no puedo aceptar esas expresiones, por lo que solicito que las palabras vertidas pasen a la comisión correspondiente porque los argumentos de la oposición de ninguna manera son de carácter doctrinario.

Además, desafío públicamente al señor diputado de la bancada opositora a hacer un debate sobre cuestiones ideológicas con respecto a lo que significa el federalismo en nuestro país.

**Sr. Presidente (Odena).** — Siguiendo el mismo procedimiento adoptado en la anterior cuestión de privilegio, corresponde votar si la que plantea el señor diputado Guerrero pasa a comisión.

**Sr. Lorences.** — Pido la palabra para plantear un problema de tipo reglamentario.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Lorences.

**Sr. Lorences.** — Solamente corresponde votar una cuestión de privilegio en el caso de que quien la plantea pida que se le otorgue carácter preferente en el mismo momento. Si, como en el caso que planteaba anteriormente el señor diputado Díaz Ortiz, se pide el pase a comisión, no corresponde que se vote. El artículo 109 es suficientemente claro al respecto.

**Sr. Labake.** — Explíqueme al señor diputado Galván.

**Sr. Galván.** — No necesito explicaciones.

**Sr. Presidente (Odena).** — Por Secretaría se dará lectura al artículo 109 del reglamento.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — Dice así: «Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aun al que esté en debate, y se tomarán en consideración en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior.

«Las comprendidas en los cinco primeros incisos y la del último serán puestas a votación sin discusión.

«Las cuestiones a que se refiere el inciso 6º (disposición que menciona las cuestiones de privilegio) son exclusivamente aquellas que se vinculan con los privilegios que la Constitución otorga a la Cámara y a cada uno de los miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro. Para plantearlas, los diputados dispondrán de diez minutos, debiendo enunciar en forma concreta el hecho que las motiva. La Presidencia las someterá de inmediato, con desplazamiento de cualquier otro asunto que se esté considerando, y sin debate, a votación del cuerpo, quien decidirá por el voto de los dos tercios si éstas tienen carácter preferente. Caso afirmativo, se entrará a considerar el fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con la discusión; en caso contrario, se pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.»



**Sr. Presidente** (Odena). — Quiere decir que la votación sólo corresponde para el tratamiento sobre tablas, a cuyo efecto se requieren los dos tercios.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Yo he solicitado el pase a comisión.

**Sr. Presidente** (Odena). — Las cuestiones de privilegio planteadas pasarán, en consecuencia, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

## 9

## INTERVENCION A FORMOSA

**Sr. Presidente** (Odena). — Corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado Rolando.

**Sr. Bonás.** — Como he sido aludido por un señor diputado, pido la palabra para contestarle.

**Sr. Presidente** (Odena). — ¿El señor diputado Rolando concede la interrupción?

**Sr. Rolando.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Bonás.

**Sr. Bonás.** — Doctor Fernández Bedoya...

**Sr. Presidente** (Odena). — Sírvase dirigirse a la Presidencia, señor diputado.

**Sr. Bonás.** — Muchas gracias por lo de brillante maestro, pero no me considero tal; he sido un simple maestro, consciente de la enorme responsabilidad que tenía como tal; creo que cumplí honradamente. Como premio a esa brillantez, en el año 1955 fui exonerado por causas políticas. Posteriormente volví a la escuela.

Ahora defendiendo a Formosa, a la que sirvo desde hace treinta y siete años. Y en este momento, al apoyar la intervención federal a la provincia, creo que la sigo sirviendo, sobre todo a su gran pueblo.

Me consta que la gran mayoría del pueblo de Formosa está sorprendida y asombrada por todo lo que está ocurriendo. Los señores diputados han de coincidir conmigo en que se suscitan cosas inconcebibles. Aquí se ha defendido a uno de los poderes, al Judicial, que es el producto del gobierno que hemos derrotado hace poco tiempo.

**Sr. Labake.** — Por eso lo defienden.

**Sr. Presidente** (Odena). — La Presidencia solicita al señor diputado Labake se sirva no interrumpir.

**Sr. Bonás.** — Por rara paradoja, ese Poder Judicial obtiene después el acuerdo del Poder Legislativo de Formosa, con la oposición del Frente Justicialista, pero con el apoyo del MID y del radicalismo. Además, se trató de un acuerdo pedido por un gobernador peronista. Ahora está enfrentado ese poder con el gobernador que pidió el acuerdo. Por eso, reitero que ocurren cosas raras en Formosa.

Estoy convencido de que la intervención no nos conviene del todo, pero sé también que habrá de llevar mucha tranquilidad al pueblo de Formosa.

**Sr. Presidente** (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Rolando.

**Sr. Rolando.** — Señor presidente: resultan fundamentales en este debate las palabras del último representante del radicalismo, porque si faltaba algún argumento que justificara la intervención, precisamente lo ha dado el diputado preopinante.

Al pretender defender una posición tomada por su bloque, el señor diputado ha incurrido en graves errores. En opinión de los hombres que integramos el Frente Justicialista de Liberación no ha hecho otra cosa que desmentir la actuación de la Unión Cívica Radical durante todo este tiempo, porque no solamente se ha permitido poner en duda los conocimientos de los diputados frentistas, sino que se dirigió también al propio Poder Ejecutivo y a la filosofía que lo inspira. Esto, en alguna medida, va clarificando y ayudando al proceso, porque a medida que transcurra el tiempo vamos a ir conociéndonos un poco más. En verdad, nosotros en general teníamos esperanza y fe en la primera minoría de esta Honorable Cámara. Pero cuando se suscitan pequeñas discusiones, lamentablemente a muchos diputados les salen los pelos gorilas que tienen y así asumen posiciones que nada dicen en favor de lo que sustentan: que están por el proceso de reconstrucción y liberación. Por el contrario, están con la dependencia y están consubstanciados con una mentalidad vacua.

**Sr. Rabanal.** — Esa afirmación corre por su cuenta.

**Sr. Galván.** — Eso es un agravio.

**Sr. Rolando.** — Tómelo como quiera.

**Sr. Galván.** — Me reservo el derecho de plantear una cuestión de privilegio.

**Sr. Rolando.** — Es libre de plantearla, si así lo desea.

**Sr. Day.** — Quiere hacer valer la fuerza.

**Sr. Rolando.** — Quiero hacer valer el derecho del pueblo que votó libremente el 11 de marzo. Fue él quien ha colocado a esta inmensa mayoría en el Congreso de la Nación. No estamos aquí para defraudar al pueblo que nos ha votado. Y si hoy constituimos esta mayoría no fue porque así lo quiso Lanusse y la dictadura, sino el pueblo. Y hay algunos a quienes esta realidad les duele.

Pero más allá de estos detalles, tal vez dentro de poco tiempo, quienes hoy hablan en representación del pueblo formoseño y dicen que éste está en contra de los lineamientos del justicialismo, deban enfrentar elecciones en la provincia de Formosa.

**Sr. Day.** — Entonces, póngalo claramente en la ley.

**Sr. Rolando.** — Hasta ese momento me reservo mi juicio. Luego que se celebren esas elecciones, vamos a ver quién es quién, y quién representa al pueblo. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Fuentes.

**Sr. Fuentes.** — Señor presidente, señores diputados: yo quisiera tener la voz de algunos señores diputados para hacerme escuchar tan bien como ellos. Lamentablemente no es así, no obstante lo cual trataré de hacerme escuchar lo mejor posible con la poca voz que tengo.

Se ha deslizado aquí una cantidad de argumentos de tipo doctrinario, jurisprudencial y político. La verdad es que de los argumentos esgrimidos de este origen se puede sacar cualquier tipo de conclusión. No nos engañemos. La realidad política es una sola, y lo único que hasta ahora no se ha mencionado, y ha quedado en el más cruel de los olvidos, es que esta intervención se resuelve sobre una provincia en la que el partido gobernante es, paradójicamente, mayoría. Esta es una cuestión que desarma todos los argumentos. Hasta este momento se han hecho valer una cantidad de ellos, que fincan sobre una cosa que es la que conmueve los sentimientos, ánimo y sensibilidad de todo hombre nacido en la República Argentina, que es el avasallamiento de las autonomías provinciales. Bien, señor presidente; en este caso ese argumento no es procedente. Aquí no hay avasallamiento de la autonomía provincial porque aquí no hay una intervención irritativa de una mayoría sobre una minoría. En este caso se trata de un conflicto, en última instancia —no quiero entrar a caracterizar el problema—, entre una mayoría y su propio régimen partidario llegado al gobierno en una provincia argentina.

El problema que irrita, que lastima y conmueve es el de la prepotencia y el del avasallamiento, la intervención del poder central a una provincia en la que gobierna una fuerza política que no es el partido oficial que gobierna en la Nación.

Entiendo los argumentos de la minoría; comprendo los de la mayoría. Me resigno a exponer nada más que esta amable hipótesis de trabajo, tratando de tranquilizar y aquietar los espíritus. Aquí se trata de una intervención decretada por quien tiene la mayoría absoluta en el gobierno, que interviene una mayoría en su propia sede política, en este caso una provincia. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Colello.

**Sr. Colello.** — Estimando que se han agotado los fundamentos jurídicos que acreditan la viabilidad de la intervención a los tres poderes de la provincia de Formosa, hacemos nuestros los conceptos vertidos por los diputados Musacchio, Suárez, Cárdenas y Sueldo que, con profundidad, han fijado el sentir y el pensamiento de quienes no aceptamos los fundamentos de esta injusta intervención a la provincia de Formosa.

Por eso, y con un auténtico sentido federalista, la bancada de Orientación Legalista votará negativamente este proyecto dejando fijada su posición con estas palabras:

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Porto.

**Sr. Porto.** — Señor presidente: nosotros, con gran dolor de argentinos y de peronistas que hemos sufrido dieciocho años de persecución del imperialismo y de la oligarquía, intervenimos una provincia que está gobernando nuestro partido por una mayoría que dobló al que entró en segundo lugar.

La Constitución Nacional garantiza en el artículo 105 a las provincias la facultad de darse sus propias instituciones y que se rijan de acuerdo a ellas a condición de que cumplan con lo dispuesto en el artículo siguiente, el 106, que se remite al artículo 59 de la Constitución, que establece que «cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones».

El artículo siguiente, que lleva el número 69, dice: «El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubieran sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia».

No se necesita ser un profesor de derecho público, como lo es quien habla, para saber —porque lo hemos aprendido todos en la escuela primaria— que el gobierno federal puede intervenir en las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno.

Todos los que son juristas conocen que esta forma que tomó el artículo 69 no proviene de la sanción dada en 1853, sino de la reforma a la Constitución Nacional del año 1860.

Quiero señalar que el gobierno del dignísimo señor teniente general Juan Perón, respetuoso del republicanismo y de la democracia, respetuoso del ejercicio libre de cada uno de los poderes del Estado, ha remitido solamente los antecedentes que obraban en manos del Poder Ejecutivo para que el Congreso Nacional, con entera libertad, adoptara la medida que considerara adecuada, si alguna había que tomar.

Esto es un índice más del republicanismo y del respeto por todos los sectores que tiene el digno jefe de mi movimiento.

Quiero destacar, refiriéndome quizás al único constitucionalista de mi patria que respeto, que es el doctor Joaquín V. González, que para que una provincia goce del sistema republicano de gobierno se requiere que existan en ella tres requisitos fundamentales. El primero, que rija una armonía entre las instituciones de ese Estado; el segundo, que ese Estado se maneje de acuerdo con los principios, declaraciones y ga-

rantías de la Constitución Nacional, y tercero, que actúen en él libremente los tres poderes que el sistema republicano de gobierno, desde Montesquieu y Locke, tiene en todos los países del mundo.

Por una larga jurisprudencia parlamentaria y judicial, corresponde al Poder Legislativo el remedio federal en las provincias, aunque por alguna interpretación también se ha entendido que el Poder Ejecutivo podía ejercerlo en ciertos casos.

Quiero destacar que entre 1853 y 1955 se han dictado en mi patria, sin contar las producidas por los gobiernos de facto, ciento cuarenta y ocho intervenciones federales a las provincias argentinas. De ellas, solamente cuarenta y seis lo fueron por ley del Congreso y ciento dos se resolvieron por un simple decreto del Poder Ejecutivo. De esas desgraciadas ciento cuarenta y ocho intervenciones, el récord lo tiene la provincia de San Juan, que fue intervenida en quince oportunidades.

Estamos, en la bancada mayoritaria, respaldados por siete millones y medio de voluntades argentinas. Estamos haciendo un gobierno del pueblo, por decisión soberana de éste. Nos encontramos —y ése es el deseo de nuestro jefe— en un Estado de derecho y de respeto por la seguridad jurídica; somos respetuosos de las declaraciones, derechos y garantías de nuestra Carta Magna, de los derechos humanos que fueron proclamados por las Naciones Unidas en el año 1948 y de las libertades ciudadanas de que gozan todos los pueblos civilizados del mundo.

En apoyo a la magnífica exposición que realizará el señor diputado García, en representación de nuestra Bancada y como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, adhiero a todos los fundamentos que él ha dado apoyando la sanción del Honorable Senado de la Nación a la iniciativa presentada por el señor senador Fonrouge.

Y esto lo digo en función de lo dispuesto por los artículos 59, 69, 67, inciso 28, 105 y 106 de la Constitución Nacional.

Se ha dicho en el recinto, señor presidente, que se está avasallando la autonomía y la independencia de una provincia argentina gobernada por nuestro partido. Y se ha argumentado por medio de artículos mal leídos de la Constitución de la provincia de Formosa. Quiero señalar que el artículo 110, inciso 1º, de la Constitución de esta provincia, que es del año 1957, dispone que para llevar adelante el juicio político al gobernador es necesaria la citación y también la audiencia del interesado si éste la pidiera. Es indispensable la citación, que no se ha hecho en la Legislatura formoseña.

También deseo señalar, remitiéndome a esta misma Constitución provincial, que en la última parte del artículo 116, luego de siete artículos que reglamentan el juicio político, se determina que la ley reglamentará estas bases. Es decir,

que esta Constitución no es operativa hasta que se dicte la ley que la reglamente. Y esta ley no ha sido dictada; fue vetada por el Poder Ejecutivo cuando se hizo la reglamentación del juicio político. Por su insistencia, la Legislatura la convirtió en ley. Pero para que entrara en vigencia hacía falta su publicación en el órgano oficial y que transcurriera el tiempo de la *vacatio legis*. Y aquí deseo rectificar las expresiones de algún abogado que hace un momento nos ha estado enseñando, como si fuéramos niños de escuela, que las leyes quedan sancionadas y vigentes cuando obtienen su sanción, cuando lo cierto es que para ello, como ya he dicho, deben cumplirse dos requisitos más: la publicación que establece el artículo 29 del Código Civil y el tiempo de la *vacatio legis* para recién entrar en vigencia. (Aplausos.)

Y entonces, cuando la Legislatura de la provincia de Formosa consigue que asista el hermano del señor diputado que con tanta vehemencia nos ha hablado de que debe respetarse la autonomía de ese Estado provincial, que está gobernado por nosotros, por nuestro partido, ese presidente de la Corte ha asistido a una reunión que carece de validez porque no estaba vigente la ley reglamentaria del juicio político, porque no había sido citado el acusado y porque ese presidente era un hombre nombrado por la revolución liberticida que se encaramó en el gobierno en 1966 y hacía muy pocos meses, en este año, había obtenido el acuerdo precisamente por el pliego enviado por el señor gobernador Gauna, en agradecimiento de lo cual preside la asamblea que lo va a destituir. (Aplausos.)

Y que no se diga, señor presidente, que la cuestión no ha quedado terminada en el ámbito provincial porque el artículo 124 de la Constitución de la provincia dispone un procedimiento para la resolución de los conflictos. Dicho artículo, que se refiere a las atribuciones del Superior Tribunal de Justicia, dice en su inciso 1º: «Conocer y resolver originaria y exclusivamente en las cuestiones de competencia entre los poderes públicos de la provincia». Es decir que no hay remedio al conflicto de poderes dentro del ámbito provincial, porque el Superior Tribunal de Justicia sólo tiene facultades para dirimir cuestiones de competencia entre los poderes públicos de la provincia o entre los municipios y estos poderes.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Lea la Constitución provincial el señor diputado.

**Sr. Porto.** — He leído la Constitución provincial.

**Sr. Fernández Bedoya.** — Lea el artículo 112.

**Sr. Porto.** — El Poder Judicial de la provincia también debe ser intervenido junto con los poderes Ejecutivo y Legislativo. El gobernador de la provincia ha venido a Buenos Aires y enviado notas pidiendo la intervención de la Legislatura y ésta, en un acto híbrido y nulo, presidida por un hombre que no podía

presidirle y que debió haberse negado a hacerlo, declaró suspendido al gobernador. Esto se hizo en virtud de una ley que no estaba vigente porque le faltaba la publicidad y que transcurriera el tiempo de la *vacatio legis*, porque además no había sido citado el gobernador, porque éste había planteado un recurso ante la Suprema Corte provincial y porque el señor presidente de esa Asamblea Legislativa, nombrado *manu militari* por la dictadura y hermano del diputado que hace un momento habló con tanta vehemencia, dirigió una nota insolente al gobernador Gauna, quien había pedido el acuerdo que aquél obtuvo con el apoyo del MID y de los radicales contra todos los votos del justicialismo, en una justa que arrojó trece votos contra doce.

Tenemos que acertar con el diagnóstico en esta provincia, y el Poder Ejecutivo, actuando como cirujano, tendrá que extirpar el mal que sufre el republicanismo.

Yo no quiero dejar pasar por alto las afirmaciones hechas por algunos diputados que merecen ser contestadas, porque hay otras que ni siquiera eso merecen. El diputado Musacchio, por quien siento un gran respeto, ha dicho que aquí jugaba el artículo 124, inciso 1º, de la Constitución de Formosa. Acabo de leer hace un momento esa disposición y es claro que en virtud de ella el Superior Tribunal de Justicia sólo puede dirimir cuestiones de competencia entre los poderes, pero no puede solucionar el pleito actualmente planteado.

Quiero contestarle al mismo señor diputado que el Poder Ejecutivo no duda de que esa provincia necesita la intervención, sino que el Poder Ejecutivo, ejercido por un hombre que ha dado justicia social a su patria; que ha dado brillo y dignidad al hombre argentino; que ha defendido la soberanía e independencia económica de nuestra Nación; que es jefe de todos, de los opositores y de los oficialistas que hemos sufrido cárceles y torturas; que ha sido respetuoso de las opiniones de los demás, sin querer influir sobre ellos, ha mandado los antecedentes para que cada uno de los señores diputados y senadores tome su propia determinación. Juro que estoy hablando sin que nadie me haya indicado cómo tengo que hacerlo, ni siquiera el jefe de mi bancada. (Aplausos.)

El señor diputado Leopoldo Suárez, de quien fui compañero hace muchos años en la Facultad de Derecho de La Plata, ha dicho que en Formosa ningún gobernador, desde 1953 a la fecha, ha terminado su mandato. Y yo digo refrescando la memoria de todos, que durante la primera presidencia del señor Hipólito Yrigoyen, a quien admiro, y de cuyo partido he sido afiliado antes de que se fundara el peronismo, se avasalló la autonomía de las 14 provincias entonces existentes, en 19 oportunidades. De esas 19 intervenciones, cuatro fueron por ley del Congreso y

quince por simples decretos. De esas 19 intervenciones, cuatro se produjeron en la provincia de San Juan.

Nosotros no votamos por verticalidad, sino por convicción de argentinos. Votamos porque somos hombres con dignidad. Hemos enfrentado a la dictadura, hemos estado presos en las cárceles y hemos defendido gratuitamente a los presos políticos cuando nadie quería defenderlos, ni aún por los más altos honorarios. Somos hombres que hemos expuesto la vida. Estamos aquí para defender a la patria en toda su integridad, para defender los principios republicanos por los que nos hemos expuesto, para defender los derechos humanos, las libertades democráticas. Creemos, desgraciadamente, que en Formosa el sistema republicano de gobierno debe ser corregido a fin de restablecerlo.

Quiero también decirle al señor diputado Suárez que ahí no terminan las intervenciones que realizó su partido, porque durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, entre 1922 y 1928, hubo doce intervenciones más, y también durante la segunda presidencia de Yrigoyen, entre 1928 y 1930, otras dos.

Quiero contestar también al señor diputado Falabella, que es mi amigo y con quien siempre he mantenido gran cordialidad dentro y fuera del recinto, que él no tiene derecho a hacerse eco de cosas que escucha en la calle para largarlas en este recinto manchando la reputación de gente honorable, aunque algún diputado de mi bancada haya dicho que puede que eso no sea injuria, difamación o calumnia.

Yo afirmo que sí lo es, y que lo único que lo salva de ser procesado es que el artículo 60 de la Constitución libera la opinión parlamentaria en el uso del ejercicio del mandato. Pero quiero también recordarle a todos los señores diputados que hay otro artículo de la Constitución, que lleva el número 62, que permite a la Cámara corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta y aun separarlo de su seno.

**Sr. Falabella.** — Me está amenazando.

**Sr. Porto.** — Es lo que dice la Constitución, y nosotros no quisiéramos nunca tener que ejercer contra ningún opositor estos principios establecidos en nuestra Carta Magna y que ellos contribuyeron a convalidar en el año 1957 con motivo de la reforma de la Constitución en ese año.

**Sr. Day.** — Usted va a abrir la lista...

**Sr. Porto.** — El señor diputado Falabella ha dicho que su partido siempre fue contrario a las intervenciones. Seguramente en esto hay un error de lenguaje o él habla en chino y yo no lo entiendo, porque en los años en que gobernó su partido se votaron hasta la presidencia del señor Victorino de la Plaza, en 1916, nada menos que ochenta y dos intervenciones federales a provincias. (Aplausos.)

**Sr. Falabella.** — ¿Me concede una interrupción, señor diputado?

**Sr. Porto.** — Quiero señalar que el partido conservador desde 1930 hasta 1942 hizo otras trece intervenciones, es decir que han sido noventa y cinco sobre un total de ciento cuarenta y ocho que registra la República hasta 1955.

**Sr. Falabella.** — ¿Me concede una interrupción, señor diputado?

**Sr. Porto.** — No acepto interrupciones hasta que termine mi exposición. Cuando termine acepto, como es mi costumbre, cualquier interrupción u observación de cualquier tipo que contestaré muy complacido. (*Risas y aplausos.*)

Señor presidente: no quiero entrar a hacerme el maestro y a averiguar si es primero el hijo o la madre. No quiero entrar en una cuestión de maternidad o de filiación. Quiero solamente recordarle al señor diputado Suello lo que he dicho al principio, que no basta la sanción y la promulgación para que una ley esté vigente: hacen falta dos requisitos más, que son la publicación en el Boletín Oficial y el transcurso del plazo de ocho días que determina el artículo 29 del Código Civil, salvo que la ley expresamente determine otro plazo.

Considero ya que no debo abundar en otros aspectos. Solamente diré al señor diputado Day, por quien tengo también una alta estima, que yo igualmente estoy preocupado por la suerte del Poder Judicial de la provincia de Formosa y por la muerte de los otros dos poderes. Pero en todo caso no podemos estar ni más ni menos preocupados que por las ciento cuarenta y ocho intervenciones que se han decretado en nuestra República hasta 1955, sin contar las que han hecho los gobiernos de facto, que suman otras tantas, ni las posteriores a ese año.

**Sr. Falabella.** — ¿El cómputo de 1946 a 1955, no lo hace, señor diputado?

**Sr. Porto.** — Yo siempre he tenido un espíritu de independencia a pesar de que he acatado la verticalidad del jefe argentino, y quiero señalar que esa verticalidad la acato porque a pesar de mi independencia lo reconozco como un genio político, como un gran argentino y como un hombre superior.

Por eso, señor presidente, a pesar de que muchas veces me rebelo por pequeñas cosas dentro de mi bloque porque tengo una formación un poco díscola, no puedo dejar de manifestar que esta Cámara con la sanción que descuento ha de dar al proyecto de ley venido en revisión del Senado, podrá decir, como dijo Cicerón alguna vez cuando se le preguntó si había respetado todas las leyes de la República: «Juro haber salvado la República». (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean, besan y felicitan al orador.*)

**Sr. Castellano.** — Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Castellano.

**Sr. Castellano.** — En mi carácter de diputado nacional por la provincia de Formosa solicito permiso para retirarme y asumir una posición personal que me libere de la obligación de votar el proyecto de intervención que allana la autonomía provincial y la soberanía popular de mi provincia, que juré defender cuando me hice cargo de mi banca, pues tengo el deber ineludible, como hijo autóctono de mi provincia, de sentirlo y hacerlo así.

Antes de retirarme me voy a permitir hacer una exhortación a todos mis colegas, que es también un deseo, en el sentido de que la intervención que se realiza a mi provincia sea para afianzar los poderes republicanos y el régimen federal, y no como ha ocurrido con otras intervenciones de las que tenemos triste experiencia. También estimo de fundamental importancia que en corto plazo se allanen todas las dificultades para que los formoseños puedan tener nuevamente la soberanía popular y el régimen federal que establece la Constitución. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Odena).** — Se va a votar en general el despacho de la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente (Odena).** — En consideración en particular el artículo 19.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

**Sr. Presidente (Odena).** — En consideración el artículo 29.

Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

—El artículo 3º es de forma.

**Sr. Presidente (Odena).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley (1).

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Es la hora 4 y 5 del día 19 de noviembre.

MIGUEL J. SILVA REY.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

10

APENDICE

SANCIONES DE LA HONORABLE CAMARA

1

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Concédese al excelentísimo señor presidente de la Nación el permiso que solicita para ausentarse del país en el período comprendido hasta el 31 de diciembre del corriente año, inclusive, cuando razones de gobierno lo indiquen.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

2

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Declárase intervenida la provincia de Formosa a los fines de su normalización institucional y de la reorganización de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Art. 2º — Los gastos que ocasione el cumplimiento de esta ley se harán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.